

Universidad Andina Simón Bolívar

Sede Ecuador

Área de Derecho

Maestría en Derechos Humanos y Exigibilidad Estratégica

Mención en Litigio Estructural

**Mecanismos de impunidad sobre graves violaciones de derechos
humanos en la Frontera Norte de Ecuador**

El caso de Rubén Darío Santander Guerrón

Jorge Acero González

Tutor: Ramiro Ávila Santamaría

Quito, 2018



Cláusula de cesión de derecho de publicación

Yo, Jorge Acero González autor del trabajo intitulado **Mecanismos de impunidad sobre graves violaciones de derechos humanos en la Frontera Norte de Ecuador: el caso de Rubén Darío Santander Guerrón** mediante el presente documento dejo constancia de que la obra es de mi exclusiva autoría y producción, que la he elaborado para cumplir con uno de los requisitos previos para la obtención del título de Magíster en Derechos Humanos y Exigibilidad Estratégica en la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.

1. Cedo a la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, los derechos exclusivos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, durante 36 meses a partir de mi graduación, pudiendo por lo tanto la Universidad, utilizar y usar esta obra por cualquier medio conocido o por conocer, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio económico. Esta autorización incluye la reproducción total o parcial en los formatos virtual, electrónico, digital, óptico, como usos en red local y en internet.

2. Declaro que en caso de presentarse cualquier reclamación de parte de terceros respecto de los derechos de autor de la obra antes referida, yo asumiré toda responsabilidad frente a terceros y a la Universidad.

3. En esta fecha entrego a la Secretaría General, el ejemplar respectivo y sus anexos en formato impreso y digital o electrónico.

Quito, 14 de mayo de 2018.

Firma:

Resumen

La presente investigación tiene por objeto contribuir a la visibilización de la situación de las personas que viven en la Frontera Norte de Ecuador con Colombia y las prácticas basadas en la seguridad nacional que ha desarrollado el Estado ecuatoriano en los últimos 20 años, y específicamente en el periodo de 2008 a 2016, en el marco de las cuales se han producido graves violaciones a derechos humanos, como detenciones arbitrarias, deportaciones ilegales, torturas y ejecuciones extrajudiciales, que han permanecido en la impunidad, por la activación de una serie de mecanismos que han contribuido a la negación del derecho a la verdad a las víctimas y a la sociedad. Estos hechos se inscriben en una estrategia de defensa de la soberanía territorial y militarización de la zona de frontera, justificada institucionalmente por el riesgo del desbordamiento del conflicto colombiano y en base a la creación de un imaginario social adverso a la población de la frontera.

Para analizar estas situaciones se presenta el contexto de frontera y su evolución, a partir de entrevistas a personas y organizaciones que trabajan en la zona; y se ubican los principales estándares internacionales de protección de derechos humanos relativos a las obligaciones del Estado en relación a la no impunidad, así como los derechos, de las personas y comunidades, a la verdad, el acceso a la información y la reparación integral.

A partir de estos elementos se analiza el caso emblemático de la muerte de Rubén Darío Santander Guerrón, ocurrida en el marco de un supuesto enfrentamiento entre Ejército ecuatoriano y un grupo armado colombiano desconocido; y a partir del mismo se plantea una propuesta de litigio estratégico que, junto a la implementación de vías jurídicas adecuadas, incluye acciones sociales, políticas, educativas y comunicativas, basadas en el empoderamiento y participación social y comunitaria. De esta forma, a partir de un caso concreto, pero con efectos generalizables a otros similares, se busca contribuir al conocimiento de la verdad, la reparación individual y social y la erradicación de la impunidad en la Frontera Norte.

Palabras Clave: Sucumbíos, seguridad, graves violaciones a los derechos humanos, impunidad, litigio estratégico, reparaciones

Tabla de Contenido

Introducción	
Capítulo Primero: La responsabilidad del Estado en las violaciones a derechos humanos	8
1. Los derechos humanos, las violaciones y graves violaciones a los mismos en la doctrina y jurisprudencia nacional e internacional	8
2. Obligación de los Estados a investigar las violaciones a derechos humanos	15
3. La obligación de luchar contra la impunidad	19
4. La obligación de reparar	21
5. El derecho a la verdad	22
6. El derecho de acceso a la información	24
Capítulo Segundo: Violaciones a derechos humanos en Sucumbíos y mecanismos de impunidad en casos de presunta responsabilidad del Ejército	30
1. Sucumbíos, tierra de frontera	30
2. Evolución de la situación en la frontera de Sucumbíos	31
2.1. Antes del Plan Colombia	31
2.2. La implementación del Plan Colombia y sus efectos en Sucumbíos entre 1998 y 2007	32
2.3. La frontera de Sucumbíos entre 2008 y 2016	39
3. Violaciones a derechos humanos en Sucumbíos	46
4. Análisis y caracterización de mecanismos de impunidad en los casos de violaciones a derechos humanos en Sucumbíos	54
Capítulo Tercero: la muerte de Rubén Darío Santander Guerrón: responsabilidades del Estado y propuesta de litigio estratégico	62
1. Rubén Darío Santander Guerrón: muerte e investigación	62
2. Responsabilidad del Estado en el caso de Rubén Darío Santander	68
3. Propuesta de proceso de exigibilidad estratégica en el caso de Rubén Darío Santander	77
3.1. Propuesta de litigio estratégico	83
3.2. Reparaciones	90
Conclusiones	94
Bibliografía	
Anexos	

Introducción

La Frontera Norte de Ecuador ha estado marcada en la historia reciente por la existencia del conflicto colombiano y la presencia de grupos irregulares y fuerzas armadas de ambos países en la zona; especialmente a partir de la implementación del Plan Colombia, y su lucha para acabar con los grupos subversivos y los cultivos ilícitos.

Este plan ha generado graves repercusiones en Ecuador, como la llegada masiva de población refugiada, las fumigaciones aéreas y el incremento de la presencia militar en la zona; afectaciones que se mantuvieron e incrementaron entre 2008 y 2016, cuando Ecuador profundizó su estrategia de defensa de la soberanía en el territorio ecuatoriano.

Desde el año 2.000 en la zona de frontera, especialmente en la provincia de Sucumbíos, organizaciones de derechos humanos han documentado casos de graves violaciones a derechos humanos de población civil, muchas de ellas cometidas, presuntamente, por las Fuerzas Armadas ecuatorianas, ante las cuales se han activado diferentes mecanismos que han contribuido a mantenerlas en la impunidad.

Bajo este marco, la pregunta que ha guiado este proceso de investigación es: ¿cuáles han sido y cómo funcionan los mecanismos de impunidad que han utilizado específicamente las Fuerzas Armadas del Ecuador y las instituciones de control del Estado en casos de graves violaciones a derechos humanos en la provincia de Sucumbíos? Y sobre la base de esta determinación el presente trabajo formula una propuesta de litigio estratégico para enfrentar la situación de impunidad.

Para dar respuesta a esta pregunta de investigación se realizó una sistematización de las principales normas y estándares internacionales sobre la materia, así como la jurisprudencia y otros instrumentos, nacionales e internacionales, tanto del Sistema Universal como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Asimismo, se revisó literatura especializada y otras fuentes de información secundaria relacionadas a la Frontera Norte y en particular a Sucumbíos, ubicando los contextos, la evolución histórica de los mismos y las violaciones a los derechos humanos ocurridas. Además, se realizaron ocho entrevistas semiestructuradas, con las que se han abordado tres ámbitos fundamentales: evolución del comportamiento del Ejército ecuatoriano en la frontera; las razones de la impunidad de las violaciones a derechos humanos; y el desarrollo e inversión del Estado en la zona. Para ello se seleccionó a dos personas líderes y residentes en comunidades de la frontera (San Martín y Barranca Bermeja); a dos organizaciones sociales locales (Federación de Mujeres de Sucumbíos y Clínica

Ambiental) que tienen un trabajo histórico y permanente con las comunidades de frontera; a una organización no gubernamental de derechos humanos (INREDH) que durante años ha acompañado procesos de denuncia de violaciones a derechos humanos en la zona; a una persona local, que fue diputado de la provincia y Secretario Técnico de Plan Ecuador; a una persona de la Pastoral Fronteriza de la Iglesia de San Miguel de Sucumbíos, que desarrolla un programa de acompañamiento a la Frontera Norte desde 2008; y una entrevista a la madre de Rubén Darío, para conocer su historia, afectaciones familiares y perspectivas. Se debe señalar, que pese a haberlo solicitado, no se pudo entrevistar a funcionarios de la Defensoría del Pueblo y de la Fiscalía de Sucumbíos. Toda esta información ha sido contrastada con la experiencia de trabajo del autor en la Oficina de Derechos Humanos de Sucumbíos.

Los resultados de este proceso de investigación se concretan en tres capítulos. En el primero se presenta el marco teórico de derechos humanos, incluidas las violaciones y graves violaciones a los mismos, especialmente las ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias; las obligaciones y responsabilidades del Estado; y profundizando de forma especial en las obligaciones de: reparar, luchar contra la impunidad; e íntimamente relacionada con ellas, el derecho a la verdad y el de acceso a la información.

En el segundo capítulo se presenta la evolución del contexto de militarización y violencia en la zona, haciendo especial énfasis en los cambios registrados tras la llegada a la presidencia de la República del Ecuador del economista Rafael Correa, periodo que se inició con la aprobación de una nueva Constitución y el bombardeo de Angostura el 1 de marzo de 2008. Se detallan las violaciones a derechos humanos cometidas presuntamente por el Ejército ecuatoriano en contra de población de comunidades fronterizas y se analizan los mecanismos que propiciaron la impunidad; evidenciando las claras coincidencias con los detallados por la Comisión de la Verdad de Ecuador.

Finalmente en el capítulo tercero, se presenta el análisis del caso de la muerte de Rubén Darío Santander y las circunstancias que rodearon al mismo, así como la investigación realizada; considerándose este caso como emblemático por reunir muchas de las características de otros casos ocurridos en frontera, por la gravedad de los hechos y la impunidad e inacción del Estado ante los mismos. Sobre dicho caso se analizan cuáles han sido los incumplimientos estatales respecto a sus obligaciones de garantía del derecho a la vida, investigación adecuada, derecho a la verdad y acceso a la información, a la luz de la normativa y estándares internacionales de derechos humanos, y se determina la existencia de la responsabilidad estatal. Finalmente, se plantea una propuesta de

exigibilidad estratégica, con énfasis especial en el litigio estratégico que incluye un proceso de reparaciones individuales, familiares y sociales.

Esta tesis se cierra señalando unas conclusiones sobre los hallazgos más significativos, así como la viabilidad de la propuesta planteada para conseguir los objetivos establecidos.

Capítulo primero

La responsabilidad del Estado en las violaciones a derechos humanos

En este primer capítulo se desarrolla el marco teórico que permite en los siguientes capítulos el análisis de las violaciones a derechos humanos en la provincia de Sucumbíos. Para ello, se iniciará con un acercamiento al concepto de derechos humanos, incluidas las violaciones y graves violaciones a los mismos, y entre ellas especialmente las ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, y desarrollando las obligaciones y responsabilidades del Estado que se generan.

A continuación, en la línea de permitir la valoración sobre la actuación del Estado y sus agentes en los casos ocurridos en frontera, especialmente en el de la muerte de Rubén Santander, se profundizará de forma especial en la obligación de reparar del Estado, en la lucha contra la impunidad como una obligación incumplida por el mismo y generadora de la denegación de verdad a favor de las víctimas y de la sociedad; e íntimamente relacionada con ella, el derecho de acceso a la información en los casos de violaciones a derechos humanos.

1. Los derechos humanos y las violaciones y graves violaciones a los mismos en la doctrina y jurisprudencia nacional e internacional

Los derechos humanos son un logro obtenido mediante las constantes luchas históricas de las personas en diversos contextos socio económicos y socio culturales; estando íntimamente relacionados con la dignidad de la persona y la obligación de los Estados respecto a la misma. En este sentido, para Pedro Nikken el concepto de derechos humanos

Está referido al reconocimiento de que toda persona humana, por el hecho de serlo, es portadora de atributos autónomos que deben ser reconocidos y protegidos por el Estado. Ellos son inherentes al ser humano y no requieren de ningún título específico para adquirirlos. No resultan de una adjudicación o cesión del Estado, cuya función con respecto a ellos es de reconocimiento, respeto y protección.¹

Siendo por ello, universales, es decir, “inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico,

¹ Pedro Nikken, “La protección de los derechos humanos: haciendo efectiva la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales”, *Revista IIDH/ Instituto Interamericano de Derechos Humanos*, Núm. 52 (Julio-diciembre 2010), 55.

color, religión, lengua, o cualquier otra condición”;² y además, están indisolublemente interrelacionados, siendo interdependientes e indivisibles.

Por tanto, cuando nos referimos a derechos humanos partimos de que su base sustancial es, por un lado la dignidad inherente a la persona y su defensa; y por otro la existencia de límites al poder, siendo los derechos humanos el límite y objetivo fundamental del poder del Estado.³ Por ello,

El Estado de Derecho y la sociedad democrática son indisociables de un marco jurídico y político signado por la supremacía de los derechos humanos. No tan sólo porque el ejercicio del poder no debe menoscabar de manera arbitraria el efectivo goce de los derechos humanos, sino porque, dentro del constitucionalismo democrático, el norte de la actividad gubernativa debe estar enderezado hacia la preservación de los derechos humanos de todos.⁴

Históricamente, la consagración de los derechos humanos en instrumentos internacionales y nacionales se desarrolló de forma esencial a partir de 1948, con la Declaración Universal de derechos Humanos,⁵ destacándose posteriormente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, como dos de los instrumentos internacionales más importantes en nuestra región y consagrando ambos la obligación de respeto y garantía a los derechos humanos.⁶ En estos instrumentos internacionales se establecen como derechos esenciales de la persona, y de especial relevancia para esta tesis, los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad física y psicológica o a la seguridad,⁷ entre otros.

A nivel nacional, el Ecuador ha ido desarrollando de forma paralela la obligación del Estado de protección y garantía de los derechos humanos, establecida expresamente en la actual Constitución,⁸ y reflejado en su artículo 11 numeral 9 que señala que el “más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la

² Human Rights, *Definición de los Derechos Humanos*, edición electrónica, <http://www.humanrights.com/es_ES/what-are-human-rights.html>. Consulta: 5 de octubre de 2016

³ Felipe Gómez Iza, “Derechos Humanos Concepto y Evolución”, en *Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo*, Edición electrónica, <<http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/61>>. Consulta: 5 de octubre de 2016.

⁴ Nikken, “La protección de los derechos”, 73.

⁵ *Declaración Universal de Derechos Humanos* (1948).

⁶ *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos* (1966), art. 2; y *Convención Americana sobre Derechos Humanos* (1969), art. 1.

⁷ A modo de ejemplo ver: Arts. 1, 3 y 5 de la *Declaración Universal de Derechos Humanos*; arts. 4, 5 y 7 de la *Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre*; y arts. 6, 7 y 9 del *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos*.

⁸ Constitución de la República del Ecuador, en *Registro Oficial 449* (20 de octubre de 2008), art. 3: “Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales”.

Constitución”.⁹ De igual manera, las distintas Constituciones han recogido derechos, que han ido progresivamente ampliándose, y en la actual Constitución de 2008, establece, entre otros y de mayor interés para esta investigación, el derecho a la vida;¹⁰ el derecho a la integridad personal,¹¹ y la prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes; el derecho al honor y al buen nombre;¹² el derecho a la inviolabilidad de domicilio;¹³ y el derecho a la libertad personal y la prohibición de la detención arbitraria.¹⁴

Estableciendo, asimismo, la aplicabilidad directa de los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos en el Ecuador, lo que supone ampliar sus obligaciones de protección y garantía incluso a derechos no establecidos constitucionalmente en el país,¹⁵ tal como ha expresado la Corte Constitucional.¹⁶

Por todo lo anterior, cuando el Estado ecuatoriano incumple, por acción u omisión, sus obligaciones respecto a los derechos humanos establecidos en la Constitución o en tratados o instrumentos internacionales de derechos humanos, estamos frente a una violación de los mismos. Algunas de las cuales podríamos calificar de graves violaciones, que tal como dice Juan Pablo Albán estarían “reservadas a aquellas situaciones en que por la naturaleza y seriedad del hecho ilícito, la calidad de inderogable del derecho humano concernido y el carácter de ius cogens de la norma que lo tutela, efectivamente existe una responsabilidad agravada del Estado”.¹⁷

Al identificar qué violaciones son graves, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH), señaló como graves violaciones de derechos humanos aquellos actos “como la tortura, las ejecuciones sumarias, extra legales o arbitrarias y las

⁹ *Ibíd.*, art. 11.9.

¹⁰ *Ibíd.*, art. 66.1.

¹¹ *Ibíd.*, art. 66.3.

¹² *Ibíd.*, art. 66.18.

¹³ *Ibíd.*, art. 66.22.

¹⁴ *Ibíd.*, arts. 66.29 y 77.

¹⁵ *Ibíd.*, art. 417: “En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución”.

¹⁶ Ecuador, Corte Constitucional, “Sentencia N.º 090-15-SEP-CC”, *Caso N.º 1567-13-EP*, la cual señala que: “el Estado ecuatoriano, como parte integrante de la comunidad internacional, ha asumido diferentes obligaciones entre las cuales constan la protección y garantía de los derechos humanos destinadas a asegurar el bienestar de las personas.” Y ello exige “de los jueces que sus decisiones sean fundamentadas y que protejan y garanticen los derechos constitucionales y aquellos dispuestos en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos”.

¹⁷ Juan Pablo Albán, “Las graves violaciones a los derechos humanos como categoría jurídica”, *Pro Homine Blog de Derechos Humanos y Derecho Internacional*. Edición electrónica, en <<https://prohomine.wordpress.com/2013/11/03/las-graves-violaciones-a-los-derechos-humanos-como-categoria-juridica/>>. Consulta: 10 de octubre de 2016.

desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.¹⁸ Por su parte, el Conjunto de Principios actualizado para la lucha contra la impunidad, detalla que están comprendidas entre las graves violaciones “el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y otras violaciones de los derechos humanos internacionalmente protegidos que son delitos conforme al derecho internacional y/o respecto de los cuales el derecho internacional exige a los Estados que impongan penas por delitos, tales como la tortura, las desapariciones forzadas, la ejecución extrajudicial y la esclavitud”.¹⁹

La Comisión Internacional de Juristas ha señalado también que, bajo ninguna circunstancia, se pueden cometer actos tales como secuestros, detención no reconocida, deportación o traslado forzoso de población sin motivos autorizados por el derecho internacional.²⁰

En Ecuador, la Comisión de la Verdad conceptualizó muchas de estas graves violaciones a derechos humanos al establecer qué acciones están prohibidas al Estado, entre ellas:²¹ la prohibición de privaciones ilegales de la libertad personal,²² la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes,²³ la prohibición de la desaparición forzada²⁴ y la prohibición de las ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias. Conceptualizando esta última como

¹⁸ Corte Interamericana de Derechos (Corte IDH en adelante), “Caso Barrios Altos vs. Perú, Sentencia de 14 de marzo de 2001 (Fondo)”, Serie C No. 75, *Corte Interamericana de Derechos Humanos* 2001, párr. 41. <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_75_esp.pdf>.

¹⁹ Organización de Naciones Unidas (ONU en adelante), Comisión de Derechos Humanos, “Conjunto de Principios actualizado para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”, E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 de Febrero de 2005, Definiciones.

²⁰ Comisión Internacional de Juristas, *Impunidad y Graves Violaciones de Derechos Humanos, Guía para Profesionales No. 3*, (Ginebra: Comisión Internacional de Juristas, 2008), 21.

²¹ Comisión de la Verdad del Ecuador, *Informe de la Comisión de la Verdad 2010, Sin verdad no hay Justicia*, (Quito: Comisión de la Verdad, 2010), 41 y siguientes.

²² *Ibíd.*, entendiéndose como tal aquella que no se realizó conforme al derecho ecuatoriano y al derecho internacional, entre otras razones por ser detenida la persona sin causa legal, no existir orden detención judicial o de autoridad no facultada para ello, no entrega inmediata a la autoridad competente, lugar de privación no autorizado por la ley o exceder del plazo legal la detención, entre otras.

²³ *Ibíd.*, adoptando la definición recogida en el art. 2 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura: “Se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica”.

²⁴ *Ibíd.*, adoptando para ello la recogida en el art. 2 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas: “Se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.

Toda acción arbitraria llevada a cabo por un funcionario público o agente del Estado, en ejercicio de sus funciones o efectuada por terceros con su instigación, consentimiento o aquiescencia, que tenga como finalidad privar de la vida a una persona o a un grupo de personas. Se incluyen tanto las muertes intencionalmente producidas, como por ejemplo las ejecuciones arbitrarias; así como aquellas producidas por negligencia o uso desproporcionado o excesivo de la fuerza.²⁵

A nivel internacional, si bien no hay una definición establecida en ninguna convención o tratado internacional sobre ejecución extrajudicial o arbitraria existen referencias expresas a la misma, como la prohibición de privar arbitrariamente de la vida a una persona²⁶ o la obligación de que los gobiernos prohíban por ley “todas las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”.²⁷

Es decir, el poder del Estado está sometido a limitaciones en general, y especialmente en el caso de la garantía del derecho a la vida, como derecho esencial, y con ello del uso de la fuerza y de armas de fuego o letales. En el desarrollo de esas limitaciones, son esenciales el artículo 3 del Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley²⁸ y el principio 9 de los Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley,²⁹ sobre los cuales el Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales ha expresado que “pese a no ser en sí mismos normas vinculantes, proporcionan una interpretación convincente y bien fundamentada de los límites que establece la prohibición de la privación arbitraria de la vida en la actuación de las fuerzas del orden público”.³⁰

En el artículo 3 del Código de Conducta se afirma que: “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”,³¹ añadiendo en su

²⁵ *Ibíd.*, 50.

²⁶ *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos* (1966)

²⁷ ONU, Consejo Económico y Social, “Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”, Resolución No. 1989/65, 24 de mayo de 1989.

²⁸ ONU, Asamblea General, “Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, Resolución 34/169, 17 de diciembre de 1979, art. 3.

<http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/LawEnforcementOfficials.aspx>.

²⁹ ONU, “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”, Adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, Principio 9, <http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx>.

³⁰ ONU, Asamblea General, “Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo. Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, Philip Alston”, A/HRC/11/2, 27 de mayo de 2009, párr. 62

³¹ ONU, “Código de conducta”, art. 3.

apartado b) que “En ningún caso debe interpretarse que esta disposición autoriza el uso de un grado de fuerza desproporcionado al objeto legítimo que se ha de lograr”.³² Mientras que el artículo 9 de los Principios Básicos contiene una declaración sobre el uso de la fuerza letal: “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves”.³³ Y asimismo, en su principio 5 se establece que “Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley: a) Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga; b) Reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana”.³⁴

Es decir, se establece el uso legítimo sólo en caso de necesidad extrema y bajo criterios de proporcionalidad y respeto del derecho a la vida cuando se usen armas de fuego. Para el relator Especial Philip Alston la proporcionalidad

Trata de la cuestión del grado de fuerza tolerable. Más precisamente, el criterio de proporcionalidad entre la fuerza usada y el objetivo legítimo para el que se la usa [...] La proporcionalidad define el punto en que las vidas y el bienestar de otras personas justifica el uso de la fuerza [...] y que, si se supera ese punto, el uso de la fuerza no estaría justificado y, de causar la muerte, sería una violación del derecho a la vida.³⁵

A este respecto también se ha pronunciado la Corte IDH en un caso contra Ecuador, el Zambrano Vélez y otros, analizando los criterios que determinan el uso legítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad del Estado y estableciendo como criterios esenciales y necesarios los de excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad y humanidad.³⁶

Refiriendo que el uso excepcional debe “ser interpretado restrictivamente de manera que sea minimizado en toda circunstancia, no siendo más que el absolutamente necesario en relación con la fuerza o amenaza que se pretende repeler. Cuando se usa fuerza excesiva toda privación de la vida resultante es arbitraria”.³⁷ Y añade

El principio de necesidad justifica sólo las medidas de violencia militar no prohibidas por el derecho internacional, que son relevantes y proporcionadas [...] El principio de humanidad complementa y limita intrínsecamente el principio de necesidad, al prohibir las medidas de violencia que no son necesarias (es decir, relevantes y

³² *Ibíd.*

³³ ONU, “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza”, Principio 9.

³⁴ *Ibíd.*, Principio 5.

³⁵ *Ibíd.*, párr. 42.

³⁶ Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador Sentencia de 4 de julio de 2007 (Fondo, Reparaciones y Costas)”, Serie C-166, *Corte Interamericana de Derechos Humanos* 2007, párr. 83, <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_166_esp1.pdf>.

³⁷ *Ibíd.*, párr. 84.

proporcionadas) [...] En situaciones de paz, los agentes del Estado deben distinguir entre las personas que, por sus acciones, constituyen una amenaza inminente de muerte o lesión grave y aquellas personas que no presentan esa amenaza, y usar la fuerza sólo contra las primeras.³⁸

Respecto al último inciso, la obligación de distinguir entre personas que no son una amenaza, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH), ha expresado que

El Estado puede recurrir al uso de la fuerza sólo contra individuos que amenacen la seguridad de todos y, por tanto, el Estado no puede utilizar la fuerza contra civiles que no presentan esa amenaza. [...] Los usos indiscriminados de la fuerza pueden en tal sentido constituir violaciones del artículo 4 de la Convención y del artículo I de la Declaración.³⁹

Añadiendo que “la fuerza excesiva o desproporcionada por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que da lugar a la pérdida de la vida puede por tanto equivaler a la privación arbitraria de la vida”.⁴⁰

En el mismo sentido la normativa ecuatoriana existente en la materia,⁴¹ establece respecto al uso de armas de fuego que “el uso de la fuerza deberá ser una medida excepcional y proporcional”.⁴² Definiendo la proporcionalidad como el “equilibrio existente entre la gravedad de la amenaza o agresión por parte del presunto infractor de la ley con el nivel de fuerza a emplearse o empleado”.⁴³ Asimismo, la Corte Constitucional ecuatoriana en 2016, dictaminó que cuando el uso de armas de fuego sea inevitable, los agentes estatales deben cumplir los siguientes criterios “1. Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito, al objetivo legítimo que se persiga y de acuerdo al nivel de resistencia del intervenido; 2. Propenderán a causar el menor daño posible; [...] 5. Observarán los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”.⁴⁴

Añadiendo que “La fuerza excesiva o desproporcionada por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que da lugar a la pérdida de la vida puede por tanto equivaler a la privación arbitraria de la vida”.⁴⁵ Y da un concepto sobre

³⁸ *Ibíd.*, párr. 85.

³⁹ Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Informe Sobre Terrorismo y Derechos Humanos”, OEA/Ser.L/V/II.116 doc. 5 rev. 1 corr., *Comisión Interamericana de Derechos Humanos*, 22 de octubre de 2002, párr. 90, <<http://www.cidh.org/privadas/terrorismo.htm>>.

⁴⁰ *Ibíd.*, párr. 92.

⁴¹ Ecuador, Ministerio del Interior, “Reglamento de uso legal, adecuado y proporcional de la fuerza para la Policía Nacional del Ecuador, Acuerdo Ministerial 4472” *Registro Oficial 314* (19-ago.-2014).

⁴² *Ibíd.*, art. 2.

⁴³ *Ibíd.*, art. 4.

⁴⁴ Ecuador, Corte Constitucional, “Sentencia No. 111-16-SEP-CC”, *Caso No. 1105-13-EP*, 6 de abril de 2016.

⁴⁵ *Ibíd.*

ejecución extrajudicial o arbitraria: “las ejecuciones extrajudiciales se producen cuando una autoridad pública quita arbitrariamente o deliberadamente la vida a un ser humano en circunstancias que no corresponden al uso legítimo de la fuerza”.⁴⁶

Es decir, ejecución extrajudicial o arbitraria existe cuando un agente estatal priva de la vida a una persona, no sólo cuando existe la voluntad deliberada de dar muerte, sino también cuando la muerte es causada de forma arbitraria por exceso de uso de fuerza, sin respetar principios de excepcional necesidad, proporcionalidad, distinción y humanidad.

2. Obligación de los Estados a investigar las violaciones a derechos humanos

Los derechos humanos generan obligaciones y deberes para los Estados, siendo su principal objetivo la protección y garantía de los mismos, por lo que deben organizar su estructura, funcionamiento y orden jurídico-político en orden a este fin; determinando, además, límites y metas del accionar estatal.⁴⁷

En este sentido, el derecho internacional establece dos grandes tipos de obligaciones al Estado: respetar y asegurar los derechos humanos, por un lado; y por otro, garantizar que dichos derechos sean respetados.⁴⁸

La primera obligación exige al Estado abstenerse de violar esos derechos, por acción o por omisión, lo que conlleva asegurar, mediante las medidas necesarias, el goce y disfrute de estos derechos.⁴⁹

El segundo deber hace referencia a las obligaciones del Estado de “prevenir las violaciones, investigarlas, procesar y sancionar a sus autores, reparar los daños causados y garantizar los derechos de las víctimas a un recurso efectivo, a la reparación y a la verdad”.⁵⁰ Este deber y sus obligaciones están establecidos en distintos tratados e instrumentos internacionales;⁵¹ y de igual forma, la jurisprudencia y mecanismos regionales e internacionales lo han recogido y desarrollado. Así, la Corte IDH, al analizar el artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos estableció que los Estados, en cumplimiento de sus obligaciones asumidas “deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar,

⁴⁶ *Ibíd.*

⁴⁷ Nikken, “La protección de los derechos”, 74.

⁴⁸ Comisión Internacional, *Impunidad*, 40.

⁴⁹ *Ibíd.*

⁵⁰ *Ibíd.*, 41.

⁵¹ Ver: *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos*, art. 2; *Convención Americana sobre Derechos Humanos*, art.11; *Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial*, art. 6; y *Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura*, art. 1.

además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos”.⁵² Añadiendo que en cumplimiento de sus obligaciones, “El Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables y de imponerles las sanciones pertinentes”.⁵³

Y no es admisible para el Estado alegar la existencia de normativa o disposiciones internas para incumplir las obligaciones que le corresponden en materia de violaciones a derechos humanos, tal como lo establece Convención de Viena en su artículo 27.⁵⁴ Y obliga por ello, al Estado a adoptar las disposiciones necesarias, legislativas o de cualquier otro tipo, para adecuar esa normativa interna para garantizar los derechos y libertades.⁵⁵

El deber de garantía estaría integrado por cinco obligaciones que deben ser cumplidas de buena fe por un Estado: la obligación de investigar las graves violaciones a los derechos humanos; la obligación de brindar un recurso efectivo a las víctimas; la obligación llevar ante la justicia y sancionar a los responsables; la obligación de brindar justa y adecuada reparación a las víctimas y sus familiares; y la obligación de establecer la verdad de los hechos.⁵⁶

El deber de investigar está reiteradamente establecido en el nivel internacional; al respecto, el Comité de Derechos Humanos ha aseverado que “[E]l Estado Parte tiene el deber de investigar a fondo las presuntas violaciones de derechos humanos, en particular las desapariciones forzadas de personas y las violaciones del derecho a la vida”.⁵⁷ En el mismo sentido, y respecto al derecho a la vida, el Relator Especial sobre las Ejecuciones extrajudiciales, ha reiterado que “Es obligación de los gobiernos investigar en forma exhaustiva e imparcial toda denuncia de violación del derecho a la vida”.⁵⁸

⁵² Corte IDH, “Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, Sentencia de 21 de julio de 1989, (Indemnización Compensatoria)”, Serie C No. 7, *Corte Interamericana de Derechos Humanos*, 1989, párr. 166, <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_07_esp.pdf.

⁵³ *Ibíd.*, párr. 174.

⁵⁴ *Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados* (1969).

⁵⁵ *Convención Americana*, art. 2.

⁵⁶ Comisión Internacional, *Impunidad*, 43.

⁵⁷ Organización de las Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, “Comunicación No. 563/1993, Caso Nydia Erika Bautista, (Colombia),” CCPR/C/55/D/563/1993, párr. 8.6, 13 noviembre de 1995.

⁵⁸ Organización de las Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, “Informe del Relator Especial sobre las Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, cuestión de la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales en cualquier parte del mundo, especialmente en los países y territorios coloniales y dependientes”, E/CN.4/1997/60, 24 de diciembre de 1996, párr. 46.

Pero la investigación no puede ser realizada de cualquier manera; al respecto de cómo se debe realizar se han desarrollado diferentes estándares, que establecen lo que debe ser, como se debe hacer, el objetivo de la misma, las garantías para las víctimas, la necesaria búsqueda y sanción de los responsables, la obligación de reparar y el establecimiento de garantías de no repetición. Al respecto la CIDH, ha señalado que

Para que los órganos de protección internacional puedan establecer en forma convincente y creíble que este resultado [el de la investigación] no ha sido producto de la ejecución mecánica de ciertas formalidades procesales sin que el Estado busque efectivamente la verdad, éste debe demostrar que ha realizado una investigación inmediata, exhaustiva, seria e imparcial.⁵⁹

En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte IDH, la cual reiteradamente ha establecido que “[L]a investigación de los hechos y la sanción de las personas responsables, [...] es una obligación que corresponde al Estado siempre que haya ocurrido una violación de los derechos humanos y esa obligación debe ser cumplida seriamente y no como una mera formalidad”.⁶⁰ Y en este sentido ha precisado que “no investigarlas de manera adecuada y no sancionar, en su caso, a los responsables, viola el deber de respetar los derechos reconocidos por la Convención y garantizar su libre y pleno ejercicio, tanto de la presunta víctima como de sus familiares”.⁶¹

La misma Corte IDH ha señalado que “el Estado tiene el deber de iniciar ex officio, sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva”,⁶² utilizando para ello “todos los medios legales disponibles y estar orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de todos los responsables, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales”,⁶³ con el más estricto apego a la debida diligencia⁶⁴ y dentro de un plazo razonable.⁶⁵

⁵⁹ Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH), “Informe 55/97, Caso 11.137: Juan Carlos Abella y otros (Argentina)”, *Comisión Interamericana de Derechos Humanos*, 18 de noviembre de 1997, párr. 412.

⁶⁰ Corte IDH, “Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala, sentencia de 22 de febrero de 2002, (Reparaciones y costas)”, Serie C, No. 91, *Corte Interamericana de Derechos Humanos* 2002, párr. 74, <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_91_esp.pdf>.

⁶¹ Corte IDH, “Caso de la Masacre de La Rochela vs. Colombia, Sentencia de 11 de Mayo de 2007, (Fondo, Reparaciones y Costas)”, Serie C No. 163, *Corte Interamericana de Derechos Humanos* 2007, párr. 148, <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_163_esp.pdf>.

⁶² Corte IDH, “Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia, Sentencia de 1 de julio de 2006”, Serie C No. 148, *Corte Interamericana de Derechos Humanos* 2006, párr. 296, <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_148_esp.pdf>.

⁶³ Corte IDH, “Caso de la Masacre de La Rochela vs. Colombia”, párr. 148.

⁶⁴ *Ibíd.*, párr. 149.

⁶⁵ Corte IDH, “Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia”, párr. 319.

Y para la presente investigación, es de especial relevancia esta obligación cuando se trate de una posible ejecución extrajudicial; respecto a la cual la Corte IDH ha especificado los principios que deben seguirse

a) identificar a la víctima; b) recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte, con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación penal de los responsables; c) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga; d) determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la muerte, y e) distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio.⁶⁶

Además, la omisión o cumplimiento inadecuado por el Estado de sus obligaciones en la investigación de los hechos, genera responsabilidad internacional, tal como expresa la Corte IDH “[s]i el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción”.⁶⁷

Finalmente es necesario señalar que en ciertos casos la obligación de investigar y la diligencia debida implican necesariamente la realización de un análisis del contexto en que se produjeron los hechos de posible violación a derechos humanos, especialmente cuando ese contexto puede ser importante para comprender dicha violación. En esta línea, el Manual de Análisis de Contexto para Casos de Violaciones a los Derechos Humanos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México, haciendo un análisis de lo mantenido por la Corte IDH afirma que “una investigación efectiva no puede ser realizada sin tener en consideración el vínculo entre los distintos hechos del caso y el contexto en que se presentaron”.⁶⁸

Asimismo, expresa que ha de entenderse el contexto como “una herramienta analítica que permite identificar una serie de hechos, conductas o discursos (en general, elementos humanos o no humanos) que constituyen el marco en el cual un determinado fenómeno estudiado tiene lugar en un tiempo y espacio concretos”.⁶⁹ Y añade que la Corte IDH ha utilizado con frecuencia esta herramienta para “1) comprender mejor las violaciones a derechos humanos; 2) enmarcar hechos concretos dentro de un escenario

⁶⁶ Corte IDH, “Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia”, párr. 298.

⁶⁷ Corte IDH, “Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras”, párr. 176.

⁶⁸ Karina Ansolabehere, José Ricardo Robles, Yuria Saavedra, Sandra Serrano y Daniel Vázquez, *Violaciones, derechos humanos y contexto: herramientas propuestas para documentar e investigar. Manual de Análisis de Contexto para Casos de Violaciones a los Derechos Humanos*, (México: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México, 2017), 30.

⁶⁹ *Ibíd.*, 34.

más amplio de conductas estatales; 4) determinar la responsabilidad internacional de un Estado; y, 5) determinar la procedencia de algunas medidas de reparación”.⁷⁰

3. La obligación de luchar contra la impunidad

Una de las consecuencias de que el Estado incumpla su obligación de investigar adecuadamente es la impunidad. Y para afrontar esta cuestión, junto a la jurisprudencia internacional se recordarán los Principios desarrollados y aprobados por Naciones Unidas para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad,⁷¹ que “no enuncian normas nuevas ni generan obligaciones que no hayan sido preexistentes; sencillamente, organizan o sistematizan los derechos y las obligaciones existentes en función de la lucha contra la impunidad”.⁷² Así, en el Conjunto de Principios Actualizado, se define la impunidad como

una infracción de las obligaciones que tienen los Estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos de garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones.⁷³

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos ve en la impunidad uno de los más graves incumplimientos a sus obligaciones por parte de los Estados y es unánime el criterio de la necesidad de la lucha activa y permanente contra ella. En este sentido, la Corte IDH ha sido reiterativa al expresar la obligación de los Estados para combatir y evitar la impunidad “por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”;⁷⁴ mientras que la CIDH ha añadido que “la plena garantía de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial busca

⁷⁰ *Ibíd.*, 16.

⁷¹ Para este análisis utilizaré el Conjunto de Principios actualizado para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, ya referenciado.

⁷² Comisión Colombiana de Juristas, “Principios internacionales sobre impunidad y reparaciones”, *Compilación de documentos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)*, (Bogotá: Comisión Colombiana de Juristas, 2007), 18.

⁷³ ONU, “Conjunto de Principios actualizado”, Definiciones.

⁷⁴ Corte IDH, “Caso Nicholas Blake vs. Guatemala, Sentencia de 22 de enero de 1999 (Reparaciones y Costas)”, Serie C No. 48, *Corte Interamericana de Derechos Humanos*, 2009, párr. 64, <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_48_esp.pdf>.

combatir la impunidad”.⁷⁵ Y en este sentido el Conjunto de Principios Actualizado expresa que

La impunidad constituye una infracción de las obligaciones que tienen los Estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos de garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones.⁷⁶

Al hablar de impunidad se pueden diferenciar dos posibles orígenes: el normativo, cuando la misma deviene de la inexistencia o inadecuación de la normativa que permite la impunidad; o el fáctico, en la que pese a existir normas apropiadas, estas no se aplican o no se aplican correctamente. Respecto a la impunidad fáctica Wilder Tayler afirma que

Deriva de la debilidad de las instituciones, en especial de los poderes judiciales, alimentada por actos que obstaculizan la marcha de los procesos o corroen la independencia y la imparcialidad de la justicia. Muchas veces se traduce en la negativa de las fuerzas de seguridad de proporcionar las pruebas necesarias para identificar a los autores de los abusos contra los derechos humanos, en la resistencia de los funcionarios presuntamente implicados a declarar ante los tribunales, en la falsificación de registros públicos, o en la intimidación y la amenaza a las víctimas, jueces, abogados y testigos. [...] En casos extremos, cuando la violencia, la intolerancia o la arbitrariedad dictatorial son los rasgos distintivos de un determinado gobierno, ni siquiera esto es necesario: las víctimas y sus familiares paralizados por el temor y desalentados por la ausencia de instancias a las que acudir, se abstienen de reclamar sus derechos y denunciar los abusos.⁷⁷

Es decir, la impunidad de hecho puede tener distintos mecanismos o formas de presentarse, entre ellos, la falta de voluntad de las autoridades judiciales y administrativas para actuar e investigar; la obstaculización a la investigación por parte de aquellos actores estatales presuntamente autores de las violaciones a derechos; la parcialidad y falta de credibilidad en los testimonios de las víctimas; o la corrupción. Como ha dicho el Experto sobre el derecho de restitución, indemnización y rehabilitación de las Naciones Unidas, “las autoridades del Estado renuncian a investigar los hechos y a determinar responsabilidades penales”.⁷⁸

⁷⁵ CIDH, “Derecho a la verdad en las Américas”, *Comisión Interamericana de Derechos Humanos*, OEA/Ser.L/V/II.152, Doc. 2, 13 agosto 2014, 18, <<http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Derecho-Verdad-es.pdf>>.

⁷⁶ ONU, “Conjunto de Principios actualizado”, Principio 1.

⁷⁷ Wilder Tayler, “La problemática de la impunidad y su tratamiento en las Naciones Unidas – Notas para la reflexión–”, en *Revista IIDH/I Instituto Interamericano de Derechos Humanos IIDH*, Volumen 24 (julio-diciembre 1996), 194.

⁷⁸ ONU, Comisión de Derechos Humanos, “Estudio relativo al derecho de restitución, indemnización y rehabilitación a las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos y las libertades fundamentales”, E/CN.4/Sub.2/1992/8, 2 de julio de 1993, párr. 5.2.

En este sentido, por ejemplo, la Corte IDH consideró que la extensa duración de las investigaciones, sin resultados reales respecto a los responsables y su sanción supone “una situación de grave impunidad y constituye una infracción del deber [de garantía] del Estado”.⁷⁹

4. La obligación de reparar

Una de las obligaciones del Estado ante la violación de derechos humanos es la de reparar. Así lo recogen los Principios actualizados contra la impunidad “Toda violación de un derecho humano da lugar a un derecho de la víctima o sus derechohabientes a obtener reparación, el cual implica el deber del Estado de reparar y el derecho de dirigirse contra el autor”.⁸⁰

De la misma manera la Corte IDH ha confirmado que la reparación es obligación esencial de los Estados,⁸¹ precisando que “[l]a reparación es el término genérico que comprende las diferentes formas como un Estado puede hacer frente a la responsabilidad internacional en que ha incurrido”.⁸² La reparación debe ser plena y efectiva y las posibles formas de reparación son restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.⁸³

Sobre estas formas de reparación y siguiendo los Principios de Naciones Unidas sobre reparaciones, “la restitución, siempre que sea posible, ha de devolver a la víctima a la situación anterior a la violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o la violación grave del derecho internacional humanitario”.⁸⁴ Añade el principio 22,⁸⁵ que la satisfacción ha de incluir las medidas necesarias para evitar que no continúen las violaciones; y aquellas que permitan la verificación de los hechos, estableciendo expresamente el derecho a la verdad y la sanción a los responsables de las

⁷⁹ Corte IDH, “Caso del Caracazo vs. Venezuela, sentencia de 29 de agosto de 2002, (Reparaciones y Costas)”, Serie C 95, *Corte Interamericana de Derechos Humanos*, 2002, párr. 117, <corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_95_esp.pdf>.

⁸⁰ ONU, “Conjunto de Principios actualizado”, principio 31.

⁸¹ Corte IDH, “Caso Velásquez Rodríguez”, párr. 25.

⁸² Corte IDH, “Caso Loayza Tamayo vs. Perú, Sentencia (Reparaciones y Costas) de 27 de noviembre de 1998”, Serie C No 42, *Corte Interamericana de Derechos Humanos*, 1998, párr. 85, <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_42_esp.pdf>.

⁸³ ONU, “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”, Resolución 60/147 de 16 de diciembre 2005, principio 18, <<http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx>>.

⁸⁴ ONU, “Principios y directrices reparaciones”, Principio 19.

⁸⁵ ONU, “Principios y directrices reparaciones”, Principio 22.

violaciones. Detallándose en el Principio 23⁸⁶ algunas garantías de no repetición como el control efectivo de las autoridades civiles sobre fuerzas armadas y de seguridad; la garantía de imparcialidad e independencia judicial y la obligación de revisar y reformar leyes que contribuyan a las violaciones de derechos humanos.

5. El derecho a la verdad

El derecho a la verdad es un derecho individual, familiar y colectivo, íntimamente relacionado con la obligación del Estado de investigar y la lucha contra la impunidad y, forma parte esencial del derecho a la reparación de las víctimas y del derecho de acceso a la justicia y al debido proceso. Su establecimiento como derecho y su evolución han sido fruto fundamentalmente de la jurisprudencia y de la doctrina de los tribunales y demás órganos internacionales. Hoy este derecho y la correlativa obligación del Estado se encuentran recogidos en varios instrumentos internacionales de derechos humanos.⁸⁷

En este sentido, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha establecido en distintos informes y publicaciones que

el derecho a conocer la verdad acerca de las violaciones manifiestas de los derechos humanos y las infracciones graves de las normas de derechos humanos es un derecho autónomo e inalienable, vinculado a la obligación y el deber del Estado de proteger y garantizar los derechos humanos, realizar investigaciones eficaces y velar porque haya recursos efectivos y se obtenga reparación. Este derecho, estrechamente vinculado con otros derechos, tiene aspectos tanto individuales como colectivos, y ha de considerarse como un derecho que no admite suspensión y no debe estar sujeto a restricciones.⁸⁸

Precisando la CIDH que este derecho supone “conocer la verdad íntegra, completa y pública sobre los hechos ocurridos, sus circunstancias específicas y quiénes participaron en ellos”.⁸⁹ En este sentido la Corte IDH ha sostenido de forma reiterada que “toda persona incluyendo los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos, tienen derecho a conocer la verdad. En consecuencia, los familiares de las víctimas y de la sociedad deben ser informados de todo lo sucedido con relación a dichas violaciones”.⁹⁰

⁸⁶ ONU, “Principios y directrices reparaciones”, Principio 23.

⁸⁷ ONU, “Principios y directrices reparaciones”, Principios 11, 22 (b) y 24.

⁸⁸ ONU, Comisión de Derechos Humanos, “Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Estudio sobre el derecho a la verdad”, E/CN.4/2006/91, 9 de enero de 2006, 8.

⁸⁹ CIDH, “Informe No. 37/00, Caso 11.481, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez”, *Comisión Interamericana de Derechos Humanos*, 13 de abril de 2000, párr. 148.

⁹⁰ Corte IDH, “Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia, Sentencia de 5 de julio de 2004 (Fondo, Reparaciones y Costas)”, Serie C No. 109, *Corte Interamericana de Derechos Humanos*, 2004, párr. 261, <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_109_esp.pdf>.

En el desarrollo de la interpretación y alcance de este derecho, el mismo se ha ido vinculando con otros derechos como el de protección legal, a garantías judiciales, a un recurso efectivo, a la información y, por consiguiente, a obligaciones de los Estados, como la diligencia de las investigaciones y procesos, establecer la realidad de los hechos y los responsables y, por supuesto, remover todos los obstáculos de cualquier tipo que pudieran existir para ello. Así, la CIDH recuerda que

La Comisión y la Corte han sostenido que el derecho a la verdad se vincula de manera directa con los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, los cuales se encuentran establecidos en los artículos XVIII y XXIV de la Declaración Americana, así como en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Asimismo, en determinados supuestos el derecho a la verdad guarda relación con el derecho de acceso a la información, contemplado en [...] el artículo 13 de la Convención Americana.⁹¹

Criterio sostenido por la Corte IDH al expresar que “este derecho se encuentra estrechamente ligado a los derechos a un recurso efectivo, a una investigación eficaz, a ser informado acerca de los resultados de la investigación, a obtener reparación, a la justicia y al derecho a protección judicial”.⁹² A la vez que derecho también se ha considerado un acto reparador para las víctimas y sus familias

El conocimiento de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, las motivaciones y la identificación de los perpetradores son elementos fundamentales para reparar integralmente a las víctimas de violaciones de derechos humanos. La Comisión ya ha establecido que: forma parte del derecho a reparación por violaciones de los derechos humanos, en su modalidad de satisfacción y garantías de no repetición, el derecho que tiene toda persona y la sociedad a conocer la verdad íntegra, completa y pública sobre los hechos ocurridos, sus circunstancias específicas y quiénes participaron en ellos.⁹³

El derecho a la verdad, tiene, igualmente, una relación muy estrecha con el acceso a la información que permita el conocimiento de los hechos, tal como ha expresado la CIDH, que afirma la obligación de los Estados de “garantizar el acceso a la información sobre graves violaciones de derechos humanos que se encuentran en instalaciones y archivos estatales”.⁹⁴

En la normativa ecuatoriana, la Constitución, recoge expresamente el derecho a la verdad en su artículo 78⁹⁵ que reconoce el derecho de las víctimas al conocimiento de la

⁹¹ CIDH, “Derecho a la verdad en las Américas”, párr. 13

⁹² Corte IDH, “Caso Nicholas Blake”, párr. 36.

⁹³ Corte IDH, “Caso Kawas Fernández Vs. Honduras, Sentencia de 3 de abril de 2009, (fondo, Reparaciones y Costas)”. Serie C No. 196, *Corte Interamericana de Derechos Humanos*, 2009, párr. 190, <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_196_esp.pdf>.

⁹⁴ CIDH, “Derecho a la verdad en las Américas”, párr. 14.

⁹⁵ El art. 78 de la Constitución de la República del Ecuador señala que “Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones,

verdad de los hechos, así como la restitución, indemnización, rehabilitación y garantía del derecho violado; reconociendo en el derecho a la verdad un derecho fundamental, y por tanto, directamente exigible y protegible.

La misma Corte IDH, recordó al Ecuador sus obligaciones en virtud del derecho a la verdad, así, en el caso Tibi señaló que se debe garantizar el derecho que asiste a las víctimas y a sus familiares de conocer lo sucedido con los hechos que rodearon las violaciones de los derechos humanos, además de conocer quiénes fueron los agentes responsables de los mismos.⁹⁶

En este sentido la Corte Constitucional ecuatoriana ha establecido que “el derecho a la verdad se basa en un reconocimiento, por parte de las autoridades competentes, para las víctimas y sus familiares, de que la vulneración de su derecho será objeto de investigación y en caso de determinar una responsabilidad, sancionar conforme lo establecido en el ordenamiento jurídico”,⁹⁷ añadiendo que “el Estado tiene la obligación de investigar y juzgar, pero este derecho a la verdad no se agota con la sola circunstancia de investigar, sino que debe realizarse una investigación seria y técnica”.⁹⁸

6. El derecho de acceso a la información

En las violaciones a derechos humanos ocurridas en la frontera ecuatoriana, el acceso a la información ha estado muy relacionado con la impunidad de los autores y con la falta de conocimiento de la verdad sobre dichas violaciones.

El derecho de acceso a la información se ha desarrollado como un derecho independiente, estrechamente vinculado tanto a la obligación de los Estados de investigar, y a luchar contra la impunidad, como al derecho a la verdad; y ello, para el caso de estudio de esta investigación es esencialmente relevante en cuanto a la negativa por parte del Estado para facilitar información que ha impedido el avance de las investigaciones.

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos recoge este derecho en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos⁹⁹ y en el artículo 13

el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado.

⁹⁶ Corte IDH, “Caso Tibi vs Ecuador, Sentencia de 07 de septiembre de 2004 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)”, Serie C No. 114, *Corte Interamericana de Derechos Humanos*, 2004, párr. 256 y 257, <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_114_esp.pdf>.

⁹⁷ Ecuador, Corte Constitucional, “Sentencia No. 114-14-SEP-CC”, 06 de agosto del 2014 <<https://www.corteconstitucional.gob.ec/sentencias/relatoria/relatoria/fichas/114-14-SEP-CC.pdf>>.

⁹⁸ *Ibíd.*

⁹⁹ *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966).*

de la Convención Americana de Derechos Humanos,¹⁰⁰ entre otros; estableciendo ambos, que enmarcado dentro del derecho a la libre expresión, se encuentra el derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir información.

Al respecto, en el informe de 2010 de la CIDH, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, expresa, recogiendo lo establecido por la Corte IDH en la sentencia del caso Claude reyes y otros Vs. Chile de 2006, que

El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental protegido por el artículo 13 de la Convención Americana. La Corte Interamericana ha establecido que dicho artículo, al estipular expresamente los derechos a “buscar” y “recibir” “informaciones”, protege el derecho que tiene toda persona a acceder a la información bajo el control del Estado.¹⁰¹

Y como derecho humano sólo puede estar sujeto a “un régimen limitado de excepciones, acordes con una sociedad democrática y proporcionales al interés que los justifica”,¹⁰² las cuales “deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas”.¹⁰³

En este sentido la CIDH ha afirmado que las excepciones deben “dar cumplimiento estricto a los requisitos derivados del artículo 13.2 de la Convención Americana, esto es: verdadera excepcionalidad, consagración legal, objetivos legítimos, necesidad y estricta proporcionalidad”.¹⁰⁴

Uno de los argumentos generalmente usados por los Estados para negar el acceso a la información, incluso a las instituciones judiciales y de investigación, es la seguridad nacional o necesidad de proteger la seguridad interna del Estado. Es emblemática sobre este tema la sentencia de la Corte IDH en el Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala, que expresa que

[E]n el marco de un procedimiento penal, especialmente cuando se trata de la investigación y persecución de ilícitos atribuibles a las fuerzas de seguridad del Estado, surge una eventual colisión de intereses entre la necesidad de proteger el secreto de Estado, por un lado, y las obligaciones del Estado de proteger a las personas de los actos ilícitos cometidos por sus agentes públicos y la de investigar, juzgar y sancionar a los

¹⁰⁰ *Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969)*.

¹⁰¹ CIDH, “Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2010, Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión”, *Comisión Interamericana de Derechos Humanos*, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 5, 7 marzo 2011, párr. 3.

¹⁰² Organización de Estados Americanos, Comité Jurídico Interamericano, “Principios sobre el derecho de acceso a la información del Comité Jurídico Interamericano”, CJI/RES. 147 (LXXIII-O/08), 7 de agosto de 2008.

¹⁰³ CIDH, “Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2009, Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión”, *Comisión Interamericana de Derechos Humanos*, OEA/Ser.L/V/II.134 Doc. 5 rev. 1, 25 febrero 2009, párr. 142.

¹⁰⁴ CIDH, “Informe Anual 2010”, párr. 11.

responsables de los mismos, por el otro lado. [...] Los poderes públicos no pueden escudarse tras el manto protector del secreto de Estado para evitar o dificultar la investigación de ilícitos atribuidos a los miembros de sus propios órganos. En casos de violaciones de derechos humanos, cuando los órganos judiciales están tratando de esclarecer los hechos y juzgar y sancionar a los responsables de tales violaciones, el ampararse en el secreto de Estado para entregar información requerida por la autoridad judicial puede ser considerado como un intento de privilegiar la ‘clandestinidad del Ejecutivo’ y perpetuar la impunidad. Asimismo, cuando se trata de la investigación de un hecho punible, la decisión de calificar como secreta la información y de negar su entrega jamás puede depender exclusivamente de un órgano estatal a cuyos miembros se les atribuye la comisión del hecho ilícito.¹⁰⁵

Sobre este conflicto entre la negativa de acceso al derecho y la posible seguridad nacional, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH y la Corte IDH, han expresado reiteradamente que debe demostrarse, ante una autoridad imparcial, que hacer pública dicha información puede producir una afectación grave, real, objetiva y actual de las actividades de defensa propias de un Estado democrático; y que el uso de excepciones como “Seguridad del Estado”, “Defensa nacional” u “Orden público” deben ser definidas e interpretadas de conformidad con el marco jurídico interamericano y, en particular, con la Convención Americana.¹⁰⁶

Añadiendo que las leyes que establezcan los conceptos mencionados, así como las posibles restricciones, “deberán definir con exactitud el concepto de seguridad nacional y especificar claramente los criterios que deberán utilizarse para determinar si cierta información puede o no declararse secreta, a fin de prevenir que se abuse de la clasificación ‘secreta’ para evitar la divulgación de información que es de interés público”.¹⁰⁷

Esa excepcionalidad conlleva la obligación de que las decisiones denegando el acceso sean motivadas y debidamente fundamentadas, permitiendo realizar una valoración adecuada y de proporcionalidad sobre la justificación de mantener la restricción y si la misma es compatible con el Derecho Internacional y las obligaciones de los Estados.¹⁰⁸ En caso contrario la Corte IDH ha establecido que se daría “una violación del derecho al debido proceso protegido por el artículo 8.1 de la Convención

¹⁰⁵ Corte IDH, “Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala, Sentencia de 25 de noviembre de 2003, Fondo, Reparaciones y Costas”, Serie C No. 101, *Corte Interamericana de Derechos Humanos*, 2003, párr. 181, <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_101_esp.pdf>.

¹⁰⁶ CIDH, “Relatoría Especial para la Libertad de Expresión: El derecho de acceso a la información en el marco jurídico interamericano”, OEA/Ser.L/V/II. CIDH/RELE/INF. 9/12, *Comisión Interamericana de Derechos Humanos*, 7 marzo 2011.

¹⁰⁷ CIDH, “Informe Anual 2010”, párr. 57.

¹⁰⁸ Corte IDH, “Caso Claude Reyes y otros vs. Chile, Sentencia de 19 de septiembre de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas)”, Serie C No. 151, *Corte Interamericana de Derechos Humanos*, 2006, párr. 77, <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf>.

Americana, puesto que las decisiones adoptadas por las autoridades que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente justificadas o, de lo contrario, serían decisiones arbitrarias”.¹⁰⁹ Añadiendo el Comité de Derechos Humanos sobre el tema que

las medidas restrictivas deben ajustarse al principio de proporcionalidad; deben ser adecuadas para desempeñar su función protectora; deben ser el instrumento menos perturbador de los que permitan conseguir el resultado deseado [...] El principio de proporcionalidad debe respetarse no solo en la ley que defina las restricciones sino también por las autoridades administrativas y judiciales que la apliquen.¹¹⁰

Y por su parte la CIDH ha expresado que cualquier restricción debe superar una prueba de proporcionalidad en tres pasos: “(a) debe estar relacionada con uno de los objetivos legítimos que la justifican; (b) debe demostrarse que la divulgación de la información efectivamente amenaza con causar un perjuicio sustancial a ese objetivo legítimo; y (c) debe demostrarse que el perjuicio al objetivo es mayor que el interés público en contar con la información”.¹¹¹

Además de los estándares mencionados, y para el caso de violaciones a derechos humanos, la CIDH, recogiendo el criterio internacional, ha expresado que las autoridades estatales “no pueden ampararse legítimamente en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la investigación o proceso pendientes”.¹¹²

Y ello, fundamentalmente por obligación de luchar contra la impunidad y de buscar y conocer la verdad, garantizando con ello, el acceso a la justicia. En consecuencia, el Estado tiene la obligación no sólo de revisar y adoptar o reformar toda su normativa contraria a los estándares expuestos, sino también, de asegurar que las prácticas estatales garanticen el adecuado ejercicio del derecho de acceso a la información.

En Ecuador la Constitución consagra este derecho en su artículo 18¹¹³ al establecer el derecho individual o colectivo a acceder a la información generada por el Estado, añadiendo que “No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley.” Y tiene un último inciso de muy especial interés “En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información”.¹¹⁴

¹⁰⁹ *Ibíd.*, párr. 120.

¹¹⁰ ONU, “Observación General 34”.

¹¹¹ CIDH, “Informe Anual 2010”.

¹¹² CIDH, “Derecho a la verdad en las Américas”, párr. 113.

¹¹³ Constitución del Ecuador, art. 18.

¹¹⁴ *Ibíd.*

Asimismo, el artículo 91¹¹⁵ establece la garantía jurisdiccional de acceso a información, en caso de ser denegada, pudiendo solicitar el amparo judicial; incluso en los casos de que la negativa haya sido con base en el carácter secreto o reservado de la información.

La Ley que desarrolla estos preceptos constitucionales es la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de 2004, en cuyos artículos 17 y 18,¹¹⁶ regula lo relativo a la información reservada, destacando la generalidad y ambigüedad en el uso de los términos referidos a aquella información que sería de acceso restringido

Art. 17.- De la Información Reservada.- No procede el derecho a acceder a la información pública, exclusivamente en los siguientes casos:
a) Los documentos calificados de manera motivada como reservados por el Consejo de Seguridad Nacional, por razones de defensa nacional, de conformidad con el artículo 81, inciso tercero, de la Constitución Política de la República y que son
1) Los planes y órdenes de defensa nacional, militar, movilización, de operaciones especiales y de bases e instalaciones militares ante posibles amenazas contra el Estado;
2) Información en el ámbito de la inteligencia, específicamente los planes, operaciones e informes de inteligencia y contra inteligencia militar, siempre que existiera conmoción nacional; 3) La información sobre la ubicación del material bélico cuando ésta no entrañe peligro para la población.

En su artículo 18 detalla la protección de la información reservada y hace una única mención, en su último inciso, a la posibilidad de desclasificación, para la cual será necesaria la mayoría absoluta del Congreso. Es decir, no sólo es muy restrictiva la norma, por establecer conceptos muy generales, sino que además, no se adapta ni a la Constitución ni a las obligaciones internacionales del Ecuador, al no establecer criterios de necesidad y proporcionalidad entre reserva e interés protegido; ni tampoco hace mención a la violación a derechos humanos como excepción a la reserva.

Esta ambigüedad y falta de adaptación a la Constitución y obligaciones internacionales se refleja igualmente en la normativa sobre seguridad y en la de manejo de información clasificada del Ejército ecuatoriano,¹¹⁷ que en ningún momento mencionan la garantía de acceso a la información reservada en casos de violaciones a derechos humanos; más bien al contrario, se establecen criterios muy restrictivos de acceso a dicha información para cualquier persona, incluidas las instituciones estatales con la obligación de investigar como las judiciales, la Fiscalía o la Defensoría del Pueblo.

¹¹⁵ *Ibíd.*, art. 91.

¹¹⁶ Ecuador, “Ley Orgánica de transparencia y acceso a la información pública”, en *Registro Oficial Suplemento* 337 (18 de mayo de 2004), arts. 17 y 18.

¹¹⁷ Ver leyes de Ecuador: Ley de Seguridad Pública y del Estado, 2009; Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, 2009; y Reglamento para la Elaboración, Manejo, Custodia, Difusión y Seguridad de la información militar clasificada, 2010.

Existiendo en esta normativa una única referencia a la posibilidad de acceso a esa información, establecida en el artículo 19 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado que establece que “En ejercicio de los derechos y garantías individuales los ciudadanos podrán demandar ante la Corte Constitucional la desclasificación de la información en el evento de que existan graves presunciones de violaciones a los derechos humanos o cometimiento de actos ilegales”.¹¹⁸ Es decir, dejando a un recurso extraordinario, el acceso a la Corte Constitucional, la posibilidad de litigar una desclasificación, lo que en la práctica resulta muy complicado y demorado.

Es por ello que la Comisión de la Verdad del Ecuador, solicita al Estado en su Recomendación Final 141,¹¹⁹ que se reglamente “la ley de seguridad pública para incluir medidas que permitan la desclasificación de documentos oficiales y la apertura de archivos públicos que permitan el esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos”, incluyendo la necesidad de establecer la excepción al acceso a información a documentos reservados en caso de la investigación de dichas violaciones. Recomendación que no fue recogida por el poder ejecutivo ni legislativo ecuatorianos.

A nivel internacional y nacional están claramente establecidos los estándares relacionados con las obligaciones del Estado respecto a la investigación de casos de violaciones a derechos humanos, que debe ser objetiva, imparcial, a través de recursos judiciales efectivos y por todos los medios necesarios, con el fin de llegar al conocimiento de la verdad y la sanción de los responsables; así como las obligaciones derivadas del derecho a la verdad, la lucha contra la impunidad, la obtención de reparación y los requisitos que justifican las restricciones sobre el derecho a la información, con la salvedad que en caso de violaciones a derechos humanos no caben dichas restricciones. Asimismo, se han recordado y conceptualizado algunas violaciones a derechos humanos, entre ellas la ejecución extrajudicial como privación arbitraria de la vida por el uso excesivo no fundamentado de la fuerza.

Todo ello permitirá analizar las violaciones a derechos humanos ocurridas en Sucumbíos a la luz de los mismos y que serán presentadas en los capítulos 2 y 3, estableciendo la responsabilidad del Estado en las mismas, por acción o por omisión, y plantear posteriormente una respuesta estratégica de exigibilidad y litigio ante una de ellas, la muerte de Rubén Darío Santander.

¹¹⁸ Ecuador, “Ley de Seguridad Pública y del Estado”, en *Registro Oficial Suplemento* 35 (28 de septiembre de 2009), art. 19.

¹¹⁹ Comisión de la Verdad, *Informe*, Tomo 5, página 460.

Capítulo segundo

Violaciones a derechos humanos en Sucumbíos y mecanismos de impunidad en casos de presunta responsabilidad del Ejército

En este segundo capítulo se hace un acercamiento al contexto de la zona de frontera de Sucumbíos, y de la situación de violencia y violación a derechos humanos vivida. Para ello se inicia ubicando la evolución de la vida en frontera, marcada desde el año 2000 por la situación del conflicto en Colombia, y la presencia militar colombiana y ecuatoriana en la misma; y haremos un especial énfasis en los cambios habidos en la situación desde la llegada al poder de Rafael Correa; contexto marcado a nivel nacional por la aprobación de una nueva Constitución en el Ecuador y con un hecho local fundamental, que es el bombardeo de Angostura, en la Frontera Norte ecuatoriana, por el gobierno colombiano el 1 de marzo de 2008.

En este contexto reflejaremos la escalada de violaciones a derechos humanos por parte del Ejército ecuatoriano en contra de población de comunidades fronterizas, especialmente en el periodo 2010-2013. Periodo en el que se enmarca la muerte de Rubén Darío Santander, caso emblemático de mi tesis; y dentro de este análisis se valorarán las causas del porqué ninguna de las violaciones a derechos humanos denunciadas desde el 2009 a la fecha han obtenido ninguna resolución o sentencia, negando a las víctimas y a la sociedad el conocimiento de la verdad; descubriendo los mecanismos que a distintos niveles, sociales, institucionales y políticos, han permitido que la impunidad y la imposibilidad de conocer la verdad se mantengan hoy en Sucumbíos.

1. Sucumbíos, tierra de frontera

La provincia de Sucumbíos es una provincia muy joven, en cuanto a su creación, que data del 12 de febrero de 1989, en el gobierno de Rodrigo Borja. “Está situada en la región nororiental del país y limita al norte con Colombia, al este con Colombia y Perú, al sur con la provincia de Napo y al oeste con las de Carchi, Imbabura y Pichincha. Su capital es Nueva Loja (más conocida por su nombre anterior Lago Agrio)”.¹²⁰

¹²⁰ Belén Vásquez, *La construcción social del miedo. Caso: Sucumbíos* (Quito: UASB, Abya-Yala y Corporación Editora Nacional, 2005), 21.

Según el Indicador Provincial de Pobreza por necesidades básicas insatisfechas del 2010, es la provincia con más pobreza del Ecuador, siendo del 87% el porcentaje de personas consideradas pobres en toda la provincia.¹²¹

2. Evolución de la situación en la frontera de Sucumbíos

2.1. Antes del Plan Colombia

Hasta el año 2000 la situación en frontera se caracteriza por la relación entre la población de ambos lados de la frontera con naturalidad, “eran familias e intercambio conjunto, por ejemplo, la documentación se sacaba en Ecuador o Colombia de acuerdo a lo más cercano, igual en salud o educación”,¹²² además de que “era muy raro ver a los militares ecuatorianos, tampoco a autoridades civiles”.¹²³

En esta época, los militares ecuatorianos que estaban en la zona eran vistos bien por las personas en las comunidades de frontera, ya que siendo pasivos en lo relativo a seguridad y control de la frontera, “tenían relación con ellos y aportaban en trabajos comunitarios o asuntos civiles, ante la ausencia total del Estado”.¹²⁴

Además, existe presencia en la zona de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (en adelante FARC), histórica en los ríos San Miguel y Putumayo (que constituyen la frontera natural entre ambos países), y aunque no exenta de algunas violaciones a derechos humanos, como secuestros, extorsión o amenazas,¹²⁵ “tenían ciertos cánones de convivencia con la población local y con las fuerzas armadas ecuatorianas, acuerdo de respeto mutuo y de no injerencia”.¹²⁶

Como describe Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston tras su visita a Ecuador en 2010

La provincia fronteriza norte de Sucumbíos está infiltrada por las FARC desde hace mucho tiempo, pero hasta hace poco tenía una escasa presencia del Estado o de otros grupos armados ilegales. El control de las FARC se traducía en graves violaciones

¹²¹ Ecuador, Instituto Nacional de Estadística del Ecuador, *Censo de población y vivienda 2010* (Quito: Instituto Nacional de Estadística, 2010), en <www.ecuadorencifras.org.ec>.

¹²² Entrevista realizada a Fanny Pilco, Comité de Derechos Humanos de Sucumbíos, realizada por Jorge Acero en Nueva Loja, 15 de septiembre de 2017.

¹²³ Entrevista realizada a María Pantoja, ex presidenta del recinto San Martín en la ribera del río San Miguel, realizada por Jorge Acero en Nueva Loja, 10 de septiembre de 2017.

¹²⁴ Entrevista realizada a Laura Martín, Federación de Mujeres de Sucumbíos, realizada por Jorge Acero en Nueva Loja, 12 de septiembre de 2017.

¹²⁵ Laura González, “Balance de los estudios sobre violencia y seguridad ciudadana en la frontera colombo-ecuatoriana”, en Fernando Carrión, Diana Mejía y Johanna Espín Compiladores *Aproximaciones a la frontera*, 149-163 (Quito: FLACSO Sede Ecuador, 2013), 152-3.

¹²⁶ Entrevista realizada a Luis Ángel Saavedra, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH, realizada por Jorge Acero en Quito, 15 de septiembre de 2017.

de los derechos de los civiles [...] Pero la existencia de un único grupo armado tenía, por lo menos, un efecto positivo: la escasa competencia entre agentes armados por el control de los recursos, lo que reducía al mínimo los costos que esa competencia normalmente entraña para los civiles.¹²⁷

2.2. La implementación del Plan Colombia y sus efectos en Sucumbíos entre 1998 y 2007

Hasta el año 1998, en que Ecuador firma del Acuerdo de Paz con Perú, la preocupación del Estado ecuatoriano, estuvo concentrada en la frontera sur; sin embargo, a partir esa fecha su preocupación respecto a la seguridad de fronteras pasa a centrarse en la Frontera Norte y en sus provincias fronterizas con Colombia, iniciando el incremento paulatino de efectivos militares.¹²⁸

Este cambio viene marcado por el inicio de la implementación en Colombia del Plan Colombia, donde a partir de 1998 y de la mano del Presidente Pastrana, se inicia un intento por llegar a un acuerdo de paz con las FARC y asimismo fortalecer el desarrollo social del país, especialmente de las zonas con más presencia de grupos irregulares. Tal como afirma Andrés Gómez, “El Plan Nacional de Desarrollo (PND) planteado por este gobierno incluía al Plan Colombia como programa de proyectos productivos participativos en el sector rural, de atención humanitaria, de fortalecimiento de organizaciones sociales locales y de inversión en infraestructura de comunicación como un apoyo a las economías lícitas locales”.¹²⁹

Sin embargo, la búsqueda de apoyos, especialmente económicos, para el desarrollo del Plan, facilitó la protagónica participación de Estados Unidos en el diseño, financiamiento e implementación del Plan Colombia, lo cual significó enfatizar el componente militar del mismo y de lucha contra la droga; y un apoyo decidido al fortalecimiento de las fuerzas armadas colombianas, “en un contexto en el que se consolidaba la noción de los actores gubernamentales de que los grupos guerrilleros se nutrían del narcotráfico”.¹³⁰

¹²⁷ ONU, Consejo de Derechos Humanos, “Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston, acerca de su misión al Ecuador (5 a 15 de julio de 2010)”, A/HRC/17/28/Add.2, 9 de mayo de 2011, párr. 2, <<http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=50f3d32e2>>.

¹²⁸ Programa de Estudios de la Ciudad, “Gobernanza de la seguridad en la frontera norte ecuatoriana”, en Fernando Carrión, Diana Mejía y Johanna Espín Compiladores *Aproximaciones a la frontera*, 244-256 (Quito: FLACSO Sede Ecuador, 2013), 245-6.

¹²⁹ Andrés Orlando Gómez López, “Políticas públicas de seguridad de Colombia y de Ecuador: una visión comparada”, en Fernando Carrión, Diana Mejía y Johanna Espín Compiladores *Aproximaciones a la frontera*, 121-133 (Quito: FLACSO Sede Ecuador, 2013), 121.

¹³⁰ *Ibíd.*, 122

Esta política fue desarrollada y profundizada por Álvaro Uribe cuando llega a la presidencia de Colombia en 2002, desarrollando una política de seguridad que combinó política antidrogas, basada en fumigación aérea y la lucha contra los grupos insurgentes, con la modernización del Ejército, todo ello con la ayuda de los Estados Unidos.¹³¹ Esta política se plasma en el lanzamiento en 2004 de una ofensiva militar, conocida como Plan Patriota, con la cual se pretendía “desplazar a más de 15.000 militares colombianos hacia el sur del país, área en la cual la FARC han tenido su centro estratégico por años y en donde la presencia del Estado ha sido débil”.¹³²

Esta ofensiva tiene muy en cuenta a los países de su frontera sur, ya que busca presionar a las guerrillas “obligándolas a desplazarse hacia la frontera, de modo que al llegar a ella, los ejércitos de los países vecinos –en este caso Ecuador y Perú– impidieran una incursión de los grupos insurgentes en sus territorios, arrinconándolos y forzándolos a pelear a dos frentes”.¹³³

El desarrollo de esta estrategia en Colombia, influyó en las políticas regionales y nacionales de los países de la región; que comenzaron a ver a las FARC, como un grupo terrorista que suponía un riesgo de desequilibrio terrorista en la región. Es de esta forma que se crea la Iniciativa Regional Andina, bajo el impulso de Estados Unidos, que “Está concebida como un programa de asistencia internacional, por un monto de USD 782 millones para el año 2002, que busca asistir a los gobiernos andinos en sus esfuerzos por fortalecer las instituciones democráticas”.¹³⁴ De esta forma se va desarrollando la hipótesis del riesgo del derrame del conflicto colombiano hacia los países de su alrededor o el desbordamiento de sus fronteras, que pondría en peligro a los países limítrofes y a la región, de forma que tanto la violencia generada por el conflicto como las actividades de narcotráfico comiencen a sentirse en otros países; de forma que apoyar al desarrollo y fortalecimiento militar de las zonas históricamente deprimidas, que son las fronteras, es esencial para evitar esa expansión del conflicto.¹³⁵

El gobierno ecuatoriano apoyó estos planteamientos desde sus inicios, considerando que la prevención del derrame del conflicto colombiano hacia el Ecuador

¹³¹ *Ibíd.*, 125

¹³² Juan Pablo Cadena Gómez, “Plan Colombia y dinámicas de seguridad Ecuador-Colombia”, en *Comentario Internacional, Revista del Centro Andino de Estudios Internacionales*, No.11 (2011), 127-8

¹³³ *Ibíd.*, 128

¹³⁴ Pablo Andrade, “Diagnóstico de la frontera Ecuador –Colombia”, en *Comentario Internacional, Revista del Centro Andino de Estudios Internacionales*, No. 4 (2002), 189.

¹³⁵ *Ibíd.*, 189.

era un tema prioritario en su agenda de seguridad.¹³⁶ Es por ello que el presidente Mahuad, en 1.999, firmó el acuerdo para la cesión de instalaciones en el puerto de Manta y que fueran utilizadas como base para el control del narcotráfico en la zona por parte de Estados Unidos.¹³⁷

La Frontera Norte comenzó a ser vista como un lugar problemático y vulnerable para la seguridad de los ecuatorianos, y percibida por los sucesivos gobiernos como un espacio de tránsito de grupos irregulares provenientes del conflicto colombiano, de presencia de economías ilegales y de proliferación de mafias organizadas.¹³⁸ Y respondiendo con el incremento del número de militares en la frontera: para el año 2000 ya existían 2500 soldados en la frontera norte ecuatoriana, siendo instalados nuevos puestos fronterizos; y para diciembre de 2001, el Ejército ecuatoriano tenía ya a ocho mil hombres entre policías y militares en la zona.¹³⁹

Es decir, desde el inicio del Plan Colombia, Ecuador desplegó una estrategia basada en el enfoque militar y de seguridad nacional,¹⁴⁰ para resguardar la soberanía nacional y el territorio, tratando de evitar la llegada de irregulares colombianos a Ecuador y la posible extensión de cultivos de coca a suelo ecuatoriano. Roque Espinosa plantea que el Plan Colombia reposiciona la idea de que existe un enemigo en la frontera norte al que es imprescindible combatir, posicionando el discurso de la seguridad nacional, donde el uso de la fuerza es esencial, apelando “a la guerra como único mecanismo para resolver el conflicto”.¹⁴¹ Y ello exige, no sólo el incrementar la “presencia de la fuerza pública (policía y fuerzas armadas), sino implantar medidas de control y si es necesario de carácter represivo de manera de conjurar los males sociales, entre ellos la violencia desatada”.¹⁴²

¹³⁶ *Ibíd.*, 190.

¹³⁷ Gómez, “Políticas públicas de seguridad”, 131.

¹³⁸ *Ibíd.*, 129.

¹³⁹ Lorena Isabel Sánchez de la Vega, “El Ecuador frente al Plan Colombia. Inseguridad en la frontera colombo-ecuatoriana”, *Revista IIDH/Instituto Interamericano de Derechos*, No. 38 (Julio a diciembre 2003), 238.

¹⁴⁰ Conceptualizada como “las capacidades materiales y en el uso y control de la fuerza militar por los Estados, y las concepciones recientes que aluden a amenazas militares, políticas, económicas, sociales y ambientales, que afectan no sólo a los Estados sino a los grupos e individuos”, en Luz del Carmen Martí de Gidi, *La seguridad nacional y el acceso a la Información pública en México*. Edición electrónica, en <<http://www.letrasjuridicas.com/Volumenes/13/Imarti13.pdf>>. Consulta: 25 de agosto de 2017.

¹⁴¹ Roque Espinosa, “Imaginarios y retórica en torno a las fronteras ecuatorianas”, en *Kipus Revista andina de letras*, No. 23 (I semestre 2008), 82.

¹⁴² Roque Espinosa, “Anotaciones sobre los discursos en torno a la frontera colombo-ecuatoriana”, en *Comentario Internacional, Revista del Centro Andino de Estudios Internacionales*, No. 6 (2006), 281.

Esta estrategia se hace muy evidente en el año 2002, con la publicación del Libro Blanco de la Defensa,¹⁴³ elaborado por el Ejército ecuatoriano, donde se recogen los lineamientos generales del rol de las Fuerzas Armadas y de la estrategia de seguridad nacional del Ecuador. En este libro se establece que “La defensa responde a los objetivos de la seguridad nacional para el mantenimiento de la soberanía y protección de la población, las fronteras y los recursos naturales contra cualquier tipo de agresión”.¹⁴⁴ Y añade que “La progresiva implementación del Plan Colombia y el Plan Patriota en todas sus fases y acciones conexas constituye otra de las principales preocupaciones de seguridad a nivel vecinal y subregional andino”;¹⁴⁵ expresando, asimismo, que

En la actualidad, las amenazas a la seguridad más significativas son aquellas que se derivan del riesgo de extensión de situaciones de violencia más allá de las fronteras, con acciones de fuerza, proveniente de grupos ilegales armados; y, con diverso grado de incidencia, el narcotráfico, el tráfico ilícito de armas, el crimen organizado transnacional y el terrorismo.¹⁴⁶

Y se concluye, en que, pese al mantenimiento de la posición de no involucramiento en el conflicto colombiano, ni la realización de actividades conjuntas, “El Ecuador ratifica la irrestricta decisión de hacer respetar la soberanía nacional y garantizar la inviolabilidad del territorio ecuatoriano; [...] así como la adopción de las medidas necesarias y soberanas para impedir la presencia y el accionar de los grupos ilegales armados en el territorio nacional”.¹⁴⁷

De esta forma se confirma la consolidación de una respuesta militar y securitista, desde la visión clásica de la seguridad nacional, y con una clara influencia de la estrategia de Estados Unidos para la región, basada en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo, representado en este caso por los grupos armados irregulares de Colombia.¹⁴⁸ En la frontera norte y de manera particular en Sucumbíos la aplicación tanto del Plan Colombia o su continuidad, el Plan Patriota, y el alineamiento ecuatoriano a la estrategia de lucha contra el narcotráfico y las fuerzas irregulares en la frontera ecuatoriana supuso una serie de consecuencias graves para la población civil asentada en esta zona e integrada, tanto por población ecuatoriana como por población colombiana de

¹⁴³ Ecuador, Ministerio de la Defensa Nacional, “Libro Blanco de la Defensa Nacional”, *Ministerio de Defensa Nacional*, 2006.

¹⁴⁴ Ministerio de Defensa, “Libro Blanco”, 11.

¹⁴⁵ *Ibíd.*, 25.

¹⁴⁶ *Ibíd.*, 42.

¹⁴⁷ *Ibíd.*, 49.

¹⁴⁸ Pablo Medina Pérez, *La asistencia militar estadounidense y la evolución de las fuerzas armadas y la política de defensa del Ecuador* (tesis de maestría, Flacso sede Ecuador, 2007), 55.

larga data que se había ido asentando en la parte ecuatoriana o que tras la aplicación del Plan Colombia habían escapado hacia el Ecuador buscando refugio y protección.

Tal como expresó Patricio Benalcázar, en calidad de Presidente de la Fundación Regional de Derechos Humanos (INREDH), hoy Defensor del Pueblo Adjunto, se presenta “una confusión entre “actores de la violencia” y las “víctimas de la violencia”, determinando que la sociedad juzgue a todos por igual, bajo “estigmas sociales”, lo que ha hecho que los operativos de control por parte del Ejército, terminen siendo contra las comunidades de frontera”.¹⁴⁹

Se hace evidente como en la aplicación de la estrategia de control, la población de la frontera es visualizada por los militares, especialmente por las relaciones históricas habidas, como un sujeto que debe ser controlado, utilizando para ellos los medios que conocen y que son los relacionados con la guerra, en su objetivo de “acabar con la base social de la guerrilla y desarticular la frontera como un espacio funcional a esta organización política-militar”.¹⁵⁰

Por otro lado, se produce durante estos años 2000 a 2006, una presencia muy visible del Ejército colombiano en la frontera y en territorio ecuatoriano, “empezaron a entrar a territorio ecuatoriano buscando personas o perseguir a las FARC”,¹⁵¹ en su empeño por controlar la actividad de narcotráfico y acabar con los grupos guerrilleros y con los apoyos sociales que de una u otra forma recibían, tanto en Colombia, como en Ecuador.

Durante los citados años las violaciones al territorio ecuatoriano por parte del Ejército colombiano fueron fundamentalmente de dos tipos:

1. Haciendo patrullajes o buscando a personas determinadas para llevárselas hacia territorio colombiano, señalándolas como guerrilleras.¹⁵²
2. Fumigaciones aéreas (entre años 2000 y 2007) para acabar con los cultivos de coca en la zona de frontera, sobrevolando comunidades ecuatorianas y causando graves

¹⁴⁹ González, “Balance de los estudios”, 154

¹⁵⁰ Laura González C, *Peones en un ajedrez militar: los habitantes de la frontera norte*, (Quito: Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH, 2011), 197.

¹⁵¹ Entrevista con María Pantoja.

¹⁵² Laura González, *Fronteras en el Limbo. El plan Colombia en el Ecuador* (Quito: Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH, 2008), 52.

consecuencias tanto en la salud como en las tierras de comunidades campesinas e indígenas asentadas en frontera.¹⁵³

Ambas violaciones a derechos produjeron reacciones de distinto tipo por parte del gobierno ecuatoriano. En el caso de los efectos de las fumigaciones determinó la presentación de una demanda internacional contra Colombia en el 2008 ante el Tribunal de la Haya, de la que desistió en 2013.¹⁵⁴ Y respecto a la violación de la soberanía territorial, Ecuador en algunos casos presentó notas diplomáticas de protesta, que no tuvieron ningún resultado y en otros el mismo Ejército ecuatoriano “niegan que haya incursiones, niega que pasen avionetas de fumiga, aceptan la política colombiana”.¹⁵⁵

Esta falta de respuesta real, tanto del Estado como de la sociedad en general, pudo deberse, además de las relaciones entre ambos países a: la alta legitimidad que el Ejército tenía en el país, como garante histórico del orden democrático y constitucional del país; y al desarrollo de un imaginario social que sobre la población de frontera se había ido construyendo y que permanece intacto hasta nuestros días.

Tal como expresa Lourdes Harb, respecto a la frontera norte se desarrolló una “inflación paranoica respecto al peligro real de insertarnos en una dinámica de violencia similar a la de Colombia, debido en parte, [...] a la información fragmentada y los juicios de valor enunciados, en mayor o menor proporción, que se difunden a través de los distintos medios de comunicación y de opinión”.¹⁵⁶

En este sentido Luis Ángel Saavedra afirma que, “se empieza a generar un imaginario no sólo en frontera, también la colectividad y opinión pública nacional y se mira hacia la frontera preguntando qué está pasando, con un sesgo de seguridad y de violencia. Los actores locales se miran como violentos, aliados a las FARC”.¹⁵⁷ La frontera se ve como una guerra de alta intensidad y peligrosa” Lo cual permitió crear un escenario que justifique, incluso exija la adopción de medidas extremas de control, la

¹⁵³ Petición de afectados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre efectos de las fumigaciones, Documento digital, 15 de marzo de 2006, en <http://www.inredh.org/archivos/casos/fumigaciones/fumig_peticion_cidh_06.pdf>. Consulta: 5 de julio de 2017.

¹⁵⁴ “Ecuador termina litigio con Colombia por las fumigaciones en la frontera”, *El Telégrafo* (Ecuador), 12 de septiembre de 2013, <<http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/1/ecuador-y-colombia-llegan-a-acuerdo-sobre-fumigaciones-en-frontera>>. Consulta: 10 de agosto de 2017.

¹⁵⁵ Entrevista realizada a Adolfo Maldonado, Acción Ecológica, realizada por Jorge Acero en Nueva Loja, 12 de septiembre de 2017.

¹⁵⁶ Lourdes Gisella Harb Muñoz, “La construcción mediática del otro. El caso de la Frontera Norte” (tesis de maestría, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2004), 32.

¹⁵⁷ Entrevista a Luis Ángel Saavedra.

militarización de la frontera norte, hasta justifique la existencia de violación de derechos en favor de un control y prevención efectivos.¹⁵⁸

En este sentido es muy ilustrativo uno de los argumentos usados por la Delegación de la Defensoría del Pueblo en Sucumbíos en la resolución de un caso de denuncia de posible violación a derechos humanos en la comunidad de Yana Amarum, en el río San Miguel, en 2007

Que, ante tales circunstancias [supuesto enfrentamiento entre ejército ecuatoriano y miembros de las Farc en las cercanías de la comunidad de Yana Amarum] por la presencia de elementos de grupos ilegales armados, se hizo indispensable el registro de todas las instalaciones, personas, vehículos, casas, escondites, túneles que podrían estar vinculados con estos elementos irregulares, actuando de la manera establecida en las normas de comportamiento, con el respeto a la integridad personal, y de los bienes; por lo tanto en ningún momento se destruyó enseres, ni documento alguno perteneciente a los alumnos ecuatorianos que se educan en la escuela del sector[...] Los habitantes de la comunidad de Yana Amarum tienden a tergiversar la verdad, cambiando artificialmente las cosas, induciendo al engaño, con el único propósito de desprestigiar a las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, que vienen cumpliendo la misión específica de defender la integridad territorial, haciéndose víctimas de los hechos que realmente no ocurren y lo hacen simplemente por cuanto se presume tienen interés a que no se patrulle y controle en esas áreas debido a ciertos nexos que mantendrían con elementos ilegales.¹⁵⁹

Es muy ejemplificante esta resolución tanto de la legitimidad con la que se presupone actúa el Ejército al cumplir su objetivo de proteger las fronteras de la patria; como la desconfianza hacia la población local y su estigmatización o presunción de cooperación con los grupos irregulares, y, por tanto, dignos de poca confianza.

Pero además de la militarización, se planteó la necesidad de apoyar el desarrollo de la zona, en el mismo Libro Blanco las Fuerzas Armadas hablan de que, además del control militar, “el centro de gravedad está en el desarrollo social y económico de la frontera”.¹⁶⁰ Por ello, el Gobierno crea la Unidad de Desarrollo del Norte, UDENOR,¹⁶¹ en el año 2003, como unidad administrativa directamente dependiente del Presidente de la República. “En su presentación, se aducen dos tipos de causas para la creación de UDENOR. Las primeras corresponderían a razones coyunturales como es el conflicto colombiano derivado de la presencia de grupos irregulares y del narcotráfico; y, las segundas, de tipo estructural que se refiere a la desatención por parte del estado a las

¹⁵⁸ Harb, “la construcción mediática”, 89.

¹⁵⁹ Ecuador, Defensoría del Pueblo, “Resolución”, *Caso No. 03-AP-2008*, 13 de junio del 2008.

¹⁶⁰ Ministerio de Defensa, “Libro Blanco”, 31.

¹⁶¹ Ecuador, Presidencia de la República, “Decreto Ejecutivo 640”, en *Registro Oficial No. 134* (3 de agosto de 2003).

zonas fronterizas”.¹⁶² Como se expresa en el Libro Blanco, se aprecia que es imprescindible actuar intentando paliar el abandono institucional de esta zona, que ha producido inequidad social y económica y que supone un grave riesgo frente a las medidas para evitar la expansión del conflicto y la delincuencia existente en Colombia.¹⁶³

Sus principios fueron: inclusión social y equidad, paz y seguridad, descentralización, organización y participación y sustentabilidad; los mismos que se ajustarían a los ejes de gobierno: infraestructura social, infraestructura productiva, desarrollo social y productivo.¹⁶⁴

2.3. La frontera de Sucumbíos entre 2008 y 2016

A principios del año 2007, Rafael Correa llega a la presidencia de la República en Ecuador y uno de sus primeros actos públicos, en abril de ese año, fue la presentación del Plan Ecuador. Según la presentación oficial, este programa de Estado nacía, no sólo para sustituir al fracasado UDENOR en sus esfuerzos por llevar desarrollo a la frontera sino, especialmente, como una “alternativa de paz, desarrollo humano y sustentable de la Frontera Norte frente a los efectos no deseados del Plan Colombia”.¹⁶⁵

Esta presentación lleno de esperanza a la población de Sucumbíos y de frontera que por años había reclamado la atención del Estado y había sufrido una desatención crónica, además de los efectos de la violencia del Plan Colombia, tanto por fuerzas irregulares como regulares de Colombia y Ecuador. Tal como decía el Ministro de Defensa, Javier Ponce, era “necesario constituir una relación del Estado con las poblaciones fronterizas; pues éstas no han tenido una presencia del Estado, su única presencia ha sido militar, pero no del resto del aparato estatal”.¹⁶⁶

Esta visión quedó reflejada en la Constitución de 2008, en cuyo artículo 393 establece expresamente la seguridad humana¹⁶⁷ como la estrategia para afrontar y prevenir la violencia

¹⁶² Alicia Guzmán León, “El Impacto del Plan Colombia a la Asistencia Internacional en Carchi, Sucumbíos y Esmeraldas 1998-2001” (tesis de maestría, Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador, 2003), 28.

¹⁶³ Ministerio de Defensa, “Libro Blanco”, 31.

¹⁶⁴ González, Peones, 40.

¹⁶⁵ *Ibíd.*

¹⁶⁶ Johanna Espín M, “La coordinación interinstitucional: Un aporte decisivo en la relación Estado y poblaciones fronterizas. Diálogo con Javier Ponce”, en Fernando Carrión, Diana Mejía y Johanna Espín Compiladores *Aproximaciones a la frontera*, 138-140 (Quito: FLACSO Sede Ecuador, 2013), 139.

¹⁶⁷ Comisión de la Seguridad Humana, *La Seguridad Humana Ahora*, (Nueva York: Comisión de Seguridad Humana, 2003), 18. Define la seguridad humana como “proteger la esencia vital de todas las vidas humanas de una forma que realce las libertades humanas y la plena realización del ser humano.

El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno.¹⁶⁸

Este cambio conceptual es fundamental, puesto que la seguridad se había centrado tradicionalmente en la protección de la soberanía y la integridad territorial; mientras que el nuevo enfoque implica el bienestar de las personas, abarcando su integralidad y la búsqueda de la garantía del disfrute de sus derechos humanos. Así, mientras que en la concepción tradicional el medio para garantizar la seguridad es especialmente la disuasión militar, desde la seguridad humana, es el desarrollo el medio de garantía de la seguridad.¹⁶⁹

Y junto al cambio normativo, hechos coyunturales como el bombardeo colombiano de un campamento guerrillero, ubicado en territorio ecuatoriano -Angostura 1 de marzo de 2008-, y que permitió constatar la situación real del Ejército, permitieron al gobierno actuar para promover una serie de cambios que buscaban desmilitarizar la seguridad del Estado.¹⁷⁰

En esta línea, la Ley de Seguridad Pública y del Estado establece en una serie de artículos la profundización del sometimiento del Ejército al poder civil, limitando su autonomía y determinando claramente sus funciones.¹⁷¹ Y posicionando “al Ministerio de Defensa como rector de la defensa y soberanía del Estado, y a las Fuerzas Armadas como

Seguridad humana significa proteger las libertades fundamentales: libertades que constituyen la esencia de la vida. Significa proteger al ser humano contra las situaciones y las amenazas críticas (graves) y omnipresentes (generalizadas). Significa utilizar procesos que se basan en la fortaleza y las aspiraciones del ser humano. Significa la creación de sistemas políticos, sociales, medioambientales, económicos, militares y culturales que, en su conjunto, brinden al ser humano las piedras angulares de la supervivencia, los medios de vida y la dignidad”. Y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en El enfoque de la seguridad humana tres estudios de caso (IIDH/PNUD: Costa Rica, 2011) afirman que “El concepto de seguridad humana cobra fuerza a partir de su incorporación y conceptualización en el Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD de 1994, que lo introduce de manera formal en el trabajo de las Naciones Unidas. Estas son las bases para la re-conceptualización del concepto de seguridad, el cual ya no se fundamenta en las nociones de soberanía, territorialidad y poderío militar -que fueron tradicionales-, sino en lograr la libertad para vivir sin temor y sin miseria. También son las bases para el establecimiento del derecho de los derechos humanos. Ambos tienen como raíz común la búsqueda de la dignidad humana”, página 15.

¹⁶⁸ Constitución del Ecuador, art.393.

¹⁶⁹ Belén Espinel Rodas, “Plan Nacional de Seguridad Integral ¿discurso o posibilidad? Análisis del caso de la Policía Nacional dentro del Plan Nacional de Seguridad Integral propuesto por el Estado ecuatoriano” (tesis de maestría, Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador, 2016), 17.

¹⁷⁰ Sebastián Vallejo Vera, “Angostura, 30-S y la militarización de la seguridad interna” (tesis de maestría, Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador, 2014), 46.

¹⁷¹ *Ibíd.*, 52.

su ejecutor, modificando la anterior prerrogativa como defensores de la Constitución”,¹⁷² eliminándole con ello su capacidad de decisión sobre el poder constituido.

Siguiendo esta evolución, se presentó en 2011 el Plan Nacional de Seguridad Integral 2010-2014,¹⁷³ el cual desarrolla el concepto de Seguridad Humana, situando al ser humano como eje principal y transversal de seguridad e incorporando al ciudadano como actor protagónico y cuya participación es esencial en todos los procesos de seguridad; sin duda, se busca la desmilitarización del concepto de seguridad.¹⁷⁴ Así, afirma que

Una vez aprobada la Constitución de 2008, la tradicional concepción de Seguridad Nacional sufrió una transformación paradigmática bajo una nueva dimensión humana-integral, como respuesta al mandato ciudadano de un Estado que garantiza los derechos del ser humano y la naturaleza. Ello ha significado un gran reto para las instituciones del sector que han debido enfrentar los nuevos y dinámicos escenarios de la seguridad y que exigen una reinstitucionalización estructural y funcional y un modelo de planificación articulado a los objetivos de la Ley de Seguridad Pública y del Estado y al Plan del Nacional del Buen Vivir.¹⁷⁵

Sin embargo, este intento político no se convierte en una realidad visible en frontera norte, evidenciándose especialmente tras la reacción del gobierno ecuatoriano ante la agresión de Angostura el 1 de marzo de 2008. En primer lugar se rompen relaciones diplomáticas con Colombia, siendo reestablecidas plenamente en noviembre de 2010;¹⁷⁶ señalando que tras esta agresión, el Ejército colombiano dejó de ingresar a territorio ecuatoriano, “no se escuchó más entradas de Ejército colombiano al Ecuador en el San Miguel”,¹⁷⁷ lo cual era habitual antes de 2008.

Y en segundo lugar, el Ejército ecuatoriano reforzó su presencia en la frontera de Sucumbíos, con más número de efectivos y patrullajes, desarrollando un involucramiento mucho mayor en el control de la frontera y de los grupos irregulares, lo que ocasionará que el autor principal de violaciones a derechos humanos en frontera, a partir de este momento, fueran las fuerzas armadas ecuatorianas.

Ello implicó el mantenimiento y profundización del concepto clásico de seguridad nacional, como defensa de la frontera y la soberanía territorial, que ya se había practicado en los años anteriores; dejando en el aire los principios y teoría establecidos en la

¹⁷² Vallejo, *Angostura*, 52.

¹⁷³ Ecuador, Ministerio de Coordinación de la Seguridad, “Plan Nacional de Seguridad Integral 2010-2014”, *Ministerio de Coordinación de la Seguridad*, 2010.

¹⁷⁴ *Ibíd.*, 67.

¹⁷⁵ *Ibíd.*, 35.

¹⁷⁶ “Se reestablecen las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia”, *El País* (España), 27 de noviembre de 2010, <<http://bit.ly/RelacionesColombiaEcuador>>. Consulta: 3 de julio de 2017.

¹⁷⁷ Entrevista con María Pantoja.

Constitución, la legislación y las políticas públicas que recogen la seguridad humana como eje de desarrollo, que finalmente no lograron desarrollarse.

Esta afirmación se evidencia de la revisión de algunas noticias aparecidas durante 2008 y 2009 en prensa y que recogen los planteamientos tanto del Ejecutivo ecuatoriano como de las Fuerzas Armadas. En noviembre de 2008, el Viceministro de Defensa del Ecuador, Miguel Carvajal afirmó que “Vamos a repeler cualquier presencia de grupo armado regular o irregular (...), y es una disposición clara del presidente Rafael Correa y es una política clara del gobierno nacional”,¹⁷⁸ añadiendo que “Nosotros tenemos tolerancia cero respecto a la presencia de grupos irregulares, y ninguna tolerancia sobre la injerencia o la penetración o la infiltración de grupos oficiales del Estado colombiano”.¹⁷⁹

En igual sentido, al cumplirse el primer año del ataque sobre Angostura, el general Fabián Varela, jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, reiteró ante la prensa la cero tolerancia con las FARC en el Ecuador,¹⁸⁰ en este sentido, expresó que “Nuestra posición y el lineamiento político y de los militares es ninguna tolerancia ante la presencia de cualquiera de estas amenazas -los grupos rebeldes y paramilitares colombianos y el tráfico de armas y de drogas- en el territorio de nuestra frontera norte”.¹⁸¹

A pesar del discurso contrario a mantener en el Ecuador una política de seguridad que había estado marcada por la estrategia de los Estados Unidos en la región¹⁸² y evidenciada por el desarrollo del Plan Colombia, el Estado ecuatoriano, no sólo mantuvo “una línea militar que responde a la urgencia constante que tiene por demostrar(se) como soberano en todo su territorio”,¹⁸³ sino que, como resultado de Angostura, se profundizó la militarización y el control de la frontera. Así, se incrementó significativamente el gasto militar durante los primeros años del Gobierno, “En 2008 el presupuesto anual del MIDENA habría sido superior a los USD 950 millones. En 2009 este habría subido a poco más de USD 1 000 millones, y para el 2010 se tiene la aspiración de duplicar esa

¹⁷⁸ “Ecuador amplía advertencia a Colombia sobre incursiones en su territorio”, *El Tiempo* (Ecuador), 13 de noviembre de 2008, <<http://www.eltiempo.com.ec/noticias/ecuador/4/198233/ecuador-amplia-advertencia-a-colombia-sobre-incursiones-en-su-territorio>>. Consulta: 5 de agosto de 2017.

¹⁷⁹ *Ibíd.*

¹⁸⁰ “Jefe militar de Ecuador reitera cero tolerancia con FARC”, *La Hora* (Ecuador), 1 de marzo de 2009, <<https://www.lahora.com.ec/noticia/844902/home>>. Consulta: 5 de agosto de 2017.

¹⁸¹ *Ibíd.*

¹⁸² Entrevista a Luis Ángel Saavedra.

¹⁸³ Adrián López A, “*La soberanía y sus fronteras: frontera norte y estado ecuatoriano*” (tesis de maestría, FLACSO Sede Ecuador, 2010), 81-2.

cifra”¹⁸⁴ y los presupuestos de 2011 y 2012 mantuvieron esa línea de incremento, mientras en 2011 llegó a 1.699 millones, en 2012 alcanzó los USD 1648 millones.¹⁸⁵

Evidenciándose para el 2012, tras los primeros 5 años del gobierno de Rafael Correa, que “la promesa de la renovación de la doctrina política de las Fuerzas Armadas aún no ha sido cumplida por el Gobierno”,¹⁸⁶ y que el Ejército seguía teniendo un poder muy relevante en el Estado. Poder que fue ratificado e incluso incrementado tras el supuesto golpe de Estado del 30 de septiembre de 2011, donde los militares volvieron a ejercer de garantes de la democracia.¹⁸⁷

Esta realidad se mantuvo en los años posteriores, como quedó evidenciado en la rendición de cuentas que el Ministro de Defensa, Ricardo Patiño hizo en 2017 respecto a la década correísta en defensa, donde informó que “La inversión en Defensa fue 5.7 veces mayor a otros gobiernos al pasar de 304 a 1.754 millones de dólares en los últimos diez años”,¹⁸⁸ rendición de cuentas en la que el Ministro mantuvo el discurso de control y seguridad en la frontera y persecución a la guerrilla a través del “despliegue de personal militar con efecto disuasivo a grupos irregulares”.¹⁸⁹

En la realidad del contexto de la frontera sucumbiese, el 2008 marcó el renovado incremento del número, presencia e intento de control de militares ecuatorianos en la zona, junto al reforzamiento del esfuerzo colombiano contra la guerrilla y presión cada vez mayor de las FARC en la zona. Así lo expresa el Relator Philip Alston en su Informe tras la visita al Ecuador en 2010

Desde comienzos de 2008, sin embargo, la presencia de agentes armados ha aumentado y se ha diversificado, la dinámica del control se ha vuelto inestable y la seguridad de los civiles se ha deteriorado. A medida que los esfuerzos de Colombia por combatir los grupos armados ilegales han arrinconado a estos en las zonas marginales de Colombia, el cruce al Ecuador se ha vuelto cada vez más frecuente. Además, tras un ataque aéreo de Colombia a una base de las FARC en Sucumbíos realizado en marzo de 2008, la presencia militar del Ecuador en la zona aumentó considerablemente.¹⁹⁰

Además del refuerzo militar de ambos países en la frontera, y tras el restablecimiento de las relaciones con Colombia, fue muy evidente la coordinación entre

¹⁸⁴ *Ibíd.*, 82.

¹⁸⁵ Programa Democracia, Seguridad y Defensa, *Boletín Bimensual Hacia una Cultura de diálogo y Paz*, Universidad católica del Ecuador, PUCE, N°51 (marzo - abril 2012).

¹⁸⁶ *Ibíd.*

¹⁸⁷ *Ibíd.*

¹⁸⁸ “Ministro Ricardo Patiño destaca los logros de la década en Defensa”, *Ministerio de Defensa del Ecuador*, 17 de mayo de 2017, <<http://www.defensa.gob.ec/ministro-ricardo-patino-destaca-los-logros-de-la-decada-en-defensa/>>. Consulta: 6 de agosto de 2017.

¹⁸⁹ *Ibíd.*

¹⁹⁰ ONU, “Informe Alston”, párr. 3.

ambos para la lucha contra la guerrilla y el narcotráfico. Así, el 10 de junio de 2011, se firmó en la ciudad de Puerto el Carmen, sobre el río Putumayo, en la provincia de Sucumbíos, el Programa de acción binacional para fortalecer la seguridad fronteriza entre los Ministerios de Defensa de Ecuador y Colombia,¹⁹¹ centrándose el mismo en estrechar las relaciones bilaterales respecto a la seguridad en frontera y establecer los mecanismos adecuados para facilitar la coordinación, compartido de información, planeación y establecimiento de procedimientos al respecto, especialmente en la lucha para enfrentar amenazas comunes,¹⁹² entre ellas, los grupos irregulares y las actividades de narcotráfico.

Esto evidencia que Ecuador había entrado abiertamente en el conflicto colombiano y la alianza para la lucha combinada entre ambos países, algo a lo que antes del 2008, el gobierno ecuatoriano se había negado, “el gobierno de la revolución ciudadana está finalmente consolidando el yunque tan anhelado por los planificadores de la guerra antisubversiva y transformando a la zona de frontera en un territorio en disputa, donde los actores armados, nacionales y extranjeros, regulares o irregulares, se disputan su control”.¹⁹³

El efecto yunque y la colaboración entre ambos gobiernos ha sido muy visible durante estos años, evidenciándose en múltiples encuentros y acuerdos binacionales en la materia, como

- El Encuentro Presidencial y I Reunión del Gabinete Binacional Ecuador – Colombia, celebrado en Tulcán en diciembre de 2012, donde el presidente colombiano Juan Manuel Santos afirmó que en el tema de la seguridad y defensa “la colaboración es absoluta y totalmente necesaria”, agradeciendo por ello al Presidente Correa.¹⁹⁴

- El Acuerdo de apoyo e intercambio de información firmado el 19 de marzo de 2013 entre ambos Ministerios de Defensa, donde la Ministra ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, señaló que “la colaboración binacional cierra la opción de aprovechar la frontera por insurgentes”.¹⁹⁵

¹⁹¹ Ecuador, Ministerio de Defensa Nacional, “Programa de acción binacional para fortalecer la seguridad fronteriza entre los ministerios de defensa de Ecuador y Colombia”, en *Registro Oficial* 525 (01 de septiembre de 2011).

¹⁹² *Ibíd.*

¹⁹³ Luis Ángel Saavedra, “Presentación”, en González, *Fronteras en el Limbo* (obra ya citada), 6.

¹⁹⁴ “Rafael Correa: en el tema que más logros se alcanzado es el tema de seguridad, en el Encuentro Presidencial y I Reunión del Gabinete Binacional Ecuador – Colombia”, *Ministerio de Defensa Nacional* (Ecuador), comunicado digital, en <<http://www.defensa.gob.ec/rafael-correa-en-el-tema-que-mas-logros-se-alcanzado-es-el-tema-de-seguridad-en-el-encuentro-presidencial-y-i-reunion-del-gabinete-binacional-ecuador-colombia/>>. Consulta: 7 de agosto de 2017.

¹⁹⁵ “Ministros de Defensa de Ecuador y Colombia firmaron acuerdo de apoyo e intercambio de información”, *Ministerio de Defensa Nacional* (Ecuador), comunicado digital, en

- Encuentro de Altas Autoridades (Ministros y Viceministros) de los Ejes de Seguridad y Defensa de Ecuador y Colombia, celebrado entre el 26 y el 27 de septiembre de 2013 en Cali, donde una de las prioridades del Ecuador era “asegurar una presencia militar activa y permanente en el control de la frontera norte y destacar la activa presencia del Ecuador en esa zona limítrofe”.¹⁹⁶

De igual forma, en la frontera se sintió esa colaboración evidenciándose en que desde 2011 “hay denuncias de patrullajes con algunos encapuchados, algunos con deje colombiano según cuenta la gente, incluso con zapatos que los diferencian de los ecuatorianos”.¹⁹⁷

En cuanto a la evolución del Plan Ecuador o plan social para la frontera, según Julio González, que fue secretario técnico del Plan Ecuador, el mismo inició “enmarcado en el Plan del Buen Vivir, intentando integrar la frontera hacia el Estado con carreteras, comunicaciones, fortaleciendo institucionalidad”.¹⁹⁸ Sin embargo, “esta visión duró hasta el 2010, principios del 2011, donde se ve un cambio de visión, se da el Ministerio de Coordinación a militares (vicealmirante Arellano –dic 2010) y Plan Ecuador a contraalmirante Zurita militarizando el plan de desarrollo”.¹⁹⁹

Esta entrega de Plan Ecuador a los militares parece responder a la mirada de los militares hacia la frontera, como dice Luis Ángel Saavedra “la voluntad de Plan Ecuador existió, pero el fracaso se generó por la visión sesgada de la realidad, los militares necesitaban mantenerse al mando y por ello necesitaban escenarios de violencia”.²⁰⁰

Y a posibilitar esta situación, de la misma forma que en los años anteriores, contribuyó el mantener e incluso empeorar la imagen de la frontera norte y de la gente que vive en ella, imaginario que ampara una libertad de acción del Ejército al actuar en la zona, “se mantiene el interés en ver al frontera sólo desde lo conflictiva que puede ser, [...], teniendo el Ejército un interés especial en mostrar esa supuesta cara de la frontera para facilitar su accionar y la impunidad por los abusos que cometen en la misma, en aras

<http://www.defensa.gob.ec/ministros-de-defensa-de-ecuador-y-colombia-firmaron-acuerdo-de-apoyo-e-intercambio-de-informacion/>. Consulta: 7 de agosto de 2017.

¹⁹⁶ “Ecuador promueve presencia militar activa y permanente en control de frontera norte”, *Ministerio de Defensa Nacional* (Ecuador), comunicado digital, en <http://www.defensa.gob.ec/ecuador-promueve-presencia-militar-activa-y-permanente-en-control-de-frontera-norte/>. Consulta: 7 de agosto de 2017.

¹⁹⁷ Entrevista realizada a Maritza Flores, Pastoral Fronteriza de la Iglesia de San Miguel de Sucumbíos, realizada por Jorge Acero en Nueva Loja, 12 de septiembre de 2017.

¹⁹⁸ Entrevista realizada a Julio González, ex diputado del Congreso de la República y ex secretario técnico de Plan Ecuador, realizada por Jorge Acero en Nueva Loja, 8 de septiembre de 2017.

¹⁹⁹ *Ibíd.*

²⁰⁰ Entrevista a Luis Ángel Saavedra.

de salvaguardar la paz y la soberanía del territorio”;²⁰¹ “sigue viéndose la zona como “altamente violenta, producto de la contaminación del conflicto militar y de la alta delincuencia que se vive en Colombia [...] De allí, la necesidad de plantear la construcción de un dique en el cordón fronterizo que impida la internación de la violencia hacia el resto del país”.²⁰²

Es interesante comprobar como en Ecuador se dio un proceso similar al que se había dado en Colombia, en la época de Uribe y su política de Seguridad Democrática, donde la violencia estatal se apoyó en el pánico moral, descrito como “un fenómeno social que se caracteriza por la generalización de un estado del pánico inducido, sobre la idea de que algo amenaza seriamente los valores, intereses o seguridad de la sociedad, [...] generando estigmatización y desenlaces insospechados”.²⁰³ La autora de esta tesis explica como los medios de comunicación ayudaron a crear en Colombia ese

imaginario colectivo de que la guerra se disputa entre el enemigo terrorista y las fuerzas militares que representan más que al Gobierno, a la nación entera [...] Sobre esa base, las denuncias o acusaciones hechas por defensores de derechos humanos o líderes de opinión, se constituyeron mediáticamente como ilegítimas, y parte de una guerra jurídica emprendida con el fin de ensuciar la imagen de las Fuerzas Militares.²⁰⁴

Esta situación y visión hacia la frontera norte, ha facilitado el consenso sobre el cómo deben ser afrontados los problemas

Primero, las políticas que priman son las de seguridad nacional (soberanía nacional) y escasamente las de seguridad ciudadana (convivencia); segundo, los medios de comunicación invisibilizan o estigmatizan la realidad de la frontera (agenda pública); tercero, las condiciones de vida de la población fronteriza son ignoradas por razones de Estado (seguridad nacional); cuarto, la frontera se convierte en un límite excluyente (barrera) y no en un espacio de integración (lugar común).²⁰⁵

3. Violaciones a derechos humanos en Sucumbíos

En este contexto, especialmente a partir del año 2000, se inician una serie de prácticas violatorias a derechos humanos, presumiblemente de responsabilidad del Ejército ecuatoriano, contra la población de frontera y que irán incrementándose en los años posteriores, especialmente después del 2008 y el bombardeo de Angostura, que

²⁰¹ Entrevista a Luis Ángel Saavedra.

²⁰² Fernando Carrión M., “En el límite de la vida: la violencia fronteriza”, en Fernando Carrión, Diana Mejía y Johanna Espín Compiladores *Aproximaciones a la frontera*, 95-105 (Quito: FLACSO Sede Ecuador, 2013), 95.

²⁰³ Andrea Lucía Rodríguez Oramas, “Factores de Impunidad en ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la Fuerza Pública en el periodo de la seguridad democrática” (tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia, 2014), 47.

²⁰⁴ *Ibíd.*, 49.

²⁰⁵ Carrión M., “En el límite de la vida”, 96.

como se ha explicado supuso la acción directa del Ejército ecuatoriano en el control de frontera y en la lucha anti-subversiva, en colaboración activa con el gobierno y Ejército colombianos; y con un principio en dicha lucha que afecta a la población civil, “el Ejército ecuatoriano no sólo tiene que combatir a los soldados subversivos sino que también necesita luchar contra todas aquellas prácticas simbólicas de la población civil que puedan ser beneficiosas para el grupo armado colombiano”.²⁰⁶

Estas prácticas consisten en:

1. Detenciones arbitrarias

El enorme refuerzo militar en la frontera y la lucha contra el tráfico de droga y la guerrilla, tiene que arrojar resultados, lo que genera presión en los mismos militares y desencadenó en las comunidades detenciones arbitrarias de supuestos guerrilleros que eran pobladores civiles.²⁰⁷

2. Malos tratos físicos y psicológicos y amenazas

En la investigación de campo realizada por Laura González en frontera, se relatan numerosos casos de malos tratos contra población de la frontera; además de amenazas y acusaciones de colaborar con la guerrilla.²⁰⁸

No sólo existe maltrato contra la gente en el sentido de ofensas verbales y físicas, sino también psicológico, por medio de “insultos, hostigamientos directos y a familiares, y en visitas frecuentes a la comunidad denunciante”,²⁰⁹ especialmente a aquellas que se atreven a denunciar la violación de derechos, lo cual va aumentando el miedo entre la población, y la respuesta del silencio ante las posibles represalias.

3. Allanamiento ilegal de viviendas y robos

Se constata un alto número de allanamientos ilegales a casas particulares, especialmente cuando están ausentes las personas “rompiendo cualquier seguridad e ingresando a realizar requisas sin orden legal ni autorización de los propietarios. Dejando a su paso un rastro de desorden, destrucción y desaparición de bienes y objetos de variado tipo”.²¹⁰ A veces cuando la persona está en la casa ocurre lo mismo, e incluso puede ser acusada de que esos objetos son de la guerrilla o que su finalidad es la venta a la misma.²¹¹

4. Ocupación de espacios colectivos o comunitarios

²⁰⁶ González, *Peones*, 103.

²⁰⁷ *Ibíd.*, 109.

²⁰⁸ *Ibíd.*, 111.

²⁰⁹ *Ibíd.*

²¹⁰ *Ibíd.*, 112.

²¹¹ *Ibíd.*

También se produce “el uso de espacios colectivos como casas comunales o incluso escuelas, utilizando, junto al ingreso a las viviendas mecanismos violentos que “ultrajan” los espacios domésticos y de representación de la población civil”,²¹² con el objetivo de generar el miedo en la población, de romper la posible unidad de la comunidad y sembrar desconfianza.

5. Retención de alimentos y gasolina; restricción a la movilidad.

En la frontera la movilización se da especialmente por el río, por lo que la gasolina es un elemento esencial para poder realizarla. Se han registrado numerosos casos tanto de restricción a la cantidad de hidrocarburo que podía ser adquirido por una persona, como decomisos, por considerar que la misma era para ser utilizada o vendida a las FARC.²¹³

Y en el mismo sentido, “bajo la misma lógica de cortar todo tipo de abastecimiento para la guerrilla colombiana, el Ejército ecuatoriano ha decomisado en numerosas ocasiones los víveres transportados en las vías fluviales de frontera o incluso en algunos de los controles militares existentes en las vías de acceso hacia la frontera”.²¹⁴

Sobre las formas de actuación del Ejército ecuatoriano en Sucumbíos, se recoge en el Informe de la Comisión de la Verdad del Ecuador, un testimonio muy revelador de la, en aquel momento, asambleísta por Sucumbíos, Hilda Roca

Desde el 2002 las investigaciones y los operativos llevados a cabo, por parte del Ejército ecuatoriano consistían en torturas físicas, psicológicas de las comunidades por militares ecuatorianos [...]. A veces los padres, las madres son torturadas frente a sus hijos para hacerles declarar o les pegan [...]. Esto se traducían en amenazas psicológicas verbales, patazos, toletazos, pero más es el patazo y el manazo. Cuando los militares se enteraban que en esa casa estuvo un guerrillero [...] en esos casos les agreden más fuerte, les van amenazando, que la próxima venimos y te vamos matando; como decir: la próxima ya sabes, te vas vos o tu familia, a más de decirles hijos de tal, hijos de cual, sapos y de todo, les patean, les maneán, el hecho de que les amarren ya dice todo.²¹⁵

Como se ha dicho, este tipo de violaciones a derechos y sus objetivos se mantienen e incrementan a partir de 2008, así Maritza Flores comenta como “miembros del Ejército ecuatoriano realizan requisas de alimentos en las canoas con la excusa de que pudieran llevarlos para grupos armados”²¹⁶ y Adolfo Maldonado refiere que se decomisan “como gas, gasolina, alimentos, incluso cemento”.²¹⁷

²¹² *Ibíd.*, 115.

²¹³ *Ibíd.*, 120.

²¹⁴ *Ibíd.*

²¹⁵ Comisión de la Verdad, *Informe*, Testimonio de Hilda Dolores Roca Bosques, receptado en Quito, 7 de julio de 2009, Tomo IV, 269.

²¹⁶ Entrevista a Maritza Flores.

²¹⁷ Entrevista a Adolfo Maldonado.

En la misma forma se expresa el Relator Philip Alston en el Informe realizado tras su visita al Ecuador en 2010, al relatar que las violencias más comunes registradas en su visita y de presunta responsabilidad de las Fuerzas Armadas eran “el allanamiento de morada, robos y actos de humillación pública (como el hecho de forzar a las personas a desnudarse en público). Estos abusos parecen ser comunes y quedan impunes. Fui informado también de varios casos graves de tortura y violencia sexual”.²¹⁸

Y el mismo relator le da una posible explicación al afirmar que los militares se habían vuelto más agresivos contra las comunidades y que por tanto “La confianza de la comunidad había disminuido, lo que había privado al Ejército de la información que antes obtenía de los civiles y reducido así su capacidad de disponer de importante información de inteligencia. A fin de compensar esta pérdida, los militares empleaban tácticas abusivas para obligar a los civiles a proporcionar información”.²¹⁹

En este sentido, en el 2013 la Oficina de Derechos Humanos de la Federación de Mujeres de Sucumbíos hizo varias visitas de monitoreo a comunidades de frontera del río Putumayo y San Miguel, a fin de recabar elementos que evidenciaran el comportamiento del Ejército ecuatoriano en la zona,²²⁰ verificando que en las visitas realizadas a 11 comunidades ribereñas del Putumayo (Bocana del Cuembí, Real Cuembí, La Ceiba, Santa Elena, Nueva Unión, Yocarí, El Progreso, El Provenir, San Rafael, Lorenzó y Litoral), se registró que en casi dos de cada tres de ellas (63% - 7 de 11),²²¹ miembros del Ejército ecuatoriano habían despojado o hurtado bienes a personas de la comunidad, entre otros: dinero, relojes, máquinas de coser, computadoras portátiles y USBs; comestibles (gallinas, aceite, arroz, huevos); útiles de cocina o aseo como cilindros de gas, cuchillos; y materiales para transporte como aceite de ligar. En ninguno de los casos el Ejército había realizado pagos por estos materiales, sino que se aprovechó de la ausencia de los dueños, o del revuelto ocasionado en las requisas.

En casi 3 de cada 4 comunidades (72% 8 de 11) los comuneros refirieron daños que el paso del Ejército había ocasionado, en el mobiliario, roturas de alambres de espinos de fincas o rotura de techos y cultivos por el aterrizaje de helicópteros.²²²

²¹⁸ ONU, “Informe Alston”, párr. 13.

²¹⁹ *Ibíd.*, párr. 17.

²²⁰ Oficina de Derechos Humanos de la Federación de Mujeres de Sucumbíos, “Informe de evidencias sobre comportamiento de las Fuerzas Armadas en las comunidades ecuatorianas de frontera”, *Archivo de la Federación de Mujeres de Sucumbíos 2013*, 20 de septiembre de 2013.

²²¹ *Ibíd.*

²²² *Ibíd.*

En la mitad de las comunidades (54%, 6 de 11) las visitas o requisas militares habían estado asociadas a interrogatorios, maltratos verbales y amenazas contra la población y acusaciones de guerrilleros o de colaboradores con los mismos. Y esto con independencia del cargo comunitario (incluso a presidentes o maestros), de la edad (hasta a niños, niñas o adolescentes) o de su régimen estatutario (refugiados o ciudadanos nacionales).²²³

Por su parte, en el recorrido realizado por 6 comunidades ribereñas del Río San Miguel (18 de Noviembre, Fuerzas Unidas, Puerto Nuevo, Real Villanueva, Yana Amarum 2 y Palma Seca), se encontraron situaciones muy similares en cuanto a los hechos y a la cantidad de violaciones a derechos. Incluso se concluye en el Informe realizado tras las visitas que “no se puede descartar que estamos ante una política militar de criminalización o amedrentamiento de las personas que viven en la frontera”.²²⁴

Además de estas violaciones, que se podrían considerar habituales desde el año 2000, se producen a partir de 2008 violaciones a derechos humanos especialmente graves, bien por afectar a un colectivo de personas o bien por constituir graves violaciones a derechos humanos, como actos de ejecución extrajudicial, torturas y malos tratos, detenciones arbitrarias y deportaciones ilegales de personas, incluso algunas bajo la protección internacional del Estado ecuatoriano, en calidad de refugiadas. A continuación se detallan algunas de estas violaciones:

Caso Bosque Protector Triángulo de Cuembí

En junio de 2007 la Presidencia de la República firma el Decreto presidencial 433²²⁵ sobre la delimitación de espacios geográficos nacionales reservados en zonas de frontera, que quedan bajo la vigilancia de las Fuerzas Armadas del Ecuador, estableciendo en su Lit. c) del punto 2, como objetivo el “Control y neutralización de aquellos elementos o asociaciones nacionales o extranjeras identificadas como antagónicas a los intereses de la seguridad interna y externa del Estado”.²²⁶

En este contexto, en 2010 el Ministerio del Ambiente²²⁷ declara Bosque y Vegetación Protegida Triángulo de Cuembí, espacio comprendido entre los ríos San Miguel y Putumayo, zona fronteriza de Sucumbíos, con una extensión de 104.238

²²³ Ibíd.

²²⁴ Ibíd.

²²⁵ Ecuador, Presidencia de la República, “Decreto Ejecutivo 433”, en *Registro Oficial Suplemento 114* (27 de junio de 2007).

²²⁶ Ibíd., Literal C, punto 2.

²²⁷ Ecuador, Ministerio del Ambiente, “Acuerdo Ministerial 080”, en *Registro Oficial 239* (20 de julio de 2010).

hectáreas; estableciendo que la protección y control del Bosque y vegetación la efectuará el Ministerio de Defensa.²²⁸

Esta declaración y las competencias de control extraordinarias de los militares sobre la población civil de la zona generaron profunda preocupación en las comunidades de frontera, que en septiembre de 2011, realizaron una medida de hecho para denunciar, entre otras cosas, la falta de consulta sobre la declaración, la preocupación por el accionar militar y solicitar que el Estado se comprometa para que puedan acceder a una “seguridad digna, que respete a los derechos humanos a la vida, la alimentación, la movilidad, la comunicación, el desarrollo humano”.²²⁹

Caso Denuncia masiva contra habitantes de frontera

En oficio 2010024-IV-DE-AYUD, de 18 de febrero del 2010,²³⁰ el General Hugo Villegas, como comandante de la IV División del Ejército Amazonas, envió al Delegado del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA) un listado conteniendo los nombres y apellidos de 430 personas de origen colombiano y su comunidad de residencia en la frontera de Sucumbíos. En el oficio se afirmaba que “tales personas estarían apoyando y colaborando en la perpetración de ilícitos como tráfico de armas, tala ilegal de madera, contrabando y tráfico de sustancias estupefacientes, apoyo a grupos subversivos, entre otros”,²³¹ y se solicitaba que fueran desalojadas de la zona, así como que no se les dieran adjudicaciones de tierra o certificados de posesión que pudieran generar derechos. Esta lista se hizo pública en Sucumbíos y tal como expresó una de las personas incluidas en la misma, “es una irresponsabilidad del Ejército ecuatoriano. La lista genera temor porque van a pensar que uno es guerrillero y corre peligro la vida. ¿De dónde salen las pruebas? Y si las tienen, ¿por qué no nos cogen presos?”²³² Es decir, se generaba el miedo tanto por el señalamiento a personas concretas, como por la solicitud de que se les echara de sus propiedades. Sobre este hecho no se realizó ningún tipo de investigación o aclaración.

²²⁸ *Ibíd.*, art. 6.

²²⁹ “Indígenas Kichwas: resistencia en la frontera”, INREDH, Boletín de prensa digital, 05 de octubre de 2011, <<https://www.inredh.org/index.php/noticias-inredh/actualidad/392-indigenas-kichwas-resistencia-en-la-frontera>>. Consulta: 1 de septiembre de 2017.

²³⁰ “Jefe militar pide el desalojo de 430 colombianos de la frontera”, *El Universo* (Ecuador), 19 de julio de 2010, <<http://www.eluniverso.com/2010/07/19/1/1447/jefe-militar-pide-desalojo-430-colombianos-frontera.html>>. Consulta: 15 de septiembre de 2017.

²³¹ *Ibíd.*

²³² *Ibíd.*

Caso Muertes en el San Miguel²³³

El 18 de enero de 2010, tres personas resultaron muertas por disparos, presuntamente procedentes de una brigada del Ejército ecuatoriano, mientras viajaban en un bote por las aguas del Río San Miguel. El Ejército recibió la inmediata felicitación del Presidente Rafael Correa, que afirmó “nuestros soldados pudieron defenderse y las tres bajas son por parte de las FARC; antes hubieran sido bajas en nuestros soldados”.²³⁴

Sin embargo, la Indagación de la Fiscalía demostró que las tres personas fueron impactadas con munición militar por la espalda, y que había sido un montaje de los militares el haberlas vestido con uniformes de guerrilleros;²³⁵ además, el Fiscal recibió quince testimonios que negaban que las personas hubieran estado uniformadas y armadas. A pesar de las evidencias de la investigación no se consiguió que las Fuerzas Armadas presentaran el listado de integrantes de la patrulla militar que perpetró el asalto por considerarla información clasificada,²³⁶ permitiendo que el caso se mantenga hasta hoy en la impunidad.

El Relator Alston en su Informe de visita al Ecuador, se refiere expresamente a este caso, para afirmar lo poco creíble que resultaba la versión dada por los militares y las amenazas recibidas por familiares y testigos²³⁷

Los testigos y los familiares de los muertos estaban siendo objeto de presiones para que no testimoniaran. Una testigo me dijo que había recibido una llamada en que se le había advertido de que si llevaba adelante la causa acabaría muerta. Al parecer, algunos de los responsables de la investigación también han recibido amenazas. Esas amenazas parecen ser comunes cuando hay oficiales involucrados.

Caso Cochas del Betano²³⁸

El día 18 de octubre de 2012, en las proximidades de la comunidad de Cochas del Betano, ribera del río San Miguel, hubo un tiroteo entre el Ejército ecuatoriano y supuestos miembros de grupos irregulares de Colombia. Tras este hecho un grupo de al menos treinta militares ecuatorianos llegaron a la casa del señor Jorge Eduardo Chapues, ubicada en dicha comunidad, disparando al aire y acusando a las personas que se

²³³ Oficina de Derechos Humanos de la Federación de Mujeres de Sucumbíos, “Activación de alerta temprana. Sobre la situación de derechos humanos en las comunidades de la ribera del río San Miguel, cantón Lago Agrio, y río Putumayo, cantón Putumayo, provincia de Sucumbíos”, *Archivo de la Federación de Mujeres de Sucumbíos 2013*, 20 de agosto de 2013.

²³⁴ “Frontera sin Estado”, Noticia Digital, 7 de marzo de 2010, en <<http://www.noticiasaliadas.org/articles.asp?art=6077>>. Consulta: 1 de septiembre de 2017.

²³⁵ *Ibíd.*

²³⁶ *Ibíd.*

²³⁷ ONU, “Informe Alston”, párr. 15.

²³⁸ Oficina de Derechos Humanos, “Activación Alerta temprana”.

encontraban en la casa de colaborar con grupos irregulares. En ese momento se encontraban presentes cuatro hombres, dos mujeres y dos niños. Los militares detuvieron y se llevaron a los hombres, sin ningún tipo de orden, siendo amarrados y encapuchados, y trasladados a un lugar desconocido, donde fueron golpeados con patadas y puños, acusándoles de colaboradores de la guerrilla y sometiénolos a interrogatorio sobre sus acciones. En la noche del mismo día fueron entregados al Ejército colombiano, sin orden de deportación o extradición y sin haber puesto los hechos en conocimiento de ninguna autoridad judicial, que los dejó en libertad en la comunidad colombiana de Puerto Leguízamo, aproximadamente a 300 kilómetros del lugar de detención.²³⁹

Por estos hechos fue presentada una Queja ante la Delegación de Sucumbíos de la Defensoría del Pueblo,²⁴⁰ sobre la que casi 5 años después, aún no se notifica resolución, habiéndose negado el Ejército ecuatoriano a facilitar la información solicitada.

Caso Sandy Yacu²⁴¹

El 20 de octubre de 2012, en las cercanías de la comunidad Kichwa de Sandi Yacu, ribera del río Putumayo, y tras un enfrentamiento entre el Ejército ecuatoriano y miembros supuestamente de algún grupo irregular colombiano, el Ejército ecuatoriano ingresó a dos casas de esta comunidad, y detuvo, sin ningún tipo de orden, a las personas que se encontraban en las mismas: dos hombres, un adolescente, una adolescente embarazada de 9 meses y su hijo de 14 meses de edad. Entre los detenidos se encontraban dos personas refugiadas reconocidas por Ecuador.

Todos fueron trasladados al Batallón militar de Selva N° 55, ubicado en Puerto el Carmen– Sucumbíos-, donde fueron retenidos ilegalmente por más de 12 horas, hasta que pasadas las 24:00 horas los hombres fueron entregados a la Policía de la ciudad.²⁴² La adolescente y su hijo de 14 meses fueron puestos en libertad al día siguiente, 21 de octubre, sin que en ningún momento de la detención se explicaran los motivos de la misma ni fueran entregados a la Policía. El día 23 de octubre los dos hombres y el adolescente fueron deportados a Colombia, después de haber sido cesados de forma urgente en su condición de refugiados por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador. Tras su deportación estas personas pusieron una denuncia ante la Fiscalía

²³⁹ *Ibíd.*

²⁴⁰ Ecuador, Defensoría del Pueblo, Expediente Q21010000697-2012, *Defensoría del Pueblo*, 2012-

²⁴¹ *Ibíd.*

²⁴² *Ibíd.*

colombiana por malos tratos sufridos de parte del Ejército ecuatoriano, verificándose en el informe forense la existencia de maltrato físico.²⁴³

Sobre estos hechos se presentó una Queja ante la Defensoría del Pueblo,²⁴⁴ Delegación de Sucumbíos, sobre la que casi 5 años después, aún no se notifica resolución, habiéndose negado el Ejército ecuatoriano a facilitar la información solicitada.

En relación a los Casos de Cochas del Betano y Sandy Yacu, es importante señalar la versión dada por el Ejército ecuatoriano sobre los hechos y cómo los mismos fueron presentados por los medios de comunicación nacionales, ejemplificando el uso del imaginario social sobre la población de frontera y el manejo de la información realizado por el Ejército. Así, el diario El Universo, informaba el 21 de octubre de 2012:²⁴⁵

Las Fuerzas Armadas de Ecuador informaron el sábado de la detención de cinco personas, uno de ellos herido, supuestamente subversivos, en un sector de la frontera amazónica con Colombia, tras un enfrentamiento [caso de Sandy Yacu]. Este anuncio se ha producido un día después de que las Fuerzas Armadas informaran de la captura de otras cuatro personas, supuestamente miembros de grupos armados, que el viernes fueron entregados a las autoridades colombianas en la frontera [caso Cochas del Betano].

El ministro de Defensa, Miguel Carvajal, dijo que algunos de los detenidos fueron encontrados en una isla del río San Miguel, que es parte del límite internacional, y fueron entregados a las autoridades colombianas.

Y por su parte, en un comunicado público sobre estos dos casos el Ministerio de Defensa se refería a las personas como presuntamente miembros de los Grupos Ilegales Armados de Colombia (GIAC),²⁴⁶ añadiendo que “a través de estas operaciones realizadas por los Comandos Operacionales, las Fuerzas Armadas mantienen constantemente la seguridad en la línea de la frontera con Colombia”.²⁴⁷

4. Análisis y caracterización de mecanismos de impunidad en los casos de violaciones a derechos humanos en Sucumbíos

Se abordarán a continuación las formas y mecanismos que han generado o permitido la impunidad de las violaciones a derechos humanos en Sucumbíos.

²⁴³ Ibíd.

²⁴⁴ Ecuador, Defensoría del Pueblo, Expediente Q21010000697-2012, *Defensoría del Pueblo*, 2012

²⁴⁵ “Ejército ecuatoriano detiene a 5 personas tras choque en frontera con Colombia”, El Universo (Ecuador), 21 de octubre de 2012, <<http://www.eluniverso.com/2012/10/21/1/1447/ejercito-ecuadoriano-detiene-5-personas-tras-choque-frontera-colombia.html>>. Consulta: 3 de septiembre de 2017.

²⁴⁶ “Cinco detenidos en enfrentamiento en el sector el tablero en Puerto el Carmen de Putumayo”, Ministerio de Defensa Nacional (Ecuador), comunicado digital, en <<http://www.defensa.gob.ec/cinco-detenidos-en-enfrentamiento-en-el-sector-el-tablero-en-puerto-el-carmen-de-putumayo/>>. Consulta: 10 de agosto de 2017.

²⁴⁷ Ibíd.

Debiendo señalar, tal como se concluye de lo expuesto en la sección anterior, que un pequeño, pero aun así muy significativo número de violaciones a derechos, cometidas presuntamente por el Ejército ecuatoriano, llegan a ser denunciadas ante las entidades de control del Estado, representadas por la Fiscalía²⁴⁸ y la Defensoría del Pueblo, en cuanto autoridades delegadas constitucionalmente²⁴⁹ para proteger las violaciones a los derechos humanos y encargadas de investigar los hechos y sancionar o pedir el enjuiciamiento de los responsables.

Pero la impunidad es una realidad imposible de negar, el mismo Relator Alston tras su visita al país lo señala expresamente “La impunidad por los diversos delitos de los grupos armados se describió como un fenómeno generalizado”.²⁵⁰ Para entender cómo funcionan los mecanismos de impunidad se distinguirá entre aquellos derivados de la falta de denuncia o puesta en conocimiento de la autoridad competente, que impide el conocimiento del hecho y la investigación sobre el mismo; y aquellos en a pesar de que sí se pongan los hechos en conocimiento de la autoridad correspondiente, la impunidad sobre la violación se mantiene, impidiéndose de igual forma el conocimiento de la verdad, la sanción a los responsables y la reparación a las víctimas; y favoreciendo, además la perennización de las conductas violatorias.

Se hará, asimismo, una interesante comparación con las observaciones contenidas en el Informe de la Comisión de la Verdad del Ecuador de 2010, donde se comprueba que las formas por las que se ha generado históricamente impunidad en Ecuador, permanecen en gran medida vigentes hoy en la frontera norte del país.

Ante una violación de derechos humanos, muchas personas afectadas o víctimas deciden no ponerla en conocimiento de la autoridad; ello por varias razones:

Por imposibilidad o dificultad de acceso físico o la falta de visitas de las autoridades de investigación, ya que tal como expresan Maritza Flores y María Pantoja, “las instituciones como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo se encuentran lejanas de las comunidades de frontera, centradas mayoritariamente en Nueva Loja”,²⁵¹ y por ejemplo a San Martín, en la ribera del río San Miguel “ nunca ha llegado ni Fiscalía ni Defensoría

²⁴⁸ Constitución del Ecuador, art. 195: “La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal”.

²⁴⁹ Ibid., art. 215: “La Defensoría del Pueblo tendrá como funciones la protección y tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador”.

²⁵⁰ ONU, “Informe Alston”, párr. 12.

²⁵¹ Entrevista a Maritza Flores.

del Pueblo”,²⁵² demostrando la falta de interés por la vida de las personas en estas comunidades.

Además, el poner cualquier tipo de denuncia implica gastos en movilización (que en muchas ocasiones supone desplazamiento por el río y por carretera) y pérdida de trabajo para hacer un seguimiento e insistencia permanente a estas instituciones, porque en caso contrario las denuncias no avanzarían de ninguna forma.

De otro lado también existe la desconfianza hacia las instituciones del Estado en general, como afirma Laura Martín, porque “la gente no cree en un Estado al que nunca ha visto, que le ha olvidado, quienes imponen la justicia en las comunidades son los grupos que están presentes en el territorio y a quien se les pide que intervengan”.²⁵³

Pero la causa principal de que las personas no acudan a las autoridades a denunciar, es el miedo. Miedo que se ha desarrollado a lo largo de los años por la forma de actuar de los distintos grupos armados en la frontera; y especialmente, en los últimos diez años, por los militares ecuatorianos. Miedo que según Adolfo Maldonado “ha sido construido consciente y voluntariamente por el Ejército”,²⁵⁴ los allanamientos, los robos, las acusaciones, las amenazas, las detenciones ilegales, las torturas y demás violaciones de derechos que hemos descrito con anterioridad, han sido una forma muy efectiva de generar miedo en las personas. Fanny Pilco cuenta como la sobrina de Don Molano (una de las personas asesinadas en el San Miguel en enero de 2010), que impulsaba activamente la investigación en la Fiscalía, tuvo que mudarse de Lago Agrio “se fue a Shushufindi por el seguimiento y luego se mudó otra vez”.²⁵⁵

En el mismo sentido, Maritza Flores contaba cómo tras la queja en la Defensoría del Pueblo en 2015, por el allanamiento ilegal de su vivienda en San Martín, el ofendido y quejoso había recibido la visita en su casa del Ejército “interesándose por la denuncia y pidiendo al señor que fuera hasta el batallón para hablar con el coronel”.²⁵⁶

Para Adolfo Maldonado “cuando quitas mucho de lo básico [...] vas despojando de la vida cotidiana, vas cambiando la vida de la gente”²⁵⁷ en un proceso de construcción deliberada del miedo. Y ese miedo es el que marca la vida de la gente, y la condena en muchos casos al silencio; el miedo produce angustia, sufrimiento en la población. Tiene

²⁵² Entrevista a María Pantoja.

²⁵³ Entrevista a Laura Martín.

²⁵⁴ Entrevista a Adolfo Maldonado.

²⁵⁵ Entrevista a Fanny Pilco.

²⁵⁶ Entrevista a Maritza Flores.

²⁵⁷ Entrevista a Adolfo Maldonado.

una dimensión política y es una forma de control social y determina las subjetividades, corroyendo el tejido social. Al final en sociedades mutiladas por el miedo, como la provincia de Sucumbíos, queda el silencio como la única protección, la única garantía de vida.²⁵⁸

Tal como el relator Alston afirma en su Informe “Los testigos tenían normalmente demasiado miedo a las represalias para presentar una denuncia oficial. Además, por lo general no creían que la policía pudiera o quisiera adoptar realmente alguna medida al respecto”.²⁵⁹

Sobre este punto la Comisión de la Verdad de Ecuador, recoge varias observaciones; así, respecto al uso de las amenazas afirma que “las amenazas han coartado la posibilidad de denunciar los hechos. [...] Existía mucho miedo relacionado con el seguimiento e interceptaciones por parte de la policía, allanamientos, hostigamientos en el trabajo y amenazas hacia familiares”.²⁶⁰ Y respecto al silencio ante violaciones a derechos añade

Tanto las víctimas como familiares, e incluso la sociedad en general, muchas veces han recurrido culturalmente al silencio, “a no hacer problema” encontrando respuestas de adaptación que incluso han justificado dichas prácticas puesto que, efectivamente, los resultados en general de la denuncias, y procesos similares quedan, por lo general, sin resultado alguno y por el contrario, se originan nuevas revictimizaciones que se vuelven intolerables e indignas para la gente.²⁶¹

En segundo lugar, cuando las personas sí ponen la denuncia o queja ante la autoridad competente, los mecanismos que operan para mantener la impunidad se pueden distinguir entre aquellos derivados directamente del actuar o la abstención de actuar del Ejército; y aquellos derivados de las autoridades encargadas de la investigación y de las instituciones estatales en general.

Uno de los mecanismos más frecuentes usado por el Ejército ha sido la negativa a entregar la información solicitada por la autoridad que está realizando la investigación, como información sobre un operativo o sobre los soldados que participaron en el mismo o documentación al respecto, ha sido una práctica de obstaculización continua, muchas veces bajo el argumento de que es reservada o de seguridad nacional, en ocasiones no atendiendo la solicitud de la autoridad investigativa. Impidiendo con ello cualquier posible avance hacia el conocimiento de la verdad y la posible sanción a los responsables.

²⁵⁸ Váscónez, “*La construcción social del miedo*”, 37.

²⁵⁹ ONU, “Informe Alston”, párr. 12.

²⁶⁰ Comisión de la Verdad, *Informe*, Tomo 1, 381.

²⁶¹ *Ibíd.*, 361.

Junto a ello la negativa a prestar declaraciones o testimonios ante las autoridades, como en el caso de los tres muertos en el río San Miguel en enero de 2010; o negarse a prestar colaboración solicitada para reconstruir los hechos o alegando que la zona es peligrosa y que no existe la seguridad necesaria para realizar las pericias oportunas.

De igual manera, el Ejército utiliza el desprestigio o el intento de estigmatización a la persona que denuncia, como queda evidenciado en el comunicado del Ejército sobre 430 personas en la frontera o en el comunicado de prensa del Ministerio de Defensa sobre los casos de Cochachos del Betano y Sandy Yacu. En este sentido Maritza Flores relata como ante la presentación de una denuncia ante la Defensoría del Pueblo contra el Ejército ecuatoriano es muy normal que la respuesta de éste trate de menospreciar la misma, atacando a la persona u organización en el sentido de que “el denunciante es un mentiroso y que el Ejército es una institución sin tacha y que se enorgullece de defender la patria”.²⁶²

Y, finalmente, el Ejército puede recurrir a la amenaza directa o indirecta contra quien presenta una denuncia o reclamación contra su actuar o el de cualquiera de sus miembros, tal como quedó detallado previamente; o incluso, tal como expresa Fanny Pilco, “La persecución es más evidente contra la gente que se mueve, que intenta organizar o protestar”.²⁶³

De esta forma quedan perfilados varios mecanismos utilizados por el Ejército, que han permitido la impunidad de una violación a derechos humanos, y que serían resumidamente: negarse a entrega de información que puede ser esencial y necesaria para el conocimiento de la verdad; obstaculizar o impedir el desarrollo de la investigación mediante el retraso constante o negativa a las solicitudes que se les realiza por parte de la autoridad dentro de la investigación; desprestigiar o acusar falsamente a la persona denunciante; encubrir y negar voluntariamente los hechos y a quienes participaron en los mismos; y recurrir a amenazas o represalias contra quien se atreve a denunciar una violación a derechos.

En este sentido la Comisión de la Verdad señaló que

Además de la responsabilidad directa de algunos de sus miembros en las violaciones sufridas, los cuerpos de seguridad funcionaron como un todo que impidió cualquier investigación eficaz en la mayoría de los casos. Más aún cuando la responsabilidad es negada y la justicia no ha podido diferenciar entonces las responsabilidades individuales de agentes del Estado en muchas violaciones.²⁶⁴

²⁶² Entrevista a Maritza Flores.

²⁶³ Entrevista a Fanny Pilco.

²⁶⁴ Comisión de la Verdad, *Informe*, Tomo 1, 393.

Por último se analizarán los mecanismos derivados de la actuación de las autoridades encargadas de la investigación y de las instituciones estatales en general y que consisten en la inacción o falta de acción adecuada por parte de Fiscalía y Defensoría del Pueblo y de otro lado la falta de voluntad estatal para el conocimiento de la verdad sobre las violaciones a derechos humanos en Sucumbíos.

Respecto a la inacción o falta de acción adecuada por parte de Fiscalía y Defensoría del Pueblo, el dato transcrito previamente, sobre la ausencia de resoluciones o sentencias condenatorias contra militares, en el periodo de 2008 a 2016, pese al número de denuncias existentes, es revelador y demuestra en primer lugar, una falta de voluntad real de la Defensoría y de la Fiscalía de investigar, ejemplificada en el hecho relatado por Maritza Flores y ocurrido en el caso del señor Garrido, que quiso denunciar ante la Fiscalía el allanamiento ilegal de su vivienda por los militares, pero se encontró con que la Fiscalía no quiso recibir la denuncia, afirmando que “al ser militares era un tema delicado”²⁶⁵ y haciéndole esperar por horas, hasta que, finalmente, el señor se cansó y desistió de poner la denuncia.

Esta falta de voluntad tiene varias causas, entre ellas, como hemos dicho, el miedo que existe entre estas autoridades “a posibles represalias y deciden evitar meterse en problemas”, como señala Adolfo Maldonado;²⁶⁶ también a la ineficacia, la corrupción o falta de preparación de los funcionarios. Todo ello es señalado por el Relator Alston en su Informe “Algunos funcionarios criticaron abiertamente el sistema judicial, que describieron como "precario" y con un "nivel de efectividad sumamente bajo" [...] La corrupción, el miedo a las represalias, la ineficiencia, la falta de voluntad y la insuficiencia de la formación y los recursos en cada etapa del sistema de justicia penal hacen que la mayoría de los autores de delitos queden sin castigo”.²⁶⁷

Es curioso y ejemplo de lo expresado, la información enviada por el Ministerio de Defensa del Ecuador al Relator Alston para la elaboración de su Informe sobre Ecuador, y que giraba en torno a varias denuncias presentadas en la Fiscalía de Sucumbíos por presuntas violaciones a derechos cometidas por el Ejército en comunidades de frontera y en el ejercicio de sus competencias de vigilancia y control de la frontera;²⁶⁸ en ninguno de los cinco casos detallados, se había avanzado con la investigación (casos de

²⁶⁵ Entrevista a Maritza Flores.

²⁶⁶ Entrevista a Adolfo Maldonado.

²⁶⁷ ONU, “Informe Alston”, párr.65.

²⁶⁸ *Ibíd.*, Apéndice II, Observaciones del Gobierno del Ecuador sobre la versión anticipada, sin editar, del informe.

allanamiento ilegal de vivienda, decomiso de bienes, abuso de autoridad e intervención abusiva) y en todos ellos la razón, documentada por el Ministerio de Defensa en su respuesta, fue la falta de colaboración por parte del denunciante. Lo cual resulta sorprendente, especialmente porque todas las denuncias presentadas son de acción pública, es decir, deberían continuar con impulso de la propia Fiscalía.

Y finalmente es necesario analizar algo que aparece continuamente repetido en las entrevistas realizadas y que coincide plenamente con evidencias reflejadas por la Comisión de la Verdad en su Informe, y que es la falta de voluntad del Estado y con ello de sus instituciones, incluidas las judiciales y Defensoría del Pueblo, en que la verdad de las denuncias contra el Ejército en la frontera sea conocida, es decir, una intención expresa de mantener la impunidad.

Julio González se refiere a este tema en el sentido de que la Fiscalía o la Defensoría no investigan porque eso iría contra el interés del Estado, “no se pueden o quieren generar precedentes que permitan dudar sobre lo que hacen los militares en frontera o abrir la puerta para conocer la verdad de lo que pasa”.²⁶⁹

Como se ha visto en este capítulo, Ecuador se decantó decididamente por involucrarse en el conflicto colombiano, reforzando militarmente la frontera y desarrollando una política de seguridad nacional y soberanista contra los grupos irregulares en la misma; lo cual ha supuesto en el periodo 2008 a 2016 el cometimiento de numerosas violaciones y graves violaciones a derechos humanos, apoyadas tanto en el objetivo de control como en el imaginario de que la población de frontera está vinculada a los grupos irregulares; es de esta forma que, tal como dice Laura Martín en esa estrategia “la gente en la frontera son terroristas o colaboradores, frente a los militares que se juegan la vida por defender al país y la frontera; y ello lleva a que el estado les absuelva o perdone cualquier abuso o error que cometan en nombre del gran servicio que prestan”.²⁷⁰

Esa complicidad entre Estado y Ejército que lleva a un encubrimiento impune, ha implicado que “el sistema judicial ha actuado conforme a los momentos políticos, que son más de acercamiento a la política colombiana y al apoyo de los militares, puesto que necesitas su apoyo, las acusaciones no debían prosperar”.²⁷¹

Sobre este punto, la Comisión de la Verdad revelaba prácticas existentes en Ecuador en diferentes épocas históricas, plenamente coincidentes con lo ocurrido en la

²⁶⁹ Entrevista a Julio González.

²⁷⁰ Entrevista a Laura Martín.

²⁷¹ Entrevista a Luis Ángel Saavedra.

frontera de Sucumbíos, al afirmar que “Otra de las tendencias respecto a las violaciones de derechos humanos que se han dado en diferentes épocas ha sido la justificación de éstas como parte de la lucha contra la delincuencia o la necesidad de mantener el orden público”.²⁷² Y añadiendo que

razones políticas de carácter coyuntural parecen motivar persistentemente la distancia, tolerancia y, en ocasiones, adscripción del poder central a las versiones policiales y militares en torno a violaciones de los derechos humanos, dejando a un lado la iniciativa de asegurar la más profunda y neutra investigación que merecerían situaciones claramente controvertidas. Esas razones que alcanzan también a los órganos de administración de justicia [...] son aún factores que coadyuvan a la impunidad y postergan el debate sobre el real respeto a los derechos humanos en el país.²⁷³

En este contexto se produce la muerte de Rubén Darío Santander Guerrón en agosto de 2011, en una posible ejecución extrajudicial por la acción del Ejército ecuatoriano, que se analizará a continuación, y que aún permanece en la impunidad, debido en gran medida a la utilización de muchos de los mecanismos presentados y a la responsabilidad del Estado por incumplir con sus obligaciones al respecto.

²⁷² Comisión de la Verdad, *Informe*, Tomo 1, 359.

²⁷³ *Ibíd.*, 238.

Capítulo tercero

La muerte de Rubén Darío Santander Guerrón: responsabilidades del Estado y propuesta de litigio estratégico

Se presentará en este capítulo el caso central de la presente tesis, la privación de la vida del adolescente Rubén Darío Santander Guerrón, en la comunidad de Puerto Mestanza, en la ribera ecuatoriana del río San Miguel; ocurrida en agosto de 2011 y que aún permanece en la impunidad. Se analizará, además, la responsabilidad del Estado ante el incumplimiento de sus obligaciones respecto a la muerte de Rubén, a la luz de la normativa y estándares internacionales reseñados en el capítulo 1, y enmarcados en el contexto presentado en el capítulo 2. Incluyendo violaciones a derechos como la vida, la tutela judicial efectiva, el derecho a la verdad que generó impunidad y el derecho de acceso a la información.

Posteriormente se presentará la importancia de realizar en este caso un proceso de exigibilidad estratégica, con enfoque especial en litigio, y se plantará una propuesta para el mismo, que permitiera sentar, respecto al caso concreto, pero con efectos extensibles al resto de violaciones a derechos humanos en Sucumbíos y en la frontera, un precedente dirigido a evitar estos incumplimientos en el futuro y que permita acabar con la impunidad de las violaciones del pasado. Y obligando al Estado a cumplir con sus responsabilidades y a reparar, tal como ha desarrollado la jurisprudencia y doctrina internacionales.

1. Rubén Darío Santander Guerrón: muerte e investigación

Rubén Darío nació en el Hospital Marco Vinicio Iza de la ciudad de Nueva Loja, Sucumbíos, el 29 de diciembre de 1994, siendo el mayor de dos hermanos, e hijo de Samuel Saulo Santander, refugiado colombiano, y de Karen Nayeli Guerrón, ecuatoriana.

Como cuenta su madre “en esa época vivíamos entre General Farfán y Lago Agrio, hasta el 2002, cuando decidimos irnos a Puerto Mestanza para trabajar una finca por la mala situación económica que teníamos. Rubén, como en Puerto Mestanza no había escuela, pasaba la semana en casa de una hermana del papá y el viernes Samuel salía a buscarlo para llevarlo a Puerto Mestanza y el domingo lo llevaba de vuelta a Lago”.²⁷⁴

Era un buen estudiante y había decidido estudiar contabilidad, por lo que empezó en el Colegio Técnico Segundo Orellana su bachillerato en esta especialidad, porque

²⁷⁴ Karen Nayeli Guerrón, Madre de Rubén Darío Santander Guerrón, entrevista realizada por Jorge Acero en Nueva Loja, el 10 de octubre de 2017.

como decía Karen “tenía el sueño de estudiar contabilidad y ser un gran empresario, y soñaba siempre con esperanza, decía para qué pensar en que la familia pueda llegar a comprar una casita pequeña, hay que pensar en que podremos comprar una grande y hermosa, decía hay que soñar grande”.²⁷⁵ Y siendo muy consciente de las dificultades de la familia, le decía a sus padres “que aunque no tuviera para ropa le ayudáramos con el estudio, eso era para él lo más importante”.²⁷⁶

Según su madre “era muy detallista y cariñoso, especialmente con los abuelos; cordial con la gente y muy colaborador con las personas, hasta el punto de compartir lo que tuviera, comida o dinero, con quien le pidiera”.²⁷⁷ Añadiendo que el día que ocurrieron los hechos

Me dijo mami me voy un momento y cuando pasó la balacera fui corriendo a buscarlo y ya estaba muero, nunca pensé no volver a verlo; pero le dije a la gente que no lo tocara porque yo quería llamar y que se supiera que pasó y que no quedara así [...] Él era mi alegría, con él aprendí a ser madre, a sufrir, a llorar con sus primeras palabras y a curar sus golpes.²⁷⁸

Para su hermana Leidy, la muerte de Rubén Darío también supuso un duro golpe “se quedó como inconsciente, en shock, me decía mami yo no quiero morirme, casi pierde el año en la escuela porque desaprendió a leer y no quería ir tampoco a la escuela; sólo lloraba”,²⁷⁹ añadiendo que “todavía hoy dice que vive con odio, rabia porque mataron a su hermano los militares, [...] es como un trauma que tiene”.²⁸⁰

El día que ocurrieron los hechos, el 11 de agosto de 2011, Rubén se encontraba en Puerto Mestanza, disfrutando de las vacaciones escolares con su familia, tras haber acabado su cuarto año de bachillerato. Y a las 11.00 se había ido a casa de unos vecinos a ver televisión con la familia; cuando a las 11:30 comenzó una balacera que alteró la vida de toda la comunidad.

Tal como expresó uno de los pobladores de Puerto Mestanza, “Esto era un terror, la gente empezó a correr y se escondía como podía. Las balas caían sobre los techos de las casas y sobre la calle principal”.²⁸¹ Añadiendo otra testigo madre de familia “Sentí un

²⁷⁵ *Ibíd.*

²⁷⁶ *Ibíd.*

²⁷⁷ *Ibíd.*

²⁷⁸ *Ibíd.*

²⁷⁹ *Ibíd.*

²⁸⁰ *Ibíd.*

²⁸¹ “Joven ecuatoriano falleció por tiroteo en zona fronteriza”, *El Universo* (Ecuador) 12 de agosto de 2011, <<http://www.eluniverso.com/2011/08/12/1/1447/joven-ecuatoriano-fallecio-tiroteo-zona-fronteriza.html>>. Consulta: 20 de septiembre de 2017.

miedo muy terrible al escuchar esa plomacera. Yo cogí a mi hijo y salí corriendo al monte a esconderme”.²⁸²

Según testigos de la comunidad, a la hora indicada “dos lanchas con personal militar que se movilizaban por el río San Miguel, al cruzar por el sector empezaron a disparar a todas direcciones alcanzando al poblado de la frontera. Los habitantes del sector señalaron que el tiroteo duró aproximadamente 15 minutos”.²⁸³

Después de la balacera los habitantes comprobaron, al igual que la Fiscalía posteriormente, que existían impactos de bala en varios árboles de la comunidad, ubicados en la orilla del río, y en iglesia evangélica de Puerto Mestanza;²⁸⁴ y asimismo descubrieron, como una de las balas había atravesado las paredes de madera de la casa donde se encontraba Rubén Darío y le había impactado en la cabeza, matándolo en el acto.²⁸⁵

Al respecto, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, informó

En un control de rutina una patrulla fluvial, observó tres tanques de 55 galones que flotaban en el afluente, del lado ecuatoriano. Una lancha se dirigió a verificar el contenido y al llegar al sitio, el personal se percató de que los tanques estaban vacíos e iba a trasladarlos al destacamento Elvis Molina. Pero “sorpresivamente fue atacado, desde el lado colombiano.”²⁸⁶

Sobre estos hechos la Federación de Mujeres de Sucumbíos realizó un comunicado público, denunciando y exigiendo la investigación sobre los mismos;²⁸⁷ el cual fue respondido por el entonces Ministro de Coordinación de Seguridad, Homero Arellano, “Nuestras Fuerzas Armadas en ese sentido son sumamente cuidadosas, no descarto, tampoco estamos desconociendo la realidad que menciona la Federación de Mujeres, pero ellas que tengan todo el apoyo nuestro para investigar hasta las últimas consecuencias estos actos”.²⁸⁸

²⁸² *Ibíd.*

²⁸³ *Ibíd.*

²⁸⁴ Ecuador, Fiscalía Provincial de Sucumbíos, “Acta de inspección ocular”, *Indagación Previa* 307 de 2011.

²⁸⁵ “Un joven murió en medio de un tiroteo”, *El Comercio* (Ecuador) 17 de agosto de 2011, <<http://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/joven-murio-medio-de-tiroteo.html>>. Consulta: 20 de septiembre de 2017.

²⁸⁶ *Ibíd.*

²⁸⁷ “Un menor muerto y un militar herido en la frontera”, *La Hora* (Ecuador) 17 de agosto de 2011, <<https://www.lahora.com.ec/noticia/1101190193/home>>. Consulta: 20 de septiembre de 2017.

²⁸⁸ “Ministro de Seguridad investiga muerte de menor en un poblado fronterizo”, *Ecuador Inmediato*, publicación digital, 17 de agosto de 2011, <http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=155929>. Consulta: 20 de septiembre de 2017.

Sobre estos hechos la Fiscalía Provincial de Sucumbíos, y específicamente la especializada en delitos contra la vida aperturó el 15 de agosto de 2011, Indagación Previa por Homicidio.²⁸⁹ El parte policial sobre los hechos presentado a la Fiscalía afirma que

Sobre las 11.45 horas aproximadamente dos lanchas rápidas o pirañas del ejército ecuatoriano, pertenecientes al Batallón de Infantería, se desplazaban por el río San Miguel de Oeste a Este y a la altura de la comunidad de Puerto Mestanza se detienen para recoger unos bidones vacíos supuestamente usados para el transporte de combustible, una de ellas va a recogerlas, según la población civil a la orilla colombiana del río, y el otro bote se queda en la mitad del río; en ese momento comenzó una balacera fruto de la cual hay numerosos impactos en territorio ecuatoriano, según los pobladores testigos, los impactos se generan por disparos procedentes de uno de los botes del Batallón de Infantería ecuatoriano; proyectiles que además de impactar en un gran árbol –que refleja la marca de varios impactos- impacta en la pared de un templo evangélico y en una casa de la comunidad, propiedad del señor Robinson Robert Ramírez, en este último caso alcanzando en la cabeza al adolescente Rubén Darío Santander, de 16 años de edad (nacido el 29 de agosto de 1994, con cédula de ciudadanía ecuatoriana 2100728068) , matándole instantáneamente. Esta balacera duró aproximadamente 15 minutos, transcurridos los cuales los dos botes ecuatorianos continuaron en sentido este, supuestamente con un militar herido.²⁹⁰

Sobre la investigación fiscal, en febrero de 2014, más de dos años y medio después de iniciada, no se había logrado ningún avance significativo sobre la verdad de los hechos ocurridos ni los responsables de la muerte de Rubén Darío. Así lo expresaba Samuel Santander “Hace tiempo que las autoridades no se han pronunciado para nada, ni nada. Nosotros esperamos que salga a la luz lo que ocurrió con mi hijo y las autoridades no aparecen en nada”.²⁹¹ En el mismo sentido la madre de Rubén, Karen Guerrón, afirmaba que “Siempre la Fiscalía de Sucumbíos dice que no hay respuestas, para nada. Eso tiene que salir a la luz, eso no se va a quedar así. Vamos a seguir luchando hasta que salga a la luz y tienen que aparecer los culpables, los responsables”.²⁹² Incluso recordaba el compromiso personal del Presidente Rafael Correa en 2012 “Él se comprometió a hablar con los ministros, e investigar, y salir adelante, porque le fui sincera; yo le dije lo que yo quería. El mismo Presidente dijo: aquí, ahorita que están todos los ministros, incluso en este tiempo estaba el ministro Miguel Carvajal, pero hasta ahora nunca, no ha habido ninguna respuesta”.²⁹³

²⁸⁹ Fiscalía Provincial de Sucumbíos, “Indagación Previa 307”.

²⁹⁰ *Ibíd.*

²⁹¹ “La frontera del miedo”, *Revista Plan V* (Ecuador) 10 de febrero de 2014, <<http://www.planv.com.ec/investigacion/investigacion/la-frontera-del-miedo/pagina/0/5>>. Consulta: 20 de septiembre de 2017.

²⁹² *Ibíd.*

²⁹³ *Ibíd.*

Esta situación no ha variado hasta la actualidad, habiendo transcurrido más de seis años de abierta la Indagación, y la muerte de Rubén Darío sigue en la impunidad; detallándose a continuación las incidencias más relevantes de la investigación:²⁹⁴

1. Desde la apertura de la investigación, la Fiscalía solicitó en repetidas ocasiones al Ejército la remisión del listado de personal militar que había participado en el operativo, concretamente en dos ocasiones al comandante de la IV División Amazonas, responsable militar sobre la Amazonía norte; a la Capitanía de la Marina de Sucumbíos; en dos ocasiones al comandante del Batallón 56 Tungurahua, como jefe de patrulla y responsable de los registros y controles del personal; y al Ministerio de Defensa, como representante legal de las Fuerzas Armadas. Este último responde, a través de su coordinadora jurídica, que

En lo que se refiere a la operación realizada y a quiénes integraban ésta, me permito indicarle a usted, señor Agente Fiscal, que toda la información relacionada con las operaciones militares, así como los nombres de los comandantes de Operación y sus miembros, se encuentra protegida por la Ley de Seguridad Pública del Estado de acuerdo al artículo 10 literal j, en concordancia con el artículo 17 Num-1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, información que previo a ser solicitada debe ser desclasificada por el organismo competente.²⁹⁵

Tras este oficio, la Fiscalía vuelve a insistir en el pedido de la información, solicitando su desclasificación e informando que se está investigando un delito, a lo cual el Ministerio responde que no es competencia de esa cartera de estado la solicitud planteada.

2. A lo largo de la investigación se personaron ante la Fiscalía cinco testigos directos de los hechos, que fueron unánimes al manifestar que fueron los militares ecuatorianos, desde una de las lanchas, los que dispararon hacia territorio ecuatoriano, contra la comunidad de Puerto Mestanza. Por ejemplo, el 30 de septiembre de 2011, rindió su versión la señora Olga Patricia Pérez Obando, quien afirma que se encontraba con sus hijos de 10 y 4 años en la orilla del río San Miguel en el momento en que se produjo la balacera y que fue testigo directo de que los militares ecuatorianos, desde una de las lanchas, dispararon hacia territorio ecuatoriano, puesto que “disparaban en círculos a todas direcciones”²⁹⁶ y a ella le tocó “coger a mis hijos y tirarme al piso, escondiéndonos detrás de los árboles del río”.²⁹⁷ Asimismo, en la fecha en que se realizó por la Fiscalía

²⁹⁴ Los hechos e incidencias detallados proceden del expediente de la Indagación Previa No. 307 de 2011, de la Fiscalía Provincial de Sucumbíos.

²⁹⁵ Fiscalía Provincial de Sucumbíos, “Indagación Previa 307”.

²⁹⁶ *Ibíd.*

²⁹⁷ *Ibíd.*

inspección al lugar de los hechos se recogió en el acta como “varios pobladores presentes en la inspección manifiestan que los disparos procedían del río, donde sólo estaban los militares ecuatorianos”.²⁹⁸

3. Durante el operativo se reportó un soldado ecuatoriano herido, el cual fue llamado repetidas veces a rendir su testimonio, puesto que era el único identificable dentro de dicho operativo; concretamente el Fiscal señaló 6 veces fecha y hora para su testimonio, debido a la ausencia en los diferentes llamamientos. Cuando finalmente acudió a prestar testimonio, se negó a responder a las preguntas sobre el operativo y quiénes participaron en el mismo, alegando que se trataba de información reservada.

4. La Policía Judicial de Pichincha realizó un informe de criminalística, en el cual se describe la dirección y trayectoria de la bala que atravesando dos paredes de madera de una casa había matado a Rubén Darío. En esta línea, también se realiza el Informe Técnico Balístico de Trayectorias núm. 282-2011 de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha,²⁹⁹ que especifica la trayectoria del proyectil y la distancia aproximada del disparo; de forma verbal, los policías que hicieron este informe, afirmaron tras el peritaje y ante todas las personas que se encontraban presentes en dicho lugar, que por la trayectoria, el disparo había sido realizado desde el centro del río.³⁰⁰

5. Sobre este Informe, la Fiscalía solicitó ampliación, a fin de determinar el lugar desde el que la bala que había causado la muerte de Rubén Darío había sido disparada, solicitando el apoyo de seguridad al Ejército por tratarse de una zona de frontera y puesto que esta prueba debía ser realizada en la noche (al ser necesario el uso de láser). Ante esta petición el comandante del Batallón 56 se negó, afirmando que la situación en la frontera es insegura y que el Ejército no puede dar las garantías de seguridad necesarias. Además, hace una valoración propia, afirmando que “el informe de criminalística ya existente en la fiscalía es claro [...] el tirador estaba en Colombia”.³⁰¹ Esto ocasionó la suspensión de la prueba hasta contar con las medidas de seguridad adecuadas. Tres meses después, la Fiscalía vuelve a insistir en el pedido al Ejército para realizar el peritaje, a lo cual se niega nuevamente alegando la situación de inseguridad en

²⁹⁸ *Ibíd.*

²⁹⁹ *Ibíd.*

³⁰⁰ El autor de la presente tesis, en su calidad de Coordinador de la Oficina de Derechos Humanos de Sucumbíos y presente en la realización de esta pericia, escuchó personalmente esta afirmación de parte de los peritos policiales.

³⁰¹ Fiscalía Provincial de Sucumbíos, “Indagación Previa 307”.

la zona y añadiendo que “no es competencia de las Fuerzas Armadas dar seguridad a la Policía [...] la seguridad debe darla quien pide la prueba”.³⁰²

6. El 14 de septiembre de 2012, el Fiscal del caso solicita al Juez el archivo provisional de la Indagación, afirmando que Fiscalía y acusación han tratado por todos los medios de recabar pruebas pero que el Ministerio de Defensa obstaculizó e impidió la investigación, bajo la alegación de secreto de Estado y la negativa al levantamiento de la reserva sobre la información, lo que imposibilitaba la continuidad de la investigación. Concluye afirmando que “sí existe infracción pero no se puede identificar el posible autor”.³⁰³

7. El 17 de Octubre de 2012 el Juez rechaza el archivo y se sorteó la Indagación a una nueva Fiscalía, en la cual la investigación ha quedado estancada.

Sobre este caso la Defensoría del Pueblo, Delegación de Sucumbíos, abrió una Investigación coadyuvante en 2011;³⁰⁴ en el marco de la cual se realizó visita a la zona donde ocurrieron los hechos, y elaborándose un informe sobre la misma donde se detalla que en entrevista realizada a 9 moradores de la comunidad, “aparecen testimonios que afirman ser testigos directos y que vieron a los militares ecuatorianos disparar contra territorio ecuatoriano”.³⁰⁵

2. Responsabilidad del Estado en el caso de Rubén Darío

Se analizarán a continuación las responsabilidades del Estado ecuatoriano en el caso de la muerte de Rubén Darío y la violación de derechos humanos, a la luz de los estándares descritos en el capítulo 1 de la presente tesis; debiendo tener en cuenta su condición de adolescente, y por tanto, perteneciente a uno de los grupos que la Constitución señala como de atención prioritaria, conlleva obligaciones reforzadas de protección a fin de garantizar sus derechos, entre ellos el de la vida y el del pleno desarrollo.³⁰⁶

Como anteriormente quedó expresado, el derecho internacional establece dos grandes tipos de obligaciones al Estado: Respetar y asegurar los derechos humanos, por un lado; y por otro, garantizar que dichos derechos sean respetados.³⁰⁷

³⁰² *Ibíd.*

³⁰³ *Ibíd.*

³⁰⁴ Ecuador, Defensoría del Pueblo, “Expediente Q21010000213”, *Defensoría del Pueblo*, 2011.

³⁰⁵ *Ibíd.*

³⁰⁶ Constitución del Ecuador, al respecto ver arts. 35, 44, 45 y 46.

³⁰⁷ Comisión Internacional, *Impunidad*, 40.

La primera obligación exige al Estado abstenerse de violar esos derechos –por acción o por omisión–, lo que conlleva asegurar, mediante las medidas necesarias, el goce y disfrute de los mismos.³⁰⁸

Respecto al primer deber de abstención y el derecho a la vida, éste se encuentra consagrado como el primer y más esencial derecho de la persona, ya establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos³⁰⁹ y en múltiples Tratados e Instrumentos Internacionales³¹⁰ y, de igual forma en la Constitución ecuatoriana.³¹¹

En este sentido el derecho a la vida supone un límite a la actuación y el poder del Estado, que debe abstenerse de realizar cualquier acción que pueda ir en contra del mismo; y en este caso, el hecho de que los militares ecuatorianos dispararan contra la comunidad de Puerto Mestanza y la población civil de dicha comunidad, hace necesario realizar un análisis a la luz de las exigencias en el uso de la fuerza y de las armas de fuego. Tal como se ha detallado con anterioridad, dicho uso exige el cumplimiento de varios criterios: necesidad, absoluta excepcionalidad, proporcionalidad, distinción y humanidad; porque cuando la muerte es causada por exceso de uso de la fuerza sin respetar esos principios, se considera que ha sido arbitraria y se califica como una ejecución extrajudicial o arbitraria.

En el caso de Rubén Darío existen cinco testimonios prestados en la Fiscalía que indubitadamente afirman que fue el Ejército ecuatoriano el que disparó contra la comunidad de Puerto Mestanza; y si bien, de acuerdo a la información del Ministerio de Defensa ecuatoriano, el uso de las armas se derivó de una legítima defensa ante un supuesto ataque por personas desconocidas, la misma información detalla que este ataque contra militares ecuatorianos fue realizado desde el lado colombiano, no desde el ecuatoriano donde está la comunidad. Por tanto, podría justificarse la existencia de la necesidad de responder al ataque mediante el uso de armas y para proteger la vida. Sin embargo, no existe proporcionalidad, por cuanto disparar contra una comunidad de personas civiles con los graves riesgos contra la vida que ello supone no es una respuesta proporcional con la respuesta a un ataque desde la zona opuesta, la orilla colombiana versus la orilla ecuatoriana; tampoco se cumple el criterio de distinción, por cuanto no se respeta a la población civil que no interviene de ninguna manera en la confrontación

³⁰⁸ *Ibíd.*

³⁰⁹ *Declaración Universal de Derechos Humanos* (1948).

³¹⁰ Ver: *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos*, art. 6.1; *Convención Americana sobre Derechos Humanos*, art. 4; y *Convención sobre los Derechos del Niño*, art. 6.

³¹¹ Constitución del Ecuador, art. 66.1.

existente y era claramente visible para los militares ecuatorianos; ni se usa la estricta y absolutamente necesaria fuerza para defenderse del ataque que supuestamente estaba sufriendo el Ejército ecuatoriano desde un lugar diferente al de ubicación de la comunidad. Recordando que el uso excepcional debe “ser interpretado restrictivamente de manera que sea minimizado en toda circunstancia, no siendo más que el absolutamente necesario en relación con la fuerza o amenaza que se pretende repeler. Cuando se usa fuerza excesiva toda privación de la vida resultante es arbitraria”.³¹²

Además, el caso debe ser analizado dentro del contexto en el cual se producen estos hechos, marcado por el gran número de violaciones y graves violaciones a derechos por parte del Ejército ecuatoriano contra población asentada en comunidades fronterizas, criterio que quedó detallado en el capítulo anterior. De tal forma resulta posible concluir que éste no puede ser considerado un caso aislado sino enmarcado en un contexto de violencia contra población civil; tal como también queda acreditado con las noticias de prensa referidas anteriormente o en Informes Especiales, como el del Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales. Este contexto ha de ser tenido en cuenta para valorar la responsabilidad del Estado, como se expresó en el capítulo uno. Y vinculado a él, el deber de prevención del riesgo existente; es decir, el Estado conocedor del contexto y del accionar militar, debió prever y establecer las medidas necesarias para evitar que ese riesgo general del actuar del Ejército se pudiera reflejar en violaciones concretas a derechos humanos; como dice Abramovich, “el contexto de violencia configura para la Corte –IDH- una situación general que incide sobre la situación particular de las víctimas y sobre el tipo de respuestas que debía brindar el Estado.”³¹³ Y continua afirmando que

el deber de debida diligencia reforzado parece operar también sobre la evitabilidad del riesgo, esto es, sobre los factores que contribuyen a prevenir la materialización del riesgo y que están, según la Corte, en la órbita del propio Estado. Por ejemplo, la necesaria adecuación de los marcos normativos, la implementación de políticas generales de protección, la implementación de estrategias para superar la desigualdad de poder [...] y la efectividad de los mecanismos de tutela judicial, entre otros.³¹⁴

Es decir, en este caso se une por un lado el accionar directo del Ejército en el uso excesivo de la fuerza sin cumplir las exigencias necesarias que justifican el uso legítimo de la misma, en concordancia con los Principios relativos a una eficaz prevención e

³¹² Corte IDH, “Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador”, párr. 83.

³¹³ Víctor Abramovich, “Responsabilidad estatal por violencia de género: comentarios sobre el caso “Campo Algodonero” en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Anuario de Derechos Humanos 2010, Universidad de Chile, Núm. 6 (2010), 177.

³¹⁴ *Ibíd.*

investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumaria, que establece en su Principio 1 que no se podrán invocar para justificar ejecuciones extrajudiciales circunstancias excepcionales de ningún tipo, ni se llevarán a cabo en ninguna circunstancia;³¹⁵ y por otro lado la falta de prevención ante el riesgo existente en el contexto temporal y geográfico por parte del Estado; además de posibilitar la impunidad de las violaciones existentes en dicho contexto mediante discursos, inacciones o prácticas. Y teniendo en cuenta la especial obligación de precaución y garantía de derechos por tratarse Rubén Darío de un adolescente, estamos ante una presunta ejecución extrajudicial o arbitraria y la violación del Estado ecuatoriano de su obligación de respetar y proteger la vida de Rubén Darío.

El segundo deber del Estado hace referencia al deber de garantía, existiendo cinco obligaciones principales derivadas de ese deber, que deben ser cumplidas de buena fe por un Estado: la obligación de investigar las graves violaciones a los derechos humanos; la obligación de brindar un recurso efectivo a las víctimas; la obligación llevar ante la justicia y sancionar a los responsables; la obligación de brindar justa y adecuada reparación a las víctimas y sus familiares; y la obligación de establecer la verdad de los hechos.³¹⁶

La obligación de investigar, íntimamente ligada a la actuación de órganos de justicia y al acceso a un recurso judicial efectivo y adecuado,³¹⁷ implica que debe ser una investigación profunda, particularmente en casos de violación del derecho a la vida,³¹⁸ iniciada de forma inmediata, que sea imparcial y efectiva y no una simple formalidad.³¹⁹ Y que, además, debe ser realizada “por todos los medios legales disponibles y estar orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de todos los responsables, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales”,³²⁰ con el más estricto apego a la debida diligencia³²¹ y dentro de un plazo razonable.³²²

³¹⁵ ONU, Consejo Económico y Social, “Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”, Resolución 1989/65, 24 de mayo de 1989.

³¹⁶ Comisión Internacional, *Impunidad*, 43.

³¹⁷ Corte IDH, “Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, Sentencia de 2 de febrero de 2001 (Fondo, Reparaciones y Costas)”, Serie C No. 72, *Corte Interamericana de Derechos Humanos*, 2001, párr. 222, <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_72_esp.pdf>.

³¹⁸ ONU, “Comunicación Nydia Erika Bautista” párr. 8.6.

³¹⁹ Corte IDH, “Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia”, párr. 296.

³²⁰ Corte IDH, “Caso de la Masacre de La Rochela vs. Colombia”, párr. 148.

³²¹ *Ibíd.*, párr. 149.

³²² Corte IDH, “Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia”, párr. 319.

Respecto al caso de Rubén Darío, en la investigación iniciada por la Fiscalía el Estado no cumplió con sus obligaciones por cuanto la indagación ya se ha prolongado por un plazo de más de seis años, sin avanzar en forma significativa y estando en este momento en suspensión o inactividad prolongada por más de tres años, por lo que no se cumple el plazo razonable, ni la tutela judicial efectiva, ni, finalmente, parece existir el objetivo de llegar a la averiguación de los responsables de la muerte de Rubén; tampoco se ha realizado el necesario análisis del contexto, no situando estos hechos en el marco de violaciones a derechos humanos existente en la zona.

Además, ante esta situación y en el contexto local explicado en el capítulo 2, podría ser dudosa la imparcialidad e independencia de la Fiscalía, tanto por su miedo a las posibles represalias en caso de investigar en profundidad, como la posible presión recibida desde el Estado, al que no le interesa que la verdad de los hechos sea conocida.

Tampoco la Fiscalía cuenta con medios adecuados para la investigación, ni se le han puesto a su disposición, como se evidencia en la necesidad de que sean peritos de la ciudad de Quito los que acudan a realizar peritajes; o en la incapacidad para desarrollar pruebas esenciales, como la de la trayectoria de la bala que mató a Rubén Darío.

No ha existido un recurso efectivo, adecuado ni idóneo, por cuanto, reitero, en seis años no se ha avanzado en la averiguación de los hechos ni los responsables de los mismos; quedando demostrado, por ejemplo, en la cantidad de veces que se ha solicitado la realización de las mismas pruebas por Fiscalía con la negativa a la colaboración por parte de los supuestos responsables; lo cual evidencia la falta de garantías estatales para que el investigador avance con su tarea y con el cumplimiento de la obligación del Estado.

Además no se puede considerar profunda por cuanto las pruebas solicitadas son limitadas, demostrando también falta de preparación por parte de los funcionarios para investigar este tipo de casos, donde es muy frecuente encontrar la obstrucción e incluso, encubrimiento por parte de las Fuerzas Armadas. En este sentido, ni siquiera se hace mención en el desarrollo de la Indagación al Manual sobre la Prevención e investigación eficaces de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias de Naciones Unidas (Protocolo de Minnesota),³²³ que establece un procedimiento de cómo debe realizarse este tipo de investigación.

³²³ ONU, “Manual sobre la Prevención e investigación eficaces de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias de Naciones Unidas”, U.N. Doc. E/ST/ CSDHA/12, 1991, <<http://www.medicinalegal.gov.co/documents/10180/2118293/PROTOCOLO+MINESOTA.pdf/64e707e8-6b0a-4bb6-963a-d908d237f5ef>>.

En este caso, la Fiscalía debería haber realizado diligencias de investigación ni siquiera ordenadas, como:

- Ampliación del informe de balística, esencial para determinar el lugar de origen del disparo que mató a Rubén Darío, con la protección de la policía nacional, ante la negativa del Ejército. Y asimismo, llamar a rendir versión a los técnicos peritos a fin de que expliquen detalladamente tanto su primer informe como la ampliación al mismo.
- Realizar informe pericial sobre la bala encontrada en el cráneo de Rubén Santander para determinar el tipo de munición y arma que la disparó y cotejarla con las armas y municiones utilizadas por el Ejército ecuatoriano, solicitando para ello al Ministerio de Defensa listado de armas de dotación militar.
- Realizar la búsqueda y dragado del río San Miguel, en la zona donde se encontraba la embarcación del Ejército ecuatoriano, a fin de localizar casquillos de las balas disparadas y poder cotejarlas con la encontrada en el cráneo de Rubén Darío.
- Ordenar, con autorización judicial, el allanamiento de las instalaciones militares a las cuales pertenecía el soldado herido e identificado, a fin de por un lado precautelar las armas y municiones utilizadas por el Ejército y por otro realizar pericial para cotejarlas con la bala encontrada en el cráneo de Rubén Darío; y además, requisar los documentos e informes existentes en dichas instalaciones sobre el operativo realizado el 11 de agosto de 2011.
- Ordenar la reconstrucción de los hechos, sin depender de la protección militar para la realización de la misma, y con participación de los testigos directos y familiares que rindieron versión en la Fiscalía.

Y tal como establece el Protocolo de Minnesota, la Fiscalía debería haber establecido una Comisión Investigadora especial con un alcance y capacidades de investigación claros y definidos, dado que en este caso no es posible una investigación objetiva por la participación directa de agentes estatales,³²⁴ y porque tal como expresa el Protocolo³²⁵

Debe establecerse una comisión indagatoria independiente o un procedimiento semejante en los casos en que una investigación rutinaria resulte insuficiente por: i. Falta de pericia; o ii. Falta de imparcialidad; o iii. La importancia del asunto; o iv. La existencia manifiesta de criterio abusivo; o v. Reclamaciones de la familia de la víctima acerca de las insuficiencias señaladas u otras razones sustanciales.

³²⁴ ONU, “Manual sobre la Prevención e investigación eficaces de las ejecuciones extralegales”.

³²⁵ *Ibíd.*

Y sobre las responsabilidades del Estado sobre investigaciones relacionadas a la violación del derecho a la vida, la Corte Interamericana ha resuelto expresamente que “cualquier carencia o defecto en la investigación que perjudique la eficacia para establecer la causa de la muerte o identificar a los responsables materiales o intelectuales, implicará que no se cumpla con la obligación de proteger el derecho a la vida”.³²⁶

Por ello, Ecuador es responsable internacionalmente de la violación del derecho a la vida de Rubén Darío Santander Guerrón y del derecho a la tutela judicial efectiva, por el incumplimiento de sus obligaciones relacionadas a la investigación de la misma, de acuerdo a los estándares y obligaciones internacionales.

Parte esencial de las obligaciones derivadas de la garantías que debe dar el Estado es la de juzgar y sancionar a los responsables de violaciones a derechos humanos, en una lucha activa y constante contra la impunidad. En caso contrario surge la responsabilidad internacional del Estado, tal como expresa la Corte IDH “[s]i el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción”.³²⁷

Indisolublemente unido con la lucha contra la impunidad, va el derecho a la verdad, como derecho individual y colectivo; precisando la CIDH que este derecho supone “conocer la verdad íntegra, completa y pública sobre los hechos ocurridos, sus circunstancias específicas y quiénes participaron en ellos”.³²⁸

El derecho a la verdad está esencialmente vinculado a otros derechos como el de protección legal, a las garantías judiciales, a un recurso efectivo, al acceso a la información y, por consiguiente, a obligaciones de los Estados, como la diligencia de las investigaciones y procesos, establecer la realidad de los hechos y los responsables y, por supuesto, remover todos los obstáculos de cualquier tipo que pudieran existir para ello.

³²⁶ Corte IDH, “Caso Baldeón García Vs. Perú”, párr. 97.

³²⁷ Corte IDH, “Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras”, párr. 176.

³²⁸ CIDH, “Informe caso Monseñor Romero”, párr. 148.

En Ecuador, por su parte, tanto la Constitución, en su artículo 78,³²⁹ como la Corte Constitucional en 2014,³³⁰ reconocen expresamente el derecho a la verdad como un derecho fundamental, y por tanto, directamente exigible y protegible.

En el caso de Rubén Darío se ha violado el derecho a la verdad y con ello los derechos a garantías judiciales y a la tutela judicial efectiva, ya que el estado es responsable por su falta de voluntad a esclarecer los hechos y a sancionar a los responsables, negando con ello también el derecho de la familia de conocer la verdad y obtener reparación.

Para ello se han puesto en práctica mecanismos de impunidad fácticos, en cuanto en la negativa del Ministerio de Defensa se ha basado en el desconocimiento o la interpretación arbitraria de normas existentes para negar el acceso a la información, y por otro lado, se ha dado y permitido la obstaculización reiterada de la investigación, por ejemplo, al negarse el soldado herido a testificar o al negarse el Ejército a colaborar según las peticiones de la Fiscalía, o pidiendo pruebas sin sentido o de mala fe, como la petición el pasado judicial del padre de Rubén. Sin que la autoridad investigativa quisiera o pudiera hacer nada para impedir estos mecanismos de impunidad.

En este caso, la Fiscalía, podría haber iniciado una investigación penal en contra del soldado que se negó a revelar la información solicitada y contra autoridades militares como el General Villegas de la Brigada Amazonas, con base en el artículo 272 del Código Integral Penal (COIP en adelante),³³¹ que establece la responsabilidad penal de quien conociendo la conducta delictual de una o varias personas “les favorezcan ocultando los instrumentos o pruebas materiales de la infracción”.³³²

De igual manera la Fiscalía podría haber solicitado, de acuerdo al artículo 582 del COIP,³³³ el auxilio de la fuerza pública ante las negativas reiteradas del soldado a comparecer a rendir su testimonio.

Por tanto, Ecuador es responsable internacionalmente por la violación del derecho a la verdad y a la tutela judicial efectiva.

³²⁹ El art. 78 de la Constitución del Ecuador señala que “Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado.

³³⁰ Corte Constitucional del Ecuador, “Sentencia No. 114”.

³³¹ Ecuador, “Código Orgánico Integral Penal”, en *Tercer Suplemento, Registro Oficial No. 180* (10 de febrero de 2014), art.272.

³³² *Ibíd.*

³³³ *Ibíd.*, art. 582.

Por otro lado, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos recoge el derecho de acceso a la información en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos³³⁴ y el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos,³³⁵ enmarcándolo dentro del derecho a la libre expresión, y estableciendo el derecho a buscar, recibir y difundir información.

Y este derecho sólo admite limitaciones bajo ciertos requisitos, “verdadera excepcionalidad, consagración legal, objetivos legítimos, necesidad y estricta proporcionalidad”.³³⁶

Además, respecto a la alegación de seguridad nacional no puede ser utilizada para impedir una investigación por hechos atribuidos a agentes estatales, ni puede quedar la decisión de calificar como secreta una información y la de entregarla al arbitrio del mismo órgano que supuestamente ha violado el derecho.³³⁷ Además, debe demostrarse que hacer pública dicha información puede producir una afectación grave, real, objetiva y actual de las actividades de defensa de un Estado;³³⁸ y obligando a que las decisiones denegando el acceso sean motivadas y debidamente fundamentadas, lo cual permita realizar una valoración adecuada sobre la justificación de la restricción.³³⁹

Y específicamente, para el caso de violaciones a derechos humanos, las autoridades estatales “no pueden ampararse legítimamente en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional”,³⁴⁰ para negar la información.

En Ecuador la Constitución consagra este derecho en su artículo 18,³⁴¹ al establecer el derecho a acceder a la información generada por el Estado, añadiendo que “En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información”.

En el caso de Rubén, la negativa del Ministerio de Defensa viola la Constitución y el estándar internacional que establece que no hay reserva en caso de violación a derechos humanos. Pero incluso, se incumplen, en el caso, los mínimos requisitos exigidos para cualquier negativa, por cuanto al negarse, el Ministerio de Defensa no

³³⁴ *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos* (1966).

³³⁵ *Convención Americana sobre Derechos Humanos* (1969).

³³⁶ CIDH, “Informe Anual 2010”, párr. 11.

³³⁷ Corte IDH, “Caso Myrna Mack Chang”, párr. 181.

³³⁸ CIDH, “El derecho de acceso a la información”.

³³⁹ Corte IDH, “Caso Claude Reyes y otros vs Chile”, párr. 77.

³⁴⁰ CIDH, “Derecho a la verdad en las Américas”, párr. 113.

³⁴¹ Constitución del Ecuador, art. 18.

realizó ninguna motivación de su decisión, tampoco valoró la proporcionalidad de la negativa ponderando la misma con la investigación por violación al derecho a la vida que se estaba realizando; ni se justificaron graves, objetivas, reales y actuales razones de seguridad nacional, de hecho, no se dio ningún tipo de justificación. Quedando, además, en manos del supuesto violador del derecho, la decisión tanto sobre calificar la información como reservada como su entrega o no.

Finalmente queda evidenciado como la fiscalía, carece o de competencias y capacidades sobre este tema, al aceptar y allanarse ante tales negativas, o bien de la independencia necesaria para realizar la investigación y hacer valer su rol.

En este caso la Fiscalía podría haber solicitado al Ministerio de Defensa la motivación que justificara la consideración de reservada de la información pedida y la justificación de las razones por las que proporcionalmente se justifica dicha reserva ante la investigación realizada y de las consecuencias que tendría para el país la revelación de dicha información; además de exigir la presentación que justificara el cumplimiento de los requerimientos legales establecidos como la declaración previa de reserva y el índice publicado donde aparezca la misma.³⁴²

Asimismo, podría haber utilizado los mecanismos de garantías constitucionales existentes, incluida la vía de la Corte Constitucional, para que se obligue al Ministerio de Defensa a entregar la información necesaria por tratarse de un caso de violación a derechos humanos y presunta ejecución arbitraria por agentes estatales. E incluso podría haber iniciado una investigación penal o solicitado el inicio de la misma en contra de las autoridades militares por impedir a los órganos de justicia avanzar con la investigación de un acto delictivo, con base en el artículo 272 del Código Integral Penal.³⁴³

Bajo estas consideraciones, Ecuador es responsable de la violación del derecho de acceso a la información y al debido proceso, por la acción del Ministerio de Defensa, y también por no haber adecuado las normas y prácticas nacionales a las obligaciones internacionales en la materia.

3. Propuesta de proceso de exigibilidad estratégica en el caso de Rubén Darío Santander

Ha quedado evidenciado que en Sucumbíos existen graves violaciones a derechos humanos y la responsabilidad del Estado en esas violaciones, específicamente en la

³⁴² Ecuador, “Ley Orgánica de Transparencia”, art. 18.

³⁴³ Ecuador, “Código Orgánico Integral Penal”, art. 272.

muerte de Rubén Darío, que han quedado en la impunidad. Ante ello se considera necesario desarrollar procesos estratégicos que luchen contra esta situación.

Estos procesos han estado marcados frecuentemente por el litigio estratégico o de impacto, ante tribunales nacionales e internacionales, entendido como

La estrategia de seleccionar, analizar y poner en marcha el litigio de ciertos casos que permitan lograr un efecto significativo en las políticas públicas, la legislación y la sociedad civil de un Estado o región. Es un proceso de identificación, socialización, discusión y estructuración de problemáticas sociales y a partir de allí promover casos concretos para alcanzar soluciones integrales a tales problemáticas sociales, para lograr cambios sociales sustanciales.³⁴⁴

Sin embargo, centrarse exclusivamente en el proceso judicial, sin contemplar todo el contexto político, social y militar en que se ha producido el caso a litigar y sin que se haya previsto una respuesta integral a dicho contexto, puede suponer que a pesar de tener una sentencia o resolución favorable, incluso que suponga un fallo paradigmático y progresivo, ello no suponga reales transformaciones sociales con impacto en la vida de la gente, ni en la situación de violación a sus derechos humanos.³⁴⁵

Y en el caso de Rubén y de Sucumbíos no se busca únicamente tener una sentencia que pudiera llegar a reconocer la existencia de la violación de los derechos, sino conseguir un avance significativo ante una problemática social que trasciende lo jurídico; y porque, probablemente una sentencia no hará que el gobierno del Ecuador y las fuerzas armadas modifiquen su forma de actuar, sostenida por años en la frontera.

Es por ello que el litigio se debe integrar como un medio o una herramienta más para la consecución del fin perseguido, que en el caso de esta tesis es múltiple: por un lado está el reconocimiento de la violación del derecho a la vida de Rubén Darío, con la consiguiente reparación por el Estado, incluido el derecho a la verdad; pero también las reformas legales en materia de acceso a la información para adaptarlas a los estándares internacionales y a la Constitución; el cambio de las prácticas institucionales, tanto del Ejército como de las instituciones públicas respecto a las acciones y estrategias violatorias de derechos por parte del Ejército; el cambio del imaginario social existente sobre la población en las comunidades de frontera, que ha coadyuvado a que la realidad existente se mantenga; y la visibilización de la realidad de las personas en frontera, en orden a iniciar procesos serios de desarrollo integral. Abriendo además, la puerta para que las

³⁴⁴ Lucas Correa Montoya, “Litigio de alto impacto: Estrategias alternativas para enseñar y ejercer el Derecho” *Revista Opinión Jurídica*, vol. 7, Núm. 14, (julio-diciembre, 2008), 149-162, 149, <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94512646010>>.

³⁴⁵ *Ibíd.*, 159.

violaciones cometidas en el pasado se visibilicen y salgan de la impunidad y prevenir que se sigan cometiendo en el futuro; conjuntamente con el empoderamiento de la población sobre sus derechos y el ejercicio de los mismos.

Se evidencia que es imprescindible plantear una estrategia de exigibilidad desarrollada “a través de componentes interdisciplinarios e interrelacionados, que en conjunto dan forma al proceso y a la solución”³⁴⁶ y que permitan conseguir cambios estructurales en el ámbito de los derechos humanos que favorezcan a la totalidad de la sociedad, o a amplios sectores de ésta que, por diversas razones no logran ejercer sus derechos humanos.³⁴⁷

Este proceso de exigibilidad es, por tanto, un proceso social, político y legal que implica necesariamente la construcción participativa de una amplia estrategia. Por ello, la estrategia que se propone en el caso de Rubén Darío integra los componentes político, social, comunicacional, de educación, de seguridad y jurídico; y parte de los medios y aliados disponibles para la ejecución de la misma; teniendo en cuenta que tanto para su concreción como la posterior implementación se creará, en primer lugar, una alianza entre personas víctimas de violaciones a derechos y personas de Sucumbíos, junto a organizaciones nacionales internacionales e instituciones académicas; que revisará la misma y la planificará en detalle, con acciones concretas, cronograma de desarrollo de las mismas y distribución de responsabilidades y roles, entre otros. Esta alianza, permitirá además, un acompañamiento y respaldo recíprocos; y una retroalimentación que permita sostener la larga duración que tendrá el proceso y apoyar el empoderamiento de las personas y su ejercicio efectivo de derechos.

a. **Componente político**

Implica la necesidad de fortalecer la participación activa de las personas en el proceso para incidir en el ámbito de lo público, tratando de posicionar el caso y la situación de la frontera en la agenda política; sensibilizar a las autoridades y a grupos con capacidad de influencia con el objetivo de que el Estado demuestre interés y actúe en consecuencia respecto a las violaciones de derechos humanos, a la situación de abandono de la zona y al comportamiento de los militares en la misma.

³⁴⁶ *Ibíd.*, 153.

³⁴⁷ Universidad Andina Simón Bolívar, “Exigibilidad estratégica en Derechos Humanos”, *Revista Electrónica del Programa Andino de Derechos Humanos [PADH] Aportes Andinos* No. 35 (diciembre 2014), 5, en <<https://issuu.com/aportesandinos/docs/aa35>>. Consulta: 2 de septiembre de 2017.

Para ello, y teniendo en cuenta la apertura al diálogo del actual gobierno, la alianza creada elegirá a tres personas, entre víctimas y organizaciones, como voceros ante el gobierno nacional y los locales, que buscará mantener reuniones con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Presidencia de la República, y a nivel local con la Gobernadora de la Provincia y el Prefecto de Sucumbíos. El objetivo será desde la presentación y visibilización de la situación de derechos en la frontera, conseguir la realización de un foro en la provincia, abierto y participativo, entre pobladores e instituciones de gobierno para establecer un plan de acción y desarrollo que será revisado anualmente. Eligiendo para ello una comisión de seguimiento de ambas partes que se reunirá trimestralmente para analizar los avances y ajustes del mismo, así como la situación del contexto. La representación del gobierno se comprometerá a coordinar las acciones necesarias con otras instituciones públicas y fuerzas de seguridad y a rendir cuentas sobre las mismas.

b. Componente social

Es esencial el desarrollo de acciones que permitan visibilizar ante la sociedad de la provincia y del país la situación de la frontera norte, y por otra parte, tratar de empujar acciones que, complementariamente al proceso, permitan a la población y comunidades afectadas involucrarse en su propio desarrollo y actuar activo; en un proceso sinérgico con el componente social.

Por ello, en las comunidades se realizarán dos foros públicos y abiertos al año, uno en una comunidad del río San Miguel y otro en una del río Putumayo, para visibilizar las violaciones a derechos humanos sufridas y la respuesta a dar ante las mismas, tanto desde el ámbito legal como desde el apoyo comunitario a iniciativas colectivas de defensa y desarrollo que puedan ser auto gestionadas; las cuales serán revisadas anualmente en asambleas participativas. Estos foros y sus conclusiones y aportes sobre la situación en frontera serán llevados a las acciones del componente político, en una interacción continua entre ambos componentes y sus discusiones.

Además, se desarrollará un foro provincial anual, organizado por la Federación de Mujeres de Sucumbíos, el Comité de Derechos Humanos de Sucumbíos y la Clínica Ambiental, donde se presenten testimonios de víctimas y la historia de la frontera, para sensibilizar a las personas localmente y conseguir su empatía con el proceso, incluso su involucramiento. De igual forma, al menos una vez al año se realizará un foro nacional con aliados como INREDH, Comisión Ecuaménica de derechos Humanos (en adelante CEDHU) y la Universidad Andina Simón Bolívar, permitiendo visibilizar y sensibilizar

sobre la situación de frontera y sus iniciativas, y a la vez, fortalecer la alianza con estas instituciones y su activa participación en todo el proceso, especialmente con su capacidad de incidencia en el nivel nacional.

En momentos puntuales, por ejemplo el aniversario de la muerte de Rubén Darío o eventos relacionados con el avance legal del caso, se organizarán eventos especiales, marchas pacíficas, campañas en redes sociales o de envío de mails masivos; recordando que se está en el proceso, reclamando la solución e intervención del Estado y posicionando el tema.

c. Componente comunicativo

Es esencial para lograr la visibilización del proceso y llegar al mayor número posible de personas, desarrollar desde el inicio un Plan de Comunicación del Caso, para lo cual se contará con varios medios de comunicación, que han sido aliados en derechos humanos en la provincia desde hace varios años: a nivel local Radio Sucumbíos y Radio Cuyabeno, con alcance provincial y afiliadas a la Coordinadora de Medios Comunitarios populares y Educativos del Ecuador (en adelante CORAPE), y a nivel nacional con los periodistas Víctor Gómez (corresponsal de El Universo) y Diego Bravo (redactor de seguridad de El Comercio). Y ello es de especial relevancia por el imaginario social que existe a nivel nacional e incluso provincial sobre las personas que viven en la frontera, como mafiosas, guerrilleras o narcotraficantes, lo que ha facilitado la impunidad. El plan de comunicación tiene dos objetivos esenciales, por un lado luchar para romper con ese falso imaginario, a través de la presentación de historias de la gente que vive en la zona y de la situación en que se encuentran las comunidades, para lo cual se presentarán programas especiales trimestralmente en Radio Sucumbíos y Radio Cuyabeno de una hora de duración y un reportaje semestralmente en El Comercio y El Universo; y por otro lado, visibilizar tanto las violaciones a derechos humanos sufridas, a través de la presentación de casos, como actualizar continuamente sobre los avances del caso y el proceso de litigio estratégico y otras acciones desarrolladas, para lo cual se publicarán en los medios indicados entrevistas y artículos de opinión en los momentos adecuados. Para la coordinación de esta estrategia se cuenta con Víctor Gómez, director de Radio Sucumbíos y corresponsal en la zona de El Universo.

d. Componente de educación

Se desarrollará a dos niveles. El primero entre la misma población de la frontera, en el sentido de mejorar su formación en materia de derechos humanos y de uso de mecanismos de exigibilidad, con el objetivo de su participación activa en los diferentes

componentes de este proceso y el empoderamiento en derechos de la población. Ello se realizará a través de la realización de un módulo de formación en derechos y mecanismos de exigibilidad de tres meses a las veinte promotoras de la Escuela de Promotoras de la Federación de Mujeres de Sucumbíos, las cuales tienen dos días de formación al mes que posteriormente replican en ciento cincuenta comunidades de la provincia. Además, se realizarán, desde la Oficina de Derechos Humanos de la Federación de Mujeres, visitas semestrales a las comunidades de frontera, para revisar asambleariamente la situación comunitaria y fortalecer sus mecanismos de exigibilidad.

A un segundo nivel se desarrollará con tres instituciones educativas de la provincia: la Unidad Educativa Nacional Napo y la Unidad Educativa Pacífico Cembranos, ambas ubicadas en Nueva Loja y con el mayor número de estudiantes de la provincia; y la Unidad Educativa del Milenio en Puerto El Carmen, ubicada en la ribera del río Putumayo. En las mismas se realizarán anualmente y de forma alternativa, foros de discusión o conversatorios sobre la situación de la frontera de Sucumbíos y ferias interactivas sobre derechos humanos; dirigidas estas acciones a estudiantes de bachillerato. Además, se designarán por consenso delegados o delegadas de estas unidades educativas para participar en la coordinación del caso de Rubén, de forma que sean portavoces ante los estudiantes sobre cómo avanza el caso. Los objetivos son, por un lado, visibilizar y sensibilizar a los estudiantes sobre la situación de la frontera y las violaciones a derechos humanos, dándoles presencia y reconocimiento a través del caso, y por otro la alianza de las autoridades académicas con el proceso.

e. Componente de seguridad

En el contexto que se ha reflejado en la presente tesis y con los precedentes de represalias a cargo de los militares, desde el inicio del proceso se implementará un Plan de Seguridad, que contemple, entre otros, el análisis de riesgos, las medidas de respuesta y las formas de protección ante las amenazas. Para ello se establecerán alianzas locales y nacionales (víctimas, Federación de Mujeres de Sucumbíos, Comité de Derechos Humanos e INREDH), con las que se preverán acciones urgentes de respuesta en caso necesario, incluyendo las humanitarias (transporte, alojamiento, alimentación), jurídicas, políticas y mediáticas.

Este Plan de Seguridad también incluye medidas de protección en el uso y archivo de la información, que estará en lugar protegido y bajo llave en la Oficina de Derechos Humanos de la Federación de Mujeres de Sucumbíos; y se adoptarán medidas de seguridad en las comunicaciones, con el uso de encriptadores.

3.1. Propuesta de litigio estratégico

En el caso de Rubén existen graves violaciones a derechos, por lo que el componente jurídico es pieza esencial dentro de la estrategia de exigibilidad.

El caso es emblemático y representativo de la situación que ha ocurrido en frontera durante los últimos quince años, tanto respecto a su gravedad, como al reflejo de la situación existente; con un gran potencial para visibilizar el contexto y luchar contra el mismo. Afectando además a un adolescente, grupo de atención prioritaria constitucionalmente, respecto al cual el Estado tiene una especial obligación de protección y garantía de derechos.

Por ello la vía del litigio es necesaria y sus posibilidades de éxito altas, dados los estándares internacionales existentes, y podría significar la condena al Estado como responsable de la violación de derechos y la imposición de medidas de reparación, lo cual, dentro de la estrategia reseñada sería un paso importante. Mientras que una decisión negativa, suponiendo un contratiempo, no sería una situación irremediable en el proceso general planteado.

En el diseño de la estrategia jurídica, es esencial tener en cuenta varios aspectos, que son analizados a continuación. Así, sobre la elección del caso, se considera idóneo el de la muerte de Rubén Darío, por las razones señaladas y por cuanto los padres de Rubén están totalmente dispuestos y comprometidos con la posibilidad de iniciar una acción de litigio estratégico que puede prolongarse durante años e incluso, no tener éxito; conscientes de los retos y dificultades del mismo, como la duración, la persecución o acusaciones de la que pueden ser objeto durante el mismo, el dolor de revivir los hechos y la posible frustración ante los resultados obtenidos; y comprometidos con los objetivos generales buscados. Existiendo, además, el compromiso de la Federación de Mujeres en el acompañamiento legal y personal durante todo el proceso.

Por otro lado, al plantearse una acción de litigio de impacto, es necesario también valorar el contexto nacional sobre el tema, en este caso la seguridad nacional y su aplicación en frontera norte, y si bien históricamente ha pesado la práctica militarista y la impunidad ante sus acciones, la situación política actual, derivada de un cambio de gobierno reciente, facilita una oportunidad de encontrar apertura al diálogo sobre esta situación y al planteamiento del desarrollo de la seguridad humana.

Igualmente es esencial para esta estrategia la creación de alianzas, a nivel nacional e internacional, con organizaciones y Universidades expertas en el desarrollo de este tipo de procesos, para lo cual se contará con el equipo jurídico de INREDH y con el doctor

Ramiro Ávila de la Universidad Andina Simón Bolívar, a nivel nacional; y con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) a nivel internacional, con quien se ha colaborado en litigio estratégico en frontera previamente.

Para finalizar, la estrategia debe contener un mecanismo que incluya el seguimiento del proceso, tanto en su etapa inicial, como una vez presentada la acción y tras haber obtenido una sentencia; que respete, entre otras, la toma de decisiones consensuadas, el privilegiar los intereses de la familia de Rubén sobre otros objetivos del litigio; el consentimiento informado en la toma de decisiones y la protección de la víctima y sus derechos.³⁴⁸ Para ello se establecerán encuentros trimestrales de forma ordinaria, y extraordinarios cuando resulte necesario, entre la familia y representantes legales, para actualizar sobre la marcha del proceso, su análisis y toma de decisiones al respecto. Y actuando sinérgicamente con la plataforma de coordinación de la estrategia de exigibilidad. Al finalizar el proceso judicial el equipo de coordinación creado dará seguimiento al mismo para garantizar el cumplimiento de la sentencia en caso de resolución favorable y su uso para incidencia en cualquier caso.

Respecto a cuál es el tribunal propuesto para iniciar el litigio, se analizará a continuación cuál es la vía más adecuada, partiendo de la existencia de violaciones a derechos como el derecho a la vida, la protección judicial efectiva, el derecho a la verdad, el derecho a ser reparado y el derecho de acceso a la información:

En la vía nacional, considerando que la vía penal en la que actualmente se encuentra el proceso ha resultado inefectiva, por las razones expuestas, se identifica la vía de garantías jurisdiccionales establecidas constitucionalmente. Entre ellas se podría pensar en la acción de protección;³⁴⁹ sin embargo, ésta excluye la posibilidad de interposición en caso de supuestas violaciones a derechos por autoridades judiciales,³⁵⁰ estando en este caso ante una imposibilidad de ser presentada por la falta de recurso efectivo en la vía penal. Existiría la posibilidad de presentar una acción judicial de acceso a la información,³⁵¹ contra el Ministro de Defensa, en cuanto representante legal de la

³⁴⁸ Carlos Martín Beristáin, *Manual sobre perspectiva psicosocial en la investigación de derechos humanos* (Bilbao: Hegoa, 2010), 92-3.

³⁴⁹ Constitución del Ecuador, art. 88: “La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial”.

³⁵⁰ *Ibíd.* Y Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, Registro Oficial Suplemento 52, 22 de octubre de 2009, art. 41: “La acción de protección procede contra: 1. Todo acto u omisión de una autoridad pública no judicial que viole o haya violado los derechos, que menoscabe, disminuya o anule su goce o ejercicio”.

³⁵¹ Constitución del Ecuador, art. 91: “La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha

institución estatal que negó la información solicitada por la Fiscalía y esencial para continuar la investigación del caso de presunta ejecución extrajudicial de Rubén Darío Santander.

Sin embargo, es necesario señalar que la normativa ecuatoriana establece que “no se podrá acceder a información pública que tenga el carácter de confidencial o reservada declarada en los términos establecidos por la ley”,³⁵² argumento utilizado por el Ministerio de Defensa. De forma que de acuerdo a la ley, si presentada la acción judicial, el Ministerio demuestra la declaración de reserva previa a la solicitud de información y su inclusión en el listado índice de información reservada del Ministerio, la acción sería negada, de forma que “Si se justifica plenamente la clasificación de reservada o confidencial, el juez o tribunal, confirmará la negativa de acceso a la información”.³⁵³

En este sentido, la Corte Constitucional del Ecuador, en el periodo 2009 a 2017, no se ha pronunciado acerca del acceso a la información frente al Ministerio de Defensa o ante el motivo de seguridad nacional.³⁵⁴ Sin embargo, sí se ha pronunciado sobre la reserva en general que impide el acceso a información, reiterando que “No se podrá acceder a información pública que tenga el carácter de confidencial o reservada, declarada en los términos establecidos por la ley”,³⁵⁵ señalando que

Para que se configure la vulneración del derecho de acceso a la información pública y proceda el planteamiento de la acción que lo tutela, debe concurrir, sine qua non, al menos [...] que la denegación de información se sustente en el carácter secreto o reservado de la misma, [...] siempre y cuando no haya sido declarada legalmente como tal, de forma previa al requerimiento.³⁵⁶

Es decir, en la legalidad vigente ni en los pronunciamientos de la Corte Constitucional, no se contemplan los estándares internacionales en la materia, ni siquiera el mandato constitucional de no existencia de reserva en casos de violaciones a derechos humanos. Por tanto, se podría presentar una garantía jurisdiccional de acceso a la información, partiendo de la existencia de dos bienes o derechos en conflicto: seguridad nacional vs. derecho a la vida/grave violación a derechos humanos y que el juzgador

proporcionado no sea completa o fidedigna. Podrá ser interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el carácter secreto, reservado, confidencial o cualquiera otra clasificación de la información”; ver también Ley de Garantías Jurisdiccionales, art. 47.

³⁵² Ley de Garantías Jurisdiccionales, art. 47.

³⁵³ Ecuador, “Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, en *Registro Oficial Suplemento No. 337* (18 de mayo de 2004), arts. 18 y 22.

³⁵⁴ Investigación realizada por el autor sobre más de 20 sentencias respecto al acceso a información publicadas por la Corte Constitucional en el periodo indicado.

³⁵⁵ Ecuador, Corte Constitucional, “Sentencia No. 107-17-SEP-CC”, *Caso No. 1993-11-EP*, 19 de abril de 2017.

³⁵⁶ *Ibíd.*

realice una ponderación y análisis de razonabilidad y proporcionalidad sobre la existencia de una gravedad objetiva y riesgo real que supondría revelar la información negada en el caso concreto y comparado con la grave violación al derecho a la vida y las obligaciones estatales de investigación y sanción a los responsables. Pero no se considera efectiva la vía por las argumentaciones expresadas por la Corte Constitucional al respecto y el peso y legitimidad nacionales del Ministerio de Defensa y sus acciones en la frontera norte, evidenciados a lo largo de la presente tesis, lo que hace muy improbable una resolución favorable y por el contrario, una acumulación del retraso acumulado en la investigación.

En otro nivel, existe la posibilidad de acudir a una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, establecida en el artículo 94 de la Constitución,³⁵⁷ tras el archivo de la actualmente congelada Indagación Previa e incluso contra la sentencia contraria en una hipotética acción de acceso a información pública. En este sentido, esta acción “tiene como presupuesto el hecho de que las personas acudieron a la justicia ordinaria para reclamar la violación de sus derechos o que dentro del trámite del proceso se violaron los mismos, sin que dicha vía haya resultado efectiva para garantizarle el derecho a la tutela judicial”,³⁵⁸ por lo que inicialmente podría ser una vía adecuada.

Sin embargo, la Corte Constitucional ha desarrollado la acción extraordinaria como un recurso, no como una acción, por cuanto al decidir la existencia de la violación al derecho durante un proceso, anula resoluciones judiciales y “reenvía a la víctima de vuelta a la justicia ordinaria sin haber reparado sus derechos (que además sí declara violados)”,³⁵⁹ y como ejemplos de ello, la sentencia No. 020-09-SEP-CC de 13 de agosto del 2009 y la sentencia No. 009-09-SEP-CC de 19 de mayo de 2009.³⁶⁰

En idéntico sentido el anterior presidente de la Corte Constitucional, doctor Patricio Pazmiño, afirmó, sobre la acción extraordinaria de protección y el rol de la Corte Constitucional que, “En el caso de detectar una vulneración debe declararla junto con la identificación clara del momento procesal en la que surgió. Luego de ello la Corte

³⁵⁷ Constitución del Ecuador, art. 94: “La acción extraordinaria de protección procederá contra sentencias o autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución, y se interpondrá ante la Corte Constitucional. El recurso procederá cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado”.

³⁵⁸ David Cordero Heredia, *La acción extraordinaria de protección: ¿acción o recurso?*, publicación digital en http://www.inredh.org/archivos/pdf/boletin3_accion_proteccion_davidcordero.pdf. Consulta< 10 de septiembre de 2.017.

³⁵⁹ *Ibíd.*

³⁶⁰ *Ibíd.*

devolverá el expediente al juzgado, Corte o Tribunal de origen con la finalidad de que en respeto a la tutela judicial imparcial se vuelva a juzgar desde el momento procesal identificado”.³⁶¹

Es decir, esta vía tampoco se considera adecuada por cuanto en caso de ser declarada la violación al derecho, se devolvería la investigación al juzgador penal y a la Fiscalía para continuar con la investigación, volviendo a iniciar el proceso que durante seis años ha resultado inefectivo.

Por ello, la vía más adecuada sería la internacional, existiendo la posibilidad de acudir al sistema de protección universal o al interamericano. Respecto al sistema universal, existe la posibilidad de acudir ante el Comité de Derechos Humanos,³⁶² sin embargo “Los comités examinan cada caso en sesión privada. [...] en la práctica se examinan las denuncias sólo sobre la base de la información presentada por escrito por el autor de la denuncia y por el Estado parte. Por lo tanto, no es costumbre admitir presentaciones orales de las partes ni pruebas sonoras o audiovisuales”.³⁶³ Además, “Las decisiones de los comités constituyen una interpretación autorizada de los tratados respectivos. Contienen recomendaciones al Estado parte en cuestión, pero no son jurídicamente vinculantes”.³⁶⁴ En igual sentido, la posibilidad de acudir a los Relatores Especiales, por ejemplo el de Ejecuciones Extrajudiciales, se encuentra con la misma limitación, en cuanto tienen la facultad de emitir recomendaciones a los Estados y aunque en ambos casos, se realiza un seguimiento sobre las mismas, su carácter vinculante para los estados es discutible.

Similarmente al sistema universal, el interamericano, conformado por la CIDH y la Corte IDH, establece la posibilidad de presentar peticiones individuales en casos de violaciones a derechos humanos,³⁶⁵ pero se diferencia del sistema universal en que existe

³⁶¹ Patricio Pazmiño Freire, *La Acción Extraordinaria de Protección. Eficacia y efectividad en el orden garantista*, (Quito: Corte Constitucional, 2013), en <https://www.corteconstitucional.gob.ec/images/stories/pdfs/ponencia_integra.pdf>.

³⁶² Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), art. 2: “todo individuo que alegue una violación de cualquiera de sus derechos enumerados en el Pacto y que haya agotado todos los recursos internos disponibles podrá someter a la consideración del Comité una comunicación escrita.”

³⁶³ ONU, Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, “Procedimientos para presentar denuncias individuales en virtud de Tratados de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, Folleto Informativo No. 7/Rev.2, (Ginebra: Organización de Naciones Unidas, 2013), 10.

³⁶⁴ *Ibíd.*

³⁶⁵ Convención Americana de Derechos Humanos (1969), art. 44.

un procedimiento público y abierto, no reservado,³⁶⁶ y en que las sentencias de la Corte IDH, son de obligado cumplimiento para los Estados.³⁶⁷

Por ello, se considera la vía interamericana como la más adecuada para plantear el caso de Rubén Darío Santander, iniciando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante la presentación de una petición, la cual permitirá a las víctimas exponer su caso y presentar las pruebas que se consideren oportunas, a diferencia del sistema universal. Además, esta vía asegura que se realizará un análisis del contexto, para determinar las responsabilidades del Estado; permitiendo la visibilización de las violaciones generalizadas y el incumplimiento de los deberes de debida diligencia y prevención de riesgos por parte del Ecuador; y, adicionalmente, se podrán establecer medidas de reparación individualizadas y también que respondan al contexto y busquen reparaciones transformadoras de la realidad.

Se analizarán a continuación los fundamentos y cumplimiento de requisitos para la presentación de la petición ante la instancia prevista.

Las personas que presentarían la petición serían la madre de Rubén, Karen Nayeli Guerrón, madre de Rubén y persona natural, y la Federación de Mujeres de Sucumbíos, entidad no gubernamental legalmente reconocida en el Ecuador, cumpliéndose ello los requisitos establecidos en el artículo 44 de la Convención Americana.³⁶⁸

Los derechos humanos violados y consagrados dentro de la Convención, que han quedado justificados con anterioridad, serían:

- El derecho a la vida. Artículo 4.
- El derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, específicamente el derecho de acceso a la información. Artículo 13.
- El derecho a la protección judicial efectiva. Artículo 25.
- El derecho al debido proceso. Artículo 8.1.

La CIDH es competente para conocer sobre la petición por cuanto: a) Ecuador es un Estado parte en la Convención Americana desde el 28 de diciembre de 1977, fecha en que depositó su instrumento de ratificación;³⁶⁹ b) se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana que tuvieron lugar dentro del territorio de un

³⁶⁶ *Ibíd.*, arts. 44 y siguientes.

³⁶⁷ *Ibíd.*, art. 68: “1. Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes. 2. La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado”.

³⁶⁸ *Convención Americana de Derechos Humanos* (1969).

³⁶⁹ Ecuador, “Decreto de Ratificación”, *Registro Oficial* 452 (27 de octubre de 1977).

Estado parte en dicho tratado; y c) la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana ya se encontraba en vigor para el Estado en la fecha en que ocurrieron los hechos alegados en la petición.

De acuerdo a los artículos 46 y 47 de la Convención Americana,³⁷⁰ se analizará a continuación el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la petición:

En primer lugar, la interposición y agotamiento de los recursos internos y presentación dentro del plazo de seis meses desde la notificación de la última decisión en el plano interno. En el presente caso fue presentada la denuncia en la Fiscalía de Sucumbíos por la muerte violenta de Rubén Darío, siendo esta la vía legal establecida nacionalmente para la investigación de este tipo de casos; sin embargo, transcurridos más de seis años (apertura de la Indagación Previa el 15 de agosto de 2011)³⁷¹ no se ha obtenido ninguna resolución dentro de la Investigación; siendo esta una etapa previa del proceso y recordando que el primer fiscal que conoció del caso, un año después del inicio de la investigación, solicitó el archivo de la misma, dado que a pesar de comprobarse la materialidad del hecho, no resultaba posible determinar la autoría del mismo.

Y pese a que un Juez negó la solicitud de archivo y la investigación recayó en un fiscal diferente, dicha investigación no ha logrado avances de ningún tipo por más de cuatro años, sin que haya sido cerrada. Es decir, pese a existir el recurso adecuado en la legislación nacional, el mismo no ha sido efectivo de ninguna manera, y no siendo efectivos tampoco los posibles recursos constitucionales existentes en la legislación nacional, por las razones señaladas con anterioridad, para garantizar que se realice la investigación de forma adecuada y se llegue al conocimiento de la verdad y sanción de los responsables.

En cualquier caso, el apartado 2 del artículo 46 de la Convención³⁷² establece que los requisitos de agotamiento de recursos y el plazo de seis meses, no se aplicarán cuando haya un retardo injustificado en la decisión de los recursos utilizados. Y como ha quedado en evidencia, el retardo por más de seis años no sólo en resolver, sino en avanzar de manera significativa es absolutamente injustificado.

En segundo lugar, que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional. Respecto al cual, la materia de esta denuncia no se encuentra pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, ni

³⁷⁰ *Ibíd.*

³⁷¹ Fiscalía de Sucumbíos, Indagación 307 de 2011.

³⁷² *Ibíd.*

consiste en la reproducción de una petición ya examinada por la CIDH u otro órgano con competencias similares para la resolución de casos individuales.

Y finalmente, alguna de las pruebas que se pueden aportar al proceso son: La documentación de la investigación realizada por la Fiscalía de Sucumbíos; la documentación del expediente aperturado sobre el caso por la Defensoría del Pueblo, Delegación de Sucumbíos; noticias aparecidas en prensa sobre el caso de diarios ecuatorianos, como El Universo, El Comercio, La Hora, El Mercurio, en páginas web de noticias como Ecuadorinmediato, La república e institucionales como la del Ministerio de Defensa; documentación existente en el archivo de la Federación de Mujeres de Sucumbíos; testimonios de cinco personas testigos directos de los; testimonios de familiares; testimonios de compañeros y profesores del Colegio Técnico Segundo Orellana; testimonios e informes de organizaciones de Sucumbíos y nacionales sobre violaciones a derechos humanos en frontera (Federación de Mujeres de Sucumbíos, INREDH, CEDHU y Acción Ecológica); testimonios de víctimas de violaciones a derechos humanos en comunidades de la frontera en Sucumbíos; informes periciales de la policía de criminalística sobre la trayectoria del proyectil que mató a Rubén Darío; informe pericial de la autopsia de Rubén Darío; informes psicológicos sobre la situación de Samuel Santander, Karen Guerrón y Leidy Santander Guerrón, familiares de Rubén Darío; pericial de los doctores Carlos Beristáin y Adolfo Maldonado sobre afectaciones individuales y colectivas en contextos de violencia y conflicto y específicamente en la frontera norte del Ecuador; facturas de los gastos ocasionados por el proceso legal seguido; y fotografías del lugar de los hechos tomadas el día de la inspección ocular del lugar de los hechos.

3.2. Reparaciones

Finalmente, es de interés analizar la obligación del Estado a reparar en este caso y cómo el Estado debe responder a la misma, respecto a la cual la Corte IDH ha establecido reiteradamente “[l]a reparación es el término genérico que comprende las diferentes formas como un Estado puede hacer frente a la responsabilidad internacional en que ha incurrido”.³⁷³ Esta reparación debe ser plena y efectiva y las posibles formas de reparación son la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.³⁷⁴

³⁷³ Corte IDH, “Caso Velásquez Rodríguez”, párr. 25.

³⁷⁴ ONU, “Principios y directrices reparaciones”, principio 18.

De acuerdo a los Principios y Directrices de Naciones Unidas sobre Reparaciones, la satisfacción ha de incluir las medidas necesarias para evitar que no continúen las violaciones; y aquellas que permitan la verificación de los hechos, estableciendo expresamente el derecho a la verdad; y la sanción a los responsables de las violaciones.³⁷⁵

Además, en el Principio 23³⁷⁶ se establecen las garantías de no repetición que han de contemplarse, entre ellas el control efectivo de las autoridades civiles sobre fuerzas armadas y de seguridad; la garantía de imparcialidad e independencia judicial y la obligación de revisar y reformar leyes que contribuyan a las violaciones de derechos humanos.

Adicionalmente, el derecho a la verdad forma parte de la reparación, ya que parte de la satisfacción es la verificación de los hechos y la difusión pública y completa de la verdad.³⁷⁷

Por todo ello, las formas reparación que se solicitarán contra el Estado en el caso de Rubén, son parte esencial de la estrategia jurídica y de exigibilidad general; debiendo ser consideradas la dimensión individual, familiar y colectiva que tuvo la violación a derechos humanos. La familiar en cuanto a los daños psicológicos sufridos a lo largo de los más de seis años en que se les ha negado la verdad, y colectiva por cuanto es una violación que afectó a su comunidad, Puerto Mestanza, pero también a toda la población de las comunidades de frontera en Sucumbíos negadas de su derecho de conocer la verdad en este caso y en los repetidos en la frontera a lo largo de más de quince años, evidenciadas mediante el análisis del contexto que permite diseñar “medidas transformativas dirigidas a cambiar pautas estructurales de violaciones a los derechos humanos”.³⁷⁸

De esta forma, desarrollamos a continuación las medidas a solicitar para reparación:

1.- Acto de reconocimiento: El Estado, representado por el Presidente de la República y el Ministro de Defensa, realizarán un acto de disculpa pública, reconocimiento de la responsabilidad estatal por la muerte de Rubén Darío y compromiso de no repetición, en el Palacio Presidencial y en presencia de la familia de Rubén y al

³⁷⁵ ONU, “Principios y directrices reparaciones”, Principio 22.

³⁷⁶ ONU, “Principios y directrices reparaciones”, Principio 23.

³⁷⁷ ONU, “Principios y directrices reparaciones”, Principio 22.

³⁷⁸ Karina Ansolabehere y otros, *Violaciones, derechos humanos y contexto*, 65.

menos cien delegados de comunidades de la frontera de Sucumbíos y que será retransmitido por los medios de comunicación a través de cadena nacional obligatoria.

Además el Estado deberá publicar en todos los medios de comunicación nacional, así como en las webs de varios Ministerios, entre ellos Justicia, Exteriores y Defensa, una nota de reconocimiento de responsabilidad, disculpas y compromiso de no repetición.

2. Medidas simbólicas: Buscando el recuerdo y la memoria de la víctima, como medida de prevención y no repetición, se pondrá el nombre de Rubén Darío Santander al Colegio Técnico donde estudiaba en el momento de su muerte, para lo cual se colocará una placa con su nombre en el ingreso al centro educativo.

3. Reparación económica: significa el reconocimiento de la pérdida sufrida, del sufrimiento experimentado y un apoyo a la reconstrucción del proyecto de vida familiar y comunitaria. En este caso, el Estado habrá de reconocer a los familiares directos de Rubén Darío el daño emergente: Gastos realizados por la familia durante el proceso legal; el lucro cesante: teniendo en cuenta que Rubén tenía 16 años y que estudiaba contabilidad, debería reconocerse, la cantidad resultante de aplicar a cuarenta años de vida laboral que hubiera tenido el salario medio de un contable, establecido en 900 dólares mensuales;³⁷⁹ y el daño inmaterial o moral, sufrido directamente por sus padres y hermana, estimado en 35.000 dólares americanos por persona.

También la comunidad de Puerto Mestanza y la zona de frontera deben ser reparadas económicamente, en cuanto afectados colectivamente por este hecho y las causas del mismo, comunes en toda la zona; reparación que consistirá en un proyecto colectivo, identificado y desarrollado de forma participativa (Estado-comunidades) por un plazo mínimo de 5 años.

4. Reparación en salud y psicosocial: La muerte de Rubén ocasionó a sus padres y hermana problemas psicológicos y sociales producto del trauma sufrido y la impunidad del hecho. Por ello, el Estado debe garantizar apoyo psicológico para los tres familiares, en sesiones quincenales, a cargo de un especialista en traumas, por un mínimo de cinco años y en un centro de salud pública de la ciudad de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos.

Además, se realizará un diagnóstico sobre el impacto psicosocial en la comunidad y en la zona de frontera derivado de la situación de violencia sufrida durante los últimos 15 años, determinando las medidas de reparación necesarias y a cargo del Estado; con el

³⁷⁹ Cálculo establecido al establecer la media de salario de contadores en tres organizaciones sociales y compañías de Sucumbíos: Federación de Mujeres de Sucumbíos, Hotel Araza y Radio Sucumbíos.

compromiso estatal de cumplir con dichas medidas y realizar procesos públicos de rendición de cuentas anuales sobre las mismas, a desarrollar en la ciudad de Nueva Loja.

5. Apoyo educativo: Con un sentido de reparación transformadora del contexto donde se produjo la violación, el Estado otorgará a la hermana de Rubén Darío, Leidy Santander Guerrón, de 15 años de edad, una beca completa de estudios hasta el nivel que ella decida continuar en cualquier centro público del país. Además se realizará un diagnóstico sobre situación educativa en las comunidades de frontera de Sucumbíos a cargo del Estado, por expertos nacionales, no funcionarios públicos, que establezcan la situación de este derecho, las necesidades existentes y las medidas a implementar; con el compromiso estatal de cumplir con dichas medidas y realizar procesos públicos de rendición de cuentas anuales sobre las mismas, a desarrollar en la ciudad de Nueva Loja.

6. Justicia: El Estado establecerá una Comisión de la Verdad, en las mismas condiciones, que la establecida para investigar casos de violaciones a derechos humanos entre 1984 y 2008; con el fin de investigar este caso y los casos ocurridos en la Frontera Norte entre 2008 y 2017. Para ello se garantizará el libre acceso a cualquier información que pueda tener relación con el caso y otros casos objeto de investigación y determinará la obligación de todas las entidades del Estado de colaborar con esta Comisión; además de garantizar todos los medios necesarios para realizar la investigación. Presentando un informe a la Fiscalía del Ecuador en el plazo máximo de seis meses, que permita a esta institución fundamentar una acusación contra los responsables en el caso de Rubén y en otros casos determinados por la Comisión. El Estado garantizará la transparencia, participación y posibilidad de acceso permanentes a la investigación por parte de los familiares y sus representantes.

7. Garantías de no repetición: A fin de procurar la no repetición de hechos como los ocurridos, se reformarán la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Seguridad Pública del Estado, estableciendo la no existencia de reserva de ningún tipo ni restricciones de acceso a la información cuando se solicite con el fin de aclarar, investigar o enjuiciar una violación a derechos humanos. Además, se incluirán contenidos específicos sobre derecho a la información y a la verdad; justicia y reparación en la formación a operadores de justicia, militares y policías, diseñados y desarrollados por expertos nacionales designados por Universidades nacionales.

De forma progresiva, en el plazo máximo de 2 años, se sustituirá al Ejército por la policía en el control de la seguridad en las comunidades de frontera y de la población civil de la zona., en calidad de responsables legales y constitucionales de la seguridad interna.

Conclusiones

En el marco del conflicto colombiano, Ecuador se decantó por involucrarse en el mismo, reforzando militarmente su Frontera Norte y desarrollando una política de seguridad nacional; lo cual supuso, que especialmente desde el año 2008, primara un criterio securitista sobre la paz y los derechos de las personas, en el marco del cual se produjeron graves violaciones a derechos humanos, presuntamente por responsabilidad del Ejército ecuatoriano, como ejecuciones extrajudiciales, torturas, privaciones ilegales de libertad, entrada ilegal a domicilios, la requisa o robo de alimentos y enseres; y acusaciones infundadas, en contra de la población civil, de colaboración con grupos irregulares.

Frente a estas violaciones a derechos humanos no existen sentencias o resoluciones de las entidades de control como jueces, fiscales y Defensoría del Pueblo desde el 2008, que aclaren los hechos ocurridos, establezcan sanciones para los responsables y reparación a las víctimas. Permitiendo de esta manera que las denuncias existentes queden congeladas sin avances de ningún tipo y condenadas a la impunidad.

Esta falta de respuesta evidencia como Ecuador ha incumplido sus obligaciones nacionales e internacionales sobre la realización de una investigación objetiva, imparcial, a través de recursos judiciales efectivos y por todos los medios necesarios, con el fin de llegar al conocimiento de los hechos y la sanción de los responsables. Habiendo incumplido también las obligaciones derivadas del derecho a la verdad, la lucha contra la impunidad o la reparación a las víctimas; así como el derecho de acceso a la información, al no respetar los requisitos que justifican las restricciones sobre el mismo, incluida la imposibilidad de negar la información en caso de violaciones a derechos humanos.

Estos incumplimientos se han basado principalmente en mecanismos que han permitido o favorecido la impunidad de las violaciones. Uno de ellos es el derivado de la inacción de las víctimas por su dificultad para acceder a la justicia, pero especialmente por el miedo a denunciar y las consecuencias que contra ellas tendría esa denuncia; imponiendo el silencio como forma de supervivencia en la frontera.

Otros se han derivado de la acción o inacción del Ejército ecuatoriano, presunto autor de las violaciones y/o de las instituciones gubernamentales de control. En el primer caso mediante la negativa a entregar información esencial para la investigación o la

obstrucción permanente a ese proceso; así como también mediante la amenaza y la represión contra las personas y comunidades denunciantes. Y en el segundo caso, desde la inacción de las entidades de control, como fiscales, jueces o Defensoría del Pueblo, por su falta de voluntad y capacidades e incluso miedo para realizar una investigación adecuada y con el objetivo de conocer la verdad y sancionar a los responsables.

Todos estos mecanismos han sido respaldados por la construcción desde el discurso estatal y de los medios de comunicación de un imaginario social sobre la Frontera Norte y las personas que viven en la misma; como un espacio de violencia, de grupos irregulares y de personas vinculadas a la guerra, que es necesario controlar y reprimir para evitar que ese mal se extienda al interior del país.

Mecanismos, que como se demuestra en esta tesis, no son nuevos sino que ya fueron descritas por la Comisión de la Verdad como prácticas existentes en Ecuador antes de 2008, sin que el gobierno haya hecho nada, al menos en frontera, por enfrentarlas y darles fin.

En el marco de este contexto, el caso de la muerte de Rubén Darío Santander es ejemplo que ilustra el funcionamiento de estos mecanismos de impunidad, y ello incluso pese a tratarse de un adolescente, donde las obligaciones estatales son aún más reforzadas. En este caso, el Ejército ha negado permanentemente la entrega a la Fiscalía de información sobre los participantes en el operativo militar, la realización del testimonio de un soldado testigo directo, y ha formulado acusaciones malintencionadas contra la familia de la víctima; obstruyendo la colaboración solicitada por el fiscal para realizar pruebas como las de criminalística, que hubieran contribuido a determinar el origen de la bala que mató a Rubén Darío y la posible responsabilidad del disparo. Asimismo, la Fiscalía no ha activado mecanismos idóneos para obligar al Ejército y al Ministerio de Defensa a prestar la colaboración necesaria; ni la capacidad para continuar la investigación del caso, habiendo permitido que en más de seis años la misma no avance en ninguna medida, y condenándolo a la impunidad.

Por ello, frente a la muerte de Rubén Darío, al contexto evidenciado en Frontera Norte y a los mecanismos de impunidad existentes; y retomando la pregunta de investigación de la presente tesis, se propone un proceso estratégico de exigibilidad, por el cual, a través de un caso emblemático, se luche contra la histórica realidad de la impunidad de las violaciones de derechos humanos en la Frontera Norte.

Para formular este proceso, se asume la visión del litigio estratégico, en la cual se articulan una serie de acciones de carácter social, político, educativas y

comunicacionales; que contribuyan a empoderar a la población de la zona, visibilizar la situación y acompañar el proceso jurídico, en un esfuerzo por transformar realidades de forma colectiva y sostenible.

Esta propuesta asume como la vía jurídica más adecuada para plantear el caso, la formulación de una denuncia ante el Sistema Interamericano, por considerar que se han agotado los recursos internos y por falta de efectividad de las vías nacionales; y dado que Ecuador ha incumplido con sus obligaciones internacionales, especialmente las previstas en la Convención Americana de Derechos Humanos y en los estándares desarrollados por la Corte IDH, respecto a investigación, derecho a la verdad, lucha contra la impunidad y acceso a la información.

Se busca de esta manera incidir para que la Corte IDH establezca la responsabilidad del Ecuador por el incumplimiento de sus obligaciones en el caso de Rubén Darío Santander; y que además realice un análisis de contexto, que evidencie que este caso no es aislado sino que está enmarcado en una situación más general de violaciones a derechos humanos en la Frontera Norte, sobre las que operan mecanismos de impunidad, visibilizando y señalando los mismos.

Adicionalmente, se busca que este proceso de litigio estratégico provoque cambios estructurales en la Frontera Norte, que incidan en un cese de las violaciones a derechos humanos y se avance en la modificación de estructuras institucionales, conductas, políticas, normas y procedimientos estatales a fin de lograr decisiones políticas y judiciales que garanticen la protección de derechos de la población de la zona; así como garantizar la investigación adecuada de todas las denuncias pendientes, el derecho a la verdad, la sanción de los responsables y la reparación de las víctimas y sus familiares.

En este caso además se persigue que la Corte IDH pueda desarrollar el estándar de ejecución arbitraria o extrajudicial, puesto que al uso excesivo no fundamentado de la fuerza por agentes del Estado establecido actualmente, se une en este caso la existencia de un contexto donde, pese a la ausencia de una voluntad expresa de privar de la vida, esta acción queda en la impunidad por los discursos y acciones o inacciones del Estado, junto al incumplimiento de sus obligaciones de prevención de los riesgos derivados del accionar del Ejército en la zona.

Bibliografía

- Albán, Juan Pablo. “Las graves violaciones a los derechos humanos como categoría jurídica”. *Pro Homine Blog de Derechos Humanos y Derecho Internacional*. Edición electrónica. <<https://prohomine.wordpress.com/2013/11/03/las-graves-violaciones-a-los-derechos-humanos-como-categoria-juridica/>>.
- Andrade, Pablo. “Diagnóstico de la frontera Ecuador –Colombia”. En *Comentario Internacional, Revista del Centro Andino de Estudios Internacionales*, No. 4, (2002).
- Beristáin, Carlos Martín. *Diálogos sobre la reparación. Qué reparar en los casos de violaciones de derechos humanos*. Quito: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 2009.
- . *Manual sobre perspectiva psicosocial en la investigación de derechos humanos*. Bilbao: HEGOA, 2010.
- Cadena Gómez, Juan Pablo. “Plan Colombia y dinámicas de seguridad Ecuador-Colombia”. En *Comentario Internacional, Revista del Centro Andino de Estudios Internacionales*, No.11 (2011).
- Carrión M., Fernando. “En el límite de la vida: la violencia fronteriza”. En Fernando Carrión, Diana Mejía y Johanna Espín Compiladores *Aproximaciones a la frontera*, 95-105. Quito: FLACSO Sede Ecuador, 2013.
- Comisión Colombiana de Juristas. “Principios internacionales sobre impunidad y reparaciones”. *Compilación de documentos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)*. Bogotá: Comisión Colombiana de Juristas, 2007.
- Comisión de la Seguridad Humana. *La Seguridad Humana Ahora*. Nueva York: Comisión de Seguridad Humana, 2003.
- Comisión de la Verdad del Ecuador. *Informe de la Comisión de la Verdad 2010, Sin verdad no hay Justicia*. Quito: Comisión de la Verdad, 2010.
- Comisión Internacional de Juristas. *Impunidad y Graves Violaciones de Derechos Humanos, Guía para Profesionales No. 3*. Ginebra: Comisión Internacional de Juristas, 2008.
- Correa Montoya, Lucas. “Litigio de alto impacto: Estrategias alternativas para enseñar y ejercer el Derecho”. *Revista Opinión Jurídica*, vol. 7, núm. 14, (julio-diciembre, 2008).

- Espín M, Johanna. “La coordinación interinstitucional: Un aporte decisivo en la relación Estado y poblaciones fronterizas. Diálogo con Javier Ponce”. En Fernando Carrión, Diana Mejía y Johanna Espín Compiladores *Aproximaciones a la frontera*, 138-140. Quito: FLACSO Sede Ecuador, 2013.
- . “La problemática de la violencia y respeto a la vida en la frontera norte”. En Fernando Carrión, Diana Mejía y Johanna Espín Compiladores *Aproximaciones a la frontera*, 37-50. Quito: FLACSO Sede Ecuador, 2013.
- Espinosa, Roque. “Anotaciones sobre los discursos en torno a la frontera colombo-ecuatoriana”. En *Comentario Internacional, Revista del Centro Andino de Estudios Internacionales*, No. 6 (2006).
- González, Laura. “Balance de los estudios sobre violencia y seguridad ciudadana en la frontera colombo-ecuatoriana”. En Fernando Carrión, Diana Mejía y Johanna Espín Compiladores *Aproximaciones a la frontera*, 149-163. Quito: FLACSO Sede Ecuador, 2013.
- . *Fronteras en el Limbo. El plan Colombia en el Ecuador*. Quito: Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH, 2008.
- . *Peones en un ajedrez militar: los habitantes de la frontera norte*. Quito: Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH, 2011.
- Harb Muñoz, Lourdes Gisella. “La construcción mediática del otro. El caso de la Frontera Norte. Tesis de maestría, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2004
- López A, Adrián. “*La soberanía y sus fronteras: frontera norte y estado ecuatoriano*”. Tesis de maestría, FLACSO Sede Ecuador, 2010.
- Mejía M, Diana y Gómez, Andrés. “Acciones del Municipio de Lago Agrio frente al desarrollo económico y la inseguridad. Diálogo con Yofre Poma”. En Fernando Carrión, Diana Mejía y Johanna Espín Compiladores *Aproximaciones a la frontera*, 231-233. Quito: FLACSO Sede Ecuador, 2013.
- Moreano Urigüen, Hernán. *Colombia y sus vecinos frente al conflicto armado*. Quito: Ediciones Abya-Yala, 2005.
- Nikken, Pedro. “La protección de los derechos humanos: haciendo efectiva la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales”. *Revista IIDH/ Instituto Interamericano de Derechos Humanos*, No. 52 (Julio-diciembre 2010).
- Oficina de Derechos Humanos de la Federación de Mujeres de Sucumbíos. “Informe de evidencias sobre comportamiento de las Fuerzas Armadas en las comunidades

- ecuatorianas de frontera”. *Archivo de la Federación de Mujeres de Sucumbíos 2013*. 20 de septiembre de 2013.
- . “Activación de alerta temprana. Sobre la situación de derechos humanos en las comunidades de la ribera del río San Miguel, cantón Lago Agrio, y río Putumayo, cantón Putumayo, provincia de Sucumbíos”. *Archivo de la Federación de Mujeres de Sucumbíos 2013*. 20 de agosto de 2013
- Rodríguez Oramas, Andrea Lucía. “Factores de Impunidad en ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la Fuerza Pública en el periodo de la seguridad democrática”. Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia, 2014.
- Tayler, Wilder. “La problemática de la impunidad y su tratamiento en las Naciones Unidas –Notas para la reflexión–” En *Revista IIDH/Instituto Interamericano de Derechos Humanos IIDH*, Volumen 24, (julio-diciembre 1996).
- Universidad Andina Simón Bolívar. “Exigibilidad estratégica en Derechos Humanos”. *Revista Electrónica del Programa Andino de Derechos Humanos [PADH] Aportes Andinos* No. 35 (diciembre 2014).
- Vallejo Vera, Sebastián. “Angostura, 30-S y la militarización de la seguridad interna”. Tesis de maestría, Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador, 2014.
- Vásconez, Belén. *La construcción social del miedo. Caso: Sucumbíos*. Quito: UASB, Abya-Yala, Corporación Editora Nacional, 2005.

Documentos del Sistema de Naciones Unidas

- Organización de las Naciones Unidas. “Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre: Uruguay”. CCPR/C/79/Add. 19. 5 de mayo de 1993
- . “Manual sobre la Prevención e investigación eficaces de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias de Naciones Unidas”. Doc. E/ST/CSDHA/.12. 1991.
- . “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”. Resolución 60/147. 16 de diciembre 2005.
- . Comité de Derechos Humanos. “Observación General No. 31, Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto”. CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13. 29 de marzo de 2004
- . Comité de Derechos Humanos. “Observación general N° 34, Artículo 19. Libertad de opinión y libertad de expresión”. CCPR/C/GC/34. 21 de julio de 2011.

- . Consejo de Derechos Humanos. “Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston, acerca de su misión al Ecuador (5 a 15 de julio de 2010)”. A/HRC/17/28/Add.2. 9 de mayo de 2011
- . Consejo Económico y Social. “Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”. Resolución 1989/65. 24 de mayo de 1989
- . Comisión de Derechos Humanos. “Conjunto de Principios actualizado para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”. E/CN.4/2005/102/Add.1. 8 de febrero de 2005.
- . Comisión de Derechos Humanos. “Estudio relativo al derecho de restitución, indemnización y rehabilitación a las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos y las libertades fundamentales”. E/CN.4/Sub.2/1992/8. 2 de julio de 1993.

Documentos Sistema Interamericano

- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Derecho a la verdad en las Américas”. *Comisión Interamericana de Derechos Humanos*, OEA/Ser.L/V/II.152, Doc. 2, 13 agosto 2014.
- . “Informe 55/97, Caso 11.137: Juan Carlos Abella y otros (Argentina)”. *Comisión Interamericana de Derechos Humanos*. 18 de noviembre de 1997.
 - . “Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2010. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión”. *Comisión Interamericana de Derechos Humanos*. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 5. 7 marzo 2011.
 - . “Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2009, Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión”. *Comisión Interamericana de Derechos Humanos*, OEA/Ser.L/V/II.134 Doc. 5 rev. 1. 25 febrero 2009.
 - . “Informe No. 37/00, Caso 11.481, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez”. *Comisión Interamericana de Derechos Humanos*. 13 de abril de 2000.
 - . “Relatoría Especial para la Libertad de Expresión: El derecho de acceso a la información en el marco jurídico interamericano”. OEA/Ser.L/V/II. CIDH/RELE/INF. *Comisión Interamericana de Derechos Humanos*. 20117 marzo 2011.

- Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia, Sentencia de 5 de julio de 2004 (Fondo, Reparaciones y Costas)”. Serie C No. 109. *Corte Interamericana de Derechos Humanos*. 2004. <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_109_esp.pdf>
- . “Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala, sentencia de 22 de febrero de 2002, (Reparaciones y costas)”. Serie C, No. 91. *Corte Interamericana de Derechos Humanos*. 2002. <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_91_esp.pdf>
- . “Caso Claude Reyes y otros vs. Chile, Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Fondo, Reparaciones y Costas”. Serie C No. 151. *Corte Interamericana de Derechos Humanos*. 2006. <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf>
- . “Caso de la Masacre de La Rochela vs. Colombia, Sentencia de 11 de Mayo de 2007, (Fondo, Reparaciones y Costas)”. Serie C No. 163. *Corte Interamericana de Derechos Humanos*. 2007. <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_163_esp.pdf>
- . “Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia, Sentencia de 1 de julio de 2006”. Serie C No. 148. *Corte Interamericana de Derechos Humanos* 2006. <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_148_esp.pdf>
- . “Caso del Caracazo vs. Venezuela, sentencia de 29 de agosto de 2002, (Reparaciones y Costas)”. Serie C 95. *Corte Interamericana de Derechos Humanos*. 2002. <[corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_95_esp.pdf](http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_95_esp.pdf)>
- . “Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay, Sentencia de 22 de septiembre de 2006, (Fondo, Reparaciones y Costas)”. Serie C No. 153. *Corte Interamericana de Derechos Humanos*. 2006. <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_153_esp.pdf>.
- . “Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil, sentencia de 24 de noviembre de 2010 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)”. Serie C No. 219. *Corte Interamericana de Derechos Humanos*. 2010. <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_esp.pdf>
- . “Caso Loayza Tamayo vs. Perú, Sentencia (Reparaciones y Costas) de 27 de noviembre de 1998”. Serie C No 42. *Corte Interamericana de Derechos Humanos*. 1998. <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_42_esp.pdf>

- . “Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala, Sentencia de 25 de noviembre de 2003, Fondo, Reparaciones y Costas”. Serie C No. 101. *Corte Interamericana de Derechos Humanos*. 2003.
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_101_esp.pdf>
- . “Caso Nicholas Blake vs. Guatemala, Sentencia de 22 de enero de 1999 (Reparaciones y Costas)”. Serie C No. 48. *Corte Interamericana de Derechos Humanos*. 2009.
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_48_esp.pdf>.
- . “Caso Tibi vs Ecuador, Sentencia de 07 de septiembre de 2004 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)”. Serie C No. 114. *Corte Interamericana de Derechos Humanos*. 2004.
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_114_esp.pdf>
- . “Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, Sentencia de 21 de julio de 1989, (Indemnización Compensatoria)”. Serie C No. 7. *Corte Interamericana de Derechos Humanos*. 1989.
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_07_esp.pdf>
- . “Caso Barrios Altos vs. Perú, Sentencia de 14 de marzo de 2001 (Fondo)”. Serie C No. 75. *Corte Interamericana de Derechos Humanos*. 2001.
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_75_esp.pdf>

Sentencias, resoluciones y trámites de países

- Colombia. Corte Constitucional. “Sentencia C-491/07”, *Expediente D-6583*, 27 de junio de 2007. <<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/C-491-07.htm>>.
- Ecuador. Fiscalía Provincial de Sucumbíos. “Indagación Previa 307 del 2011”, *Fiscalía Provincial de Sucumbíos*, 2011
- . Corte Constitucional. “Sentencia”. *Caso No. 114-14-SEP-CC*. 06 de agosto del 2014.
<<https://www.corteconstitucional.gob.ec/sentencias/relatoria/relatoria/fichas/114-14-SEP-CC.pdf>>
- . Defensoría del Pueblo. “Resolución”. *Caso No. 03-AP-2008*. 13 de junio del 2008.
- México. Suprema Corte de Justicia. “Registro No. 170722”, *Tesis Jurisprudencial Número 45 de 2007*. 15 de enero de 2007.

Normas internacionales

Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969)

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969)

Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966)

Normas del Ecuador

Constitución de la República del Ecuador. *Registro Oficial 449*. 20 de octubre de 2008.

Ecuador. “Código Orgánico Integral Penal”. *Tercer Suplemento, Registro Oficial No. 180*. 10 de febrero de 2014.

Ecuador. “Ley de Seguridad Pública y del Estado”. *Registro Oficial Suplemento 35*. 28 de septiembre de 2009.

———. “Ley Orgánica de transparencia y acceso a la información pública”. *Registro Oficial Suplemento 337*. 18 de mayo de 2004.

———. Ministerio de Coordinación de la Seguridad. “Plan Nacional de Seguridad Integral 2010-2014”. *Ministerio de Coordinación de la Seguridad*. 2010

———. Ministerio de Defensa Nacional. “Libro Blanco de la Defensa Nacional”. *Ministerio de Defensa Nacional*. 2006.

———. Ministerio de Defensa Nacional, “Programa de acción binacional para fortalecer la seguridad fronteriza entre los ministerios de defensa de Ecuador y Colombia”. *Registro Oficial 525*. 01 de septiembre de 2011.

———. Ministerio de Defensa Nacional. “Protocolos para el procesamiento, trámite y seguimiento de expedientes en materia de derechos humanos y de género en las fuerzas armadas del Ecuador”. *Registro Oficial Suplemento 716*. 4 de junio de 2012.

———. Ministerio del Ambiente. “Acuerdo Ministerial 080”. *Registro Oficial 239*. 20 de julio de 2010

———. Presidencia de la República. “Decreto Ejecutivo 433”. *Registro Oficial Suplemento 114*. 27 de junio de 2007

———. Presidencia de la República. “Decreto Ejecutivo 640”. *Registro Oficial No. 134*. 3 de agosto de 2003.

Anexos

SISTEMATIZACION DE ENTREVISTAS REALIZADAS EN EL MARCO DE ESTA TESIS

La metodología de la realización de estas entrevistas fue semiabierto a partir de 3 preguntas fundamentales: evolución del comportamiento de los militares en la frontera de Sucumbíos antes de 2000, entre 2000 y 2008, y después del 2008; las razones de la impunidad por las violaciones a derechos humanos; y la inversión del Estado en frontera. Sobre ellos giró la entrevista. Recogiéndose a continuación una sistematización del contenido más relevante de las mismas.

Adolfo Maldonado, Clínica Ambiental, entrevista realizada por Jorge Acero en Nueva Loja, el 12 de septiembre de 2017.

Antes del 2000 la zona de frontera era difícil por asaltos, asesinatos... pero no había miedo, se sabía quién es quién y porque podía haber problemas.

No había ninguna presencia militar en frontera. Después del 2000 no se sabe quién es quién, porque hay más grupos en frontera y ese cambio genera incertidumbre, miedo y pérdida de la unión que había antes entre la gente.

Las FFAA entre 2000 y 2006 son colaborador pasivo de los colombianos, niegan que haya incursiones, niega que pasen avionetas de fumiga, aceptan la política colombiana

Después de 2007-2008 reproducen lo mismo que hacían los colombianos, que ya no vienen, porque lo hace el Ecuador y el gobierno de Ecuador se ve traicionado por las FARC de que tengan esa permanencia en angostura, y se vuelve en su contra.

Tras el 2007 el ejército ecuatoriano hace suya la guerra, se asentaban en escuelas como protección, sigue así tras 2008 y se aleja de la población porque ya no tiene su colaboración.

De 2008 a 2010 sigue haciendo lo mismo rol de tapón en frontera y luego de colaboración.

Lo que ocurre en la frontera a población civil puede obedecer a que se envía un mensaje al mundo de que alguien tiene que pagar y que se vea que hacen algo.

Cuando quitas mucho de lo básico como gas, gasolina, alimentos, incluso cemento vas despojando de la vida cotidiana, vas cambiando la vida de la gente, metiendo con ello el miedo, que ha sido construido consciente y voluntariamente por el ejército.

De igual forma cuando se repartían cuadernos en escuelas entre 2006-2007 contra las FARC, ensalzando al ejército, buscas reforzar el imaginario de quien son los malos y a quien temer. Aprovechando incluso para usar a los hijos.

Sobre impunidad, en el informe de 2006 sobre caso Sucumbíos de comisión de la verdad, los mismos fiscales expresaban que se sienten amenazados.

No avanza la denuncia por miedo. Por ejemplo, un médico que trabajaba acá sobre el tema de fumigaciones, quiso organizar un evento de información pero recibió una llamada ordenándole que desistiera y demostrándole que le estaban escuchando sus llamadas

Ejemplo. En el 2016 en la audiencia de fumigas en Lago de una acción de protección, como observadores llegaron funcionarios de ministerios claramente identificados y acompañados por policías de Goes muy armados. Demostración de fuerza y presión al juez, que tienen miedo a posibles represalias y deciden evitar meterse en problemas.

Además las instituciones estatales deben ir en consonancia con la estrategia de seguridad, lo que ayudaría a explicar la inoperancia de Fiscalía y Dpe.

La ausencia del Estado en frontera, hay una deliberada ausencia por el supuesto riesgo que corren los funcionarios que irían, además las brigadas que existen son o resguardadas muchas veces por militares o incluso organizadas por ellos, como las binacionales que se hacen periódicamente en el putumayo entre ambos ejércitos.

Los mismos militares dicen que es riesgoso ir a frontera

Construcción del miedo: 1. Ponen el destacamento en la comunidad o cera (conciencia) generan la amenaza; 2. Entran en la casa (emocional), atacan a la familia, su estabilidad, el crear espíritu de obediencia, dejar de protestar; 3. Entran al cuerpo: torturas, detenciones (instinto de supervivencia), la persona se queda sola, sálvese quien pueda

Maritza Flores, Pastoral Fronteriza de la Iglesia de San Miguel de Sucumbíos, entrevista realizada por Jorge Acero en Nueva Loja, el 12 de septiembre de 2017.

Llegó en 2008, desde ahí a 2010 pasaban más en el lado colombiano; en el lado ecuatoriano no se notaba el miedo, pero había controles militares en la vía como en la Cooper para el san miguel, donde había fuertes requisas e incluso amenazas especialmente a colombianos y refugiados. De igual forma se notaba en el Putumayo con refuerce de controles e investigación sobre extranjeros, y miembros del ejército ecuatoriano realizan requisas de alimentos en las canoas con la excusa de que pudieran llevarlos para grupos armados.

Se incrementaron los patrullajes en comunidades, preguntando, quien paso, los vieron, les vendieron y advertencias como vd no debe tratar con ellos...creo más recelo entre la gente que se ve sometida a presión desde 2 fuerzas. Es como una vigilancia que les expone como posibles informantes

Todos son sospechosos en frontera, incluso al Padre Paco en 2009, bañándose en el San Miguel, en una comunidad, le obligaron los militares a salir del rio y le escoltan para que le enseñe sus documentos y le toman foto de ellos.

Se fue generando temor y desconfianza porque además los ecuatorianos aprovechan si no hay nadie para entrar en las casas, requisar sin autorización, voltear todo sin permiso y sin orden de ningún tipo; y si se les reclama amenazan o niegan su intervención. Y dicen que el denunciante es un mentiroso y que el ejército es una institución sin tacha y que se enorgullece de defender la patria.

Se pide como exigencia, y así hasta 2015, sin respeto en la gran mayoría de los casos.

Y hay acuerdo con los colombianos, en el rio todos los botes se paran en los barcos colombianos para identificar, se les reclama y responden que es un acuerdo con los ecuatorianos

La población en frontera ha tenido vínculos con las Farc, muy posible, pero no significa en ningún momento que sean parte de ellos, les venden si van a comprar, es cuestión de supervivencia.

Los militares nunca compran, se llevan o piden pero no pagan

En el Putumayo el 80% de la gente es colombiana

En 2011-2012 -acuerdo Puerto el Carmen-hay patrullajes en Pto el Carmen y putumayo (El Palmar) hay denuncias de patrullajes con algunos encapuchados, algunos con deje colombiano según cuenta la gente, incluso con zapatos que los diferencian de los ecuatorianos. Incluso si militares colombianos entraban Ecuador van escoltados de los ecuatorianos (por ejemplo a comprar), muy visible en 2014

Utilizaron varios mecanismos para asustar: censar a la población, afirmando que los colombianos no tienen derecho en Ecuador, generando rumores o amenazas como a los comerciantes de frontera, si no tienes factura ecuatoriana del producto te quito, te cerraré local si no está legal (cuando ninguna autoridad que permita la legalización llega y cuando para hacerlo tendrían que usar de 1 a 3 días y los costos que eso supone)

La pregunta es si esto es algo personal de los militares por su preparación para la guerra o es una dirección establecida o estrategia institucional

Parece que desde 2014-2015 hay abusos más puntuales y menos graves quizás por la negociación de acuerdos de paz, quizás las Farc presionaban menos y el ejército se relajó

Denuncia. La gente no quiere por no exponerse, por no represalias, las instituciones como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo se encuentran lejanas de las comunidades de frontera, centradas mayoritariamente en Nueva Loja y de comunicación donde podrían denunciar. Hay barreras al acceso a la justicia: lejanía, obligación de mantener seguimiento, no querer recibir la denuncia (caso de don Garrido 2015 en S Martin, como eran militares finalmente no se la recibieron en fiscalía porque al ser militares era un tema delicado), y un grado muy bajo de confiabilidad puesto que no se conoce el avance de ninguna denuncia, lo que genera frustración cuando se pone una denuncia

En el mismo caso de don garrido luego de la denuncia en Dpe los militares pasaron por su casa interesándose por la denuncia y pidiendo al señor que fuera hasta el batallón para hablar con el coronel, al margen del proceso existente en Dpe

La Fiscalía o Dpe no quieren actuar porque prefieren no meterse en problemas, no quieren exponerse a encontrar o tener que mostrar la verdad, una especie de falso patriotismo. Y porque además el ejército ha respondido ante alguna queja en la Defensoría, que el denunciante es un mentiroso y que el ejército es una institución sin tacha y que se enorgullece de defender la patria.

Sobre desarrollo ha habido algunos intentos puntuales, pero debe ser algo continuado y no lo ha sido. Un ejemplo de la falta de criterio es la compensación de 15 millones en 2014 por fumigas, se hizo un listado de posibles afectados (elaborado desde un escritorio sin las más mínimas contrastaciones) y se repartieron 3.000 usd por familia, cuando varias organizaciones pedían iniciar procesos participativos para crear planes de desarrollo en que esto fuera un aporte, conjunto a los del Estado, no hay acompañamiento, inversión,

También porque es zona de interés por recursos naturales, sísmica en 2014 y quizás no interese invertir para mejorar la calidad de vida y que luego protesten más

Las brigadas que hay, salud, o registro civil, no cumplen con las necesidades de la gente ni se adecuan a ellas.

Fanny Pilco, Comité de Derechos Humanos de Sucumbíos, entrevista realizada por Jorge Acero en Nueva Loja, el 15 de septiembre de 2017.

Antes del 2000 la frontera era una línea imaginaria, eran familias e intercambio conjunto, por ejemplo la documentación se sacaba en Ecuador o Colombia de acuerdo a lo más cercano, igual en salud o educación

No había presencia militar en frontera

Después del 2000 hay ingresos de militares colombianos al Ecuador, las pirañas se cruzaban para vigilar, había patrullajes en suelo ecuatoriano. Por ejemplo, obús caído en Puerto Nuevo, que destruyó parte de las instalaciones de la Putumayo; también hubo muertos en Puerto Nuevo por parte del ejército colombiano.

Tras 2008, se hicieron más evidentes los ingresos de ecuatorianos en las comunidades, en escuelas. El Plan Ecuador fue una esperanza para la gente. Pero hubo allanamientos y se denunciaba a las personas, como el listado de los 430

La gente sobre esto pensaba que era para que se fueran, meterles miedo; un especial control a las personas colombianas asentadas, no podían comprar gas, no podían transitar libremente

Impunidad: la gente esperaba respuestas ante las denuncias, pero encontraban que desde el Estado no se cree lo que la gente dice. La Dpe se reúne con funcionarios que les dicen que no vayan a frontera, esto se vio especialmente entre 2006 y 2008; hasta ahora que ya no se resuelve

Hay persecución, seguimiento, amenazas, como la sobrina de Don Molano, de Lago se fue a Shushufindi por el seguimiento y luego se mudó otra vez

También hay imputación de delitos falsos, como en gasolina o alimentación (uso para la guerrilla o para venderles)

La persecución es más evidente contra la gente que se mueve, que intenta organizar o protestar, así sale la lista de los 430

Sobre desarrollo, el Estado tiene miedo a entrar; si han entrado, hace diagnóstico pero ya no hay respuesta. Así la gobernadora –Nancy Morocho– entró antes de 2014 con ministerios, Salud, Miduvi y les dijo que actuaran pero no pasó nada. Y siempre quieren que los militares les escolten

María Pantoja, ex presidenta del recinto San Martín en la ribera del río San Miguel, entrevista realizada por Jorge Acero en Nueva Loja, el 10 de septiembre de 2017.

Antes de 2000 era muy raro ver a los militares ecuatorianos, tampoco a autoridades civiles. Pero sí había muertos. En Barranca hubo un destacamento militar, que abusaban de la gente, requisas abusivas, fue destruido y mataron a algunos militares. La reacción fue de los militares contra la gente y alguna aún está presa.

Hasta el 86 no había grupos en San Miguel, ahí apareció el EPL y Farc y los paramilitares, los macetos, que ya estaban desde antes (y estos mataban gente, dedicados a la coca). Tenían un laboratorio de cristalización por el Azul y cuando alguien quería irse y le pagaban, no le dejaban llegar a casa, lo mataban y recuperaban la plata. Así estuvieron hasta el 99-2000. Pero desde el 95 hubo un conflicto entre macetos y Farc por lucha del territorio.

En el 98-99 las Farc controlaron parte del territorio y entraron en algunas comunidades, cuando les permitían, ofreciendo justicia y control. Eran tranquilos, compraban productos a la gente (para ganarse a la gente) y ofrecían orden y justicia, hasta hace poco así fue.

El ejército colombiano es visible en el río a partir del 2000, iban con paramilitares y se dieron algunas masacres. Entre 2001-2002 empezaron a entrar a territorio ecuatoriano buscando personas o perseguir a las Farc. En 2006 se llevaron a 3 personas de la comunidad y violaron a la esposa del dueño de la casa donde estaban y la obligaron a irse con su familia y esposo del lugar (cerca de Barranca).

En esa situación, 2002-2003 daba miedo la zona porque había mucha presencia de las Farc y podían ser acusados de colaborar con ellas (las Farc venían a protegerse)

En 2006-2007 hubo una llegada de militares colombianos cerca de Barranca, se decía que a tomar la comunidad, pero se encontraron con las Farc antes y se dio un enfrentamiento en tierra ecuatoriana.

Y los ecuatorianos empezaron a hacerse presentes en algunas zonas de selva a partir de 2002, pero a algunas comunidades no se les vio hasta 2006

Después de 2007 no se escuchó más entradas de ejército colombiano al Ecuador en el San Miguel, en alguna comunidad si se escuchó alguna todavía

Después de 2008-2009 fue más evidente la presencia ecuatoriana, hacían allanamientos, robos, golpeaban y ataban gente. Les trataban mal, era exigencia en requisas, para alimentos... En su casa entraron con ella y la obligaron a sentarse y mientras uno le preguntaba el otro le volteaba la casa

Se podía acusar falsamente a las personas, plantándoles cosas y deteniéndolas, hay exigencia de resultados

A partir de 2013 hubo menos presencia de Farc, quizás porque la gente la respetaba menos, puesto que habían hecho cosas en contra de la gente e injusticias, no les respetaban tanto como antes

Impunidad: No se denuncia por la lejanía y la falta de vías, además porque tocaba volver e insistir para que avance la investigación. A su comunidad nunca ha llegado ni fiscalía ni defensoría del pueblo. Junto a ello hay desconocimiento de la gente de la posibilidad de denunciar y miedo ante los efectos de la denuncia. Así, en el caso de denuncia de D Garrido en 2015 ante la Dpe por entrada ilegal a su casa, unos días después pasaron militares para preguntar acerca de la denuncia y decirle que fuera por el batallón. O en el 2008 ante una denuncia, los militares le dijeron a la persona que en algún rato tendría que pasar por santa Cecilia, donde hay un batallón y allí le verían.

Nunca ha visto ninguna compensación dada por los daños, nunca pagaron nada los militares por gallinas que se llevaron o por pedir que prepararan comida

Sobre desarrollo: El Magap dio un proyecto de café, los insumos eran glifosato (lo mismo que les había afectado con las fumigas)... no hay un proyecto aterrizado de acuerdo a las necesidades de la gente, sino desde escritorio. En salud o educación algo ha mejorado, poco respecto a necesidades (subcentro de Santa Rosa hay 2 médicos desde hace pocos años), pero no por iniciativa del Estado, sino por la presión de la gente y la exigencia. Hay brigadas en el río pero con falencias y no ajustadas a las necesidades (se pide odontólogo pero no suele ir)

Julio González, ex diputado del Congreso de la República y ex secretario técnico de Plan Ecuador 2010-2011, entrevista realizada por Jorge Acero en Nueva Loja, el 8 de septiembre de 2017.

Ha existido un abandono histórico de la frontera, incluso los militares llegaban a dirimir cuestiones de justicia.

Antes del 2000 había respeto entre Farc y militares colombianos al territorio ecuatoriano. Con el Plan Colombia se sienten derivaciones del conflicto, no había una institucionalidad capaz de responder, facilitando al ejército intervenir. No había donde acudir en caso de denuncias. Muchas poblaciones del Ecuador vivían hacia Colombia, por la falta de servicios, comunicaciones.

Tras el 95 y la paz con Perú se empieza a ver hacia frontera norte como amenaza geopolítica para la región.

Las relaciones entre Estados, hasta el gobierno de Lucio, incluido, hubo alineaciones con la política de USA y de Colombia; así incluso por iniciativa de militares se intentó establecer una franja de seguridad en frontera de aproximadamente 40 kms, donde se planteaba que solo viviera gente ecuatoriana e incrementar los controles (2004), no paso en el Congreso

Al llegar Correa, se ve un cambio hacia política de seguridad más integral, con visión de desarrollo social en frontera. Así se crea el Plan Ecuador enmarcado en el Plan del Buen Vivir, intentando integrar la frontera hacia el Estado, con carreteras, comunicaciones, fortaleciendo institucionalidad.

Esta visión duró hasta el 2010, principios del 2011, donde se ve un cambio de visión, se da el Ministerio de Coordinación a militares (vicealmirante Arellano –dic 2010) y Plan Ecuador a contraalmirante Zurita –feb 2011-, militarizando el plan de desarrollo

La posición militar ha sido permanente de sacar a los colombianos de la frontera frente a la visión civil de facilitar la regularización de las personas. Finalmente a partir de 2011 la primera posición ganó, quizás para aliarse más a las políticas de Santos y profundizando la cooperación militar.

En desarrollo, antes de Correa ha existido poca inversión y poca voluntad de invertir, vías, comunicaciones, con Plan Ecuador algo se mejoró pero totalmente insuficiente (educación, vialidad, servicio eléctrico)

En general, al Estado como a otros, no le interesa invertir en frontera, también por la existencia de recursos naturales, mejor no mejorar a la gente que puede oponerse

Impunidad, fiscalía o DPE no resuelven o investigan porque va contra el interés del Estado, no se pueden o quieren crear precedentes que permitan dudar sobre lo que hacen los militares en frontera o abrir la puerta para conocer la verdad de lo que pasa

Luis Ángel Saavedra, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH, entrevista realizada por Jorge Acero en Nueva Loja, el 15 de septiembre de 2017.

Habría que hacer un contexto de la frontera antes del 2000 y de lo que significa una frontera. Tiene una dinámica viva y que está marcada por los actores locales y no por el estado. Los estados suelen estar ausentes de las fronteras y se generan dinámicas en que los actores generan la normativa, controles y formas de vida. Y esto pasaba en la frontera ecuatoriana, había alianzas implícitas y se habían hecho a ellas

La presencia de grupos irregulares es histórica, tenían ciertos cánones de convivencia con la población local y con las ffaa ecuatorianas, acuerdo de respeto mutuo y de no injerencia en asuntos de otro estado

La primera ruptura a esta dinámica es cuando el ejército y policía intentan controlar flujo de contrabando para las Farc: alimentos, municiones, respondiendo a la acusación de que se aprovisiona a las Farc. Estas envían avisos sobre acuerdo implícito que militares ecuatorianos están violando, intentado volver al status quo anterior. La respuesta fue de mayor control (emboscada -que deriva en el caso putumayo)

Se empieza a generar un imaginario no sólo en frontera, también la colectividad y opinión pública nacional y se mira hacia la frontera preguntando qué está pasando, con un sesgo de seguridad y de violencia. Los actores locales se miran como violentos, aliados a las Farc

Después viene una lucha por el control territorial, cuando el gobierno colombiano intenta recuperar el territorio con militares y paramilitares. Aquí surgen enfrentamientos violentos, desplazamientos hacia Ecuador, masacres en comunidades de frontera. Y acá los generadores de opinión construyen un imaginario violento de frontera, cómo dando prioridad a las historias de violencia, no a las historias de las personas (crónicas de asesinatos, de enfrentamientos). La frontera se ve como una guerra de alta intensidad y peligrosa

Este escenario genera a su vez la necesidad de implementar un sistema de seguridad para controlar.

El plan Colombia con USA tiene el objetivo de erradicar la guerrilla, por ello la fumiga o erradicación se da en los sectores de guerrilla, no en los de los paracos; buscando acabar con su fuente de financiamiento y luego con ellos.

Imaginario: se ve la priorización de noticias con asaltos con colombianos y no con ecuatorianos ante la profundización de violencia con plan Colombia, fortaleciendo el imaginario sobre colombianos...se ve a los campesinos como aliados de las Farc (caso Jiménez, caso taruka), todos los habitantes de frontera son milicianos o colaboradores, lo que da al ejército carta blanca para violaciones de ddhh de las personas

Cuando llega Correa se presenta como gobierno de defensa del territorio y de política independiente a la política USA y control de drogas. Así da el indulto a las mulas. En la posesión

habla de política imperialista y vasallos como Uribe y dice que va a eliminar la base de manta (para el 2006 los movim sociales lograron que el 65% esté contra Manta, para 2006 se llega al 75% en Manabí), transformándose en un tema electoral asumido por muchos candidatos el quitarlo.

Tras Angostura, se presenta como nacionalista, indignado que cuestiona a Colombia y a USA por el apoyo y empieza a develar lo que realmente pasaba en frontera, control gringo a través de medios tecnológicos. Parece que iba a mirar la frontera desde otra perspectiva, seguridad para sus habitantes, seguridad humana

Pero el discurso se va perdiendo y se transforma en una profundización de la militarización, donde aparece el acuerdo con Colombia adscribiéndose a la política colombiana, hay activación de consejos de frontera y minucioso control de la gente local, cortar los sistemas de aprovisionamiento de las Farc. Y los militares tienen carta blanca para violar ddhh

El sistema judicial ha actuado conforme a los momentos políticos, que son más de acercamiento a la política colombiana y al apoyo de los militares, puesto que necesitas su apoyo, las acusaciones no debían prosperar. Y no se va a llegar, mientras tengamos un ejército que garantice la estabilidad democrática

Que hayamos cambiado la Constitución no significa que el ejército haya dejado de seguir haciendo su rol de garante

El intervencionismo generado en la década hace imposible independencia de los actores de control. Para eludir el juzgamiento, se identifica la materialidad del delito pero no se puede identificar el autor y por tanto da sobreseimiento

El Estado permite no visibilizar las violaciones. Angostura, 1 ecuatoriano muerto, las investigaciones se desarrollan de acuerdo al momento político, el acuerdo implicó la congelación del proceso y la apertura de un proceso contra una de las denunciadas (activar o no uno o la otra dependiendo del momento político)

La voluntad de Plan Ecuador existió, pero el fracaso se generó por la visión sesgada de la realidad, los militares necesitaban mantenerse al mando y por ello necesitaban escenarios de violencia, mantener el imaginario. Se mantiene el interés en ver al frontera sólo desde lo conflictiva que puede ser, lo violenta, teniendo el ejército un interés especial en mostrar esa supuesta cara de la frontera para facilitar su accionar y la impunidad por los abusos que cometen en la misma, en aras de salvaguardar la paz y la soberanía del territorio.

El fracaso se basa en la acción militar o su interés, no daban las facilidades para que las instituciones puedan ingresar (los milicos dicen que no entre porque es peligrosa y los funcionarios no entran), los mismos militares tienen en su mano el cambio de imaginario. O que los funcionarios pierdan el miedo a entrar

Laura Martín, Federación de Mujeres de Sucumbíos, entrevista realizada por Jorge Acero en Nueva Loja, el 12 de septiembre de 2017.

Cuando llegue en el 96 se percibía a los militares en el putumayo, había controles pero estaban ociosos, las comunidades los veían como útiles, tenían relación con ellos y aportaban en trabajos comunitarios o asuntos civiles, ante la ausencia total del Estado.

Esto cambió radicalmente en el 2000, el plan Colombia supone un cambio en el comportamiento sin que la gente conozca porqué, los militares dejan de mirar hacia otro lado con la guerrilla y aportar a la comunidad para asumir un rol de poder, demostrando el control que el Estado les ha asignado, y hay una ruptura con la población civil, sin nadie a quien poder denunciar por su accionar.

Y van ejerciendo un rol más activo en el conflicto, aunque no entraban en la guerra, sí controlan más a la gente, se va construyendo el miedo a los militares, alguien de quien hay que defenderse. A partir del 2006-2007 se ve más colaboración entre los 2 ejércitos, encuentros, patrullajes en común.

Impunidad: la gente no cree en un Estado al que nunca ha visto, que le ha olvidado, quienes imponen la justicia en las comunidades son los grupos que están presentes en el territorio y a quien se les pide que intervengan

La fiscalía y la Dpe son instituciones del Estado que tienen el imaginario que se ha desarrollado de que la gente en frontera son terroristas o colaboradores frente a los militares que se juegan la vida por defender al país y la frontera. Ello lleva a que el Estado les absuelva o perdone cualquier abuso o error que cometan en nombre del gran servicio que prestan. Debe haber un pacto entre el ejército y el Estado para favorecer el control del territorio.

La población es lo menos importante frente a los graves problemas que se dice existen en la zona, son daños colaterales o un mal menor los abusos y violaciones a derechos.

Desarrollo: hubo un intento con el Plan Ecuador, idea bonita que ayudo a posicionar la imagen de cambio de Correa, las comunidades se ilusionaron, empezaron a sentir que el Estado existía y preocupaba. Pero la entrega a los militares en 2012 del Plan acabó con las esperanzas, no se les volvió a ver en la frontera, se acabaron proyectos como el de comunicación (teléfono) o agua de los que se había hablado. Fue una demostración que lo importante es la seguridad militar. Y el desarrollo social no está en la mirada del ejército, no quieren más población en frontera, no quieren empoderamiento de las personas.

Karen Nayeli Guerrón, Madre de Rubén Darío Santander Guerrón, entrevista realizada por Jorge Acero en Nueva Loja, el 10 de octubre de 2017.

Rubén Darío nació en el Hospital Marco Vinicio Iza de Nueva Loja, el 29 de diciembre de 1994, en esa época vivíamos entre General Farfán y Lago Agrio, hasta el 2002, cuando decidimos irnos a Puerto Mestanza para trabajar una finca por la mala situación económica que teníamos. Rubén, como en Puerto Mestanza no había escuela pasaba la semana en casa de una hermana del papá y el viernes Samuel salía a buscarlo para llevarlo a Puerto Mestanza y el domingo lo llevaba de vuelta a Lago.

Y allí, porque él quiso empezó a estudiar contabilidad en el colegio Segundo Orellana, tenía el sueño de estudiar contabilidad y ser un gran empresario, y soñaba siempre con esperanza, decía

para que pensar en que la familia pueda llegar a comprar una casita pequeña, hay que pensar en que podremos comprar una grande y hermosa, decía “hay que soñar a lo grande”.

Nosotros siempre hemos sido de bajos recursos económicos y él lo tenía claro, nos decía que aunque no tuviera para ropa le ayudáramos con el estudio, eso era para él lo más importante, “sólo les pido que me ayuden con el estudio”.

Era muy detallista y cariñoso, especialmente con los abuelos, cordial con la gente y muy colaborador con las personas, hasta el punto de compartir lo que tuviera, comida o dinero, con quien le pidiera.

También era bien juguetón con todo el mundo y con los niños, y le gustaba mucho el deporte, especialmente el fútbol. Y muy maduro y responsable para su edad.

El día que ocurrió, me dijo “mami me voy un momento” y cuando pasó la balacera fui corriendo a buscarlo y ya estaba muerto, pero le dije a la gente que no lo tocara porque yo quería llamar a la Fiscalía y que se supiera que pasó y que no quedara así.

Él era mi alegría, con él aprendí a ser madre, a sufrir, a llorar con sus primeras palabras y a curar sus golpes.

Después de que murió Darío, Leidy tenía 8 años, se quedó como inconsciente, en shock, me decía “mami yo no quiero morirme”, casi pierde el año en la escuela porque desaprendió a leer, no podía y no quería ir tampoco a la escuela; sólo lloraba.

Todavía hoy dice que vive con odio, rabia porque mataron a su hermano los militares, cuando está enferma no sé porque siempre piensa en Darío, es como un trauma que tiene.

Y sobre el caso de Rubén, tienen la esperanza de que sea conocida la verdad y los responsables sean condenados por la muerte de su hijo, así como aquellos que permitieron que no avanzará la investigación en estos seis años. Mantienen su compromiso en seguir luchando hasta que eso pase, por más largo que sea el proceso.